



EL PARTIDO INTRANSIGENTE (PI)

**Ideología, principios,
concepción militante y bases programáticas**

PARTIDO INTRANSIGENTE - COMITÉ NACIONAL
Riobamba 482 – Tel: 4954-2283 - C.P.: 1025
nacional@pi.org.ar - www.pi.org.ar

Introducción

Por Gonzalo Pérez;
Lucrecia Monteagudo y
E. Gustavo Cardesa



Hace tiempo que quienes integramos el Partido Intransigente nos proponíamos una publicación como la que hoy estamos presentando. El momento en el que se concreta no es casual. Es un tiempo en el que se ha revitalizado la discusión política, los alineamientos ideológicos y la militancia.

El 25 de mayo de 2003 comenzó en la Argentina una época distinta. Una época en la que había que dejar atrás décadas de capitalismo financiero y profundización neoliberal. Una época en la que había que construir una transición que dejara sentadas las bases de un país siempre más justo, más soberano, más inclusivo, más solidario.

Néstor Kirchner primero, y Cristina Fernández luego, batallaron en esa dirección. Lo hicieron construyendo legitimidad y poder a partir de defender el rumbo que se plantearon, sin traicionar ni traicionarse. Demostraron que una cosa es medir las fuerzas que se tienen para ir avanzando más rápido o más despacio, siempre en dirección a los objetivos, y otra es el posibilismo de la resignación que entrega sus banderas en la primer batalla.

En apenas siete años se desmontaron las estructuras fundamentales que hicieron de la Argentina un país sumiso a los poderes económicos de adentro y de afuera. La mayor quita de la historia mundial en materia de deuda externa, la autonomía ante el FMI, la baja permanente de la



relación PBI/Deuda, el no al Alca, la profundización del Mercosur y la construcción de la Unasur, la re estatización de empresas que habían sido privatizadas, la recuperación de los aportes previsionales de los trabajadores y trabajadoras que habían sido apropiados por los especuladores financieros, la apropiación colectiva de una parte de la renta de la tierra, las recuperación y permanencia de las paritarias, la recuperación del poder adquisitivo y el incremento de la participación de los trabajadores en el PBI, la incorporación de millones de jubilados y jubiladas al sistema previsional, la movilidad jubilatoria, la Asignación Universal por Hijo, la Ley de Medios de la Democracia, la Ley de Matrimonio Igualitario, son algunas de las medidas por las que siempre luchamos desde el PI y hoy vemos concretadas. Todas ellas marcan un camino y modelan un proyecto de país.

Las mejores expresiones históricas de raíz nacional y popular, herederas del yrigoyenismo y del peronismo pueden verse reflejadas hoy en las concreciones de estos escasos siete años. Es por eso que resurgen con fuerza las corrientes de simpatía, de apoyo y de militancia que ven que vale la pena pelear por un país siempre más justo. Néstor Kirchner y Cristina Fernández enseñaron, en la práctica, que la política puede ser una herramienta de transformación al servicio de las buenas causas. El temprano y triste fallecimiento de Néstor Kirchner visibilizó la fuerza contenida de un pueblo dispuesto a defender los avances y sostener el rumbo. Ese subsuelo de la Patria sublevado, del que nos hablaba Scalabrini, se demostró alerta y dispuesto más que nunca a la acción militante. Millones de personas despidiéndolo en las calles de todo el país, no fueron la expresión de un día de duelo, fueron la demostración – con tristeza, es cierto – de la esperanza que ayudó a construir un gran líder argentino y latinoamericano.

En este contexto de recuperación del debate y de la acción política, editamos nuestros principales documentos partidarios no sólo como forma de dar a conocer nuestras ideas, sino para que constituyan un aporte a la nueva etapa que estamos viviendo.

Los Aportes para el Proyecto Nacional

En medio de una coyuntura política por demás convulsionada, precedida por sucesivos golpes de estado, el General Perón volvió del exilio a partir de una extendida lucha para lograr su retorno, en lo que se denominó el “Luche y Vuelve”, donde vastísimos sectores populares manifestaban así su decisión no sólo de recuperar la democracia, poniendo fin a gobiernos dictatoriales sino también de instalar al General Perón



al frente de un gobierno nacional, popular y profundamente transformador.

De este modo y luego de 18 años de exilio, el General Juan Domingo Perón comienza su tercer período como Presidente de los argentinos.

En aquel complejo momento político, nuestro Partido Intransigente, construyó la Alianza Popular Revolucionaria - APR - junto al Partido Revolucionario Cristiano, al Partido Comunista y otras fuerzas políticas, donde miles de voluntades se sintieron representadas por esa expresión de izquierda nacional que, habiendo luchado también para levantar la proscripción que impedía al General Perón retornar a la Argentina, no formó parte sin embargo del Frejuli. El Frente Justicialista de Liberación fue la alianza entre el Partido Justicialista, el Partido Conservador Popular y otras expresiones de la vida política nacional que resultó triunfadora en las elecciones del 11 de Marzo de 1973 con la fórmula Cámpora - Solano Lima. Luego de la renuncia de Cámpora se realiza la elección de Septiembre de ese año en la que Juan Domingo Perón triunfa por amplia mayoría.

Al año siguiente, a través del Mensaje presidencial del 1º de Mayo de 1974 ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación como también del mensaje al pueblo argentino desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y a través de cadena nacional, Perón desarrolló las ideas liminares que luego constituirían el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional-

En esos dos momentos, Perón habló de la doctrina y de la organización popular para referirse al *“curso irreversible del proceso revolucionario”*, con vocación nacional. También hizo mención *“al tercer mundo donde se ponen de pie pueblos y naciones hasta allí postergados”*.

Expresó además que, a través de su gobierno, se había encarado la reconstrucción nacional, definiendo su objetivo central en la búsqueda de la paz. Desarrolló la idea de integración latinoamericana, integración social, económica y política. Manifestó la existencia de dos únicas alternativas para nuestros países: neocolonialismo o liberación.

Enunció el concepto de la *“tercera posición”*, desarrollando los significados de la palabra liberación en lo político, lo económico, lo socio cultural, lo científico tecnológico. Hay también allí un mensaje para la juventud, para los trabajadores, empresarios, las fuerzas armadas, la mujer, la iglesia.

Expresó finalmente que el Modelo argentino necesitaba de una democracia plena de justicia social.

En cuanto al segundo discurso del 12 de Junio, allí hizo hincapié en que volvía al país para unir a los argentinos y para lanzar un proceso



de liberación nacional, no para consolidar la dependencia; para lanzar una revolución en paz, brindando seguridad a los ciudadanos y para ayudar a reconstruir al hombre argentino, destruido por largos años de sometimiento político, económico y social.

Propició un acuerdo entre trabajadores, empresarios y el estado como base de la política de su gobierno, refiriéndose también a los “vivos” que violan las normas salariales y de precios.

En esas presentaciones no va a faltar una alusión a los diarios oligarcas que insistían con “*el problema de la escasez y el mercado negro*”. Dirá textualmente: “*Siempre que la economía está creciendo y se mejoran los ingresos del pueblo –como sucede desde que nos hicimos cargo del poder- hay escasez de productos y aparece el mercado negro, lo que subsistirá hasta que la producción se ponga a tono con el aumento de la demanda*”.

“*No hay que olvidar que nuestros enemigos están preocupados por nuestras conquistas, no por nuestros problemas*”(....) “*En un año de gobierno ellos advierten que el pueblo sabe, sin acudir a las recetas de miseria y dependencia, que mejoramos el salario real de los trabajadores, bajamos drásticamente la desocupación y aumentamos las reservas de país.*”

Manifestó también que él personalmente había preparado un estudio sobre el Modelo Nacional de acuerdo a su doctrina.

Con esta somera descripción del Modelo Argentino para el Proyecto Nacional enmarcamos el momento histórico en que nuestro Partido, reunido en Córdoba el 13 de Diciembre de 1975 aprobó en sesión de la Convención Nacional partidaria los “Aportes para el Proyecto Nacional”. Nacieron justamente como eso: Aportes. Entendíamos que, como parte del movimiento nacional que busca la liberación de nuestra patria, teníamos que aportar nuestra propuesta político ideológica para la construcción del proyecto nacional. Los “Aportes para el Proyecto Nacional” constituyeron una herramienta ideológica y política que tuvo además el valor de incorporar nuevas generaciones a la militancia, proporcionando un programa contra la dependencia y para la liberación, contribuyendo de este modo al proceso transformador iniciado en esa década.

Bajo el título “Por una sociedad más justa”, los Aportes comienzan analizando ese momento histórico desde el punto de vista mundial hasta llegar a la Argentina, contextualizada en la historia a partir de sus luchas por la independencia del dominio español, las luchas de las montoneras federales en el siglo XIX, el Yrigoyenismo y el Peronismo en el siglo XX, analizando el fenómeno de la dependencia y explicitando que su definitiva superación será el objetivo principal



de todo movimiento nacional.

Expresará que si hay dos sociedades en pugna, habrá dos teorías que la expresen: una regresiva y otra revolucionaria. Analiza luego las dos sociedades en pugna es decir las bases sociales cuyos intereses van a expresar las dos teorías.

Desarrollará luego una estrategia de poder para poder llevar a cabo los objetivos planteados y desarrollará un programa estratégico con las propuestas e instrumentos necesarios para transformar la realidad dependiente y la imperiosa necesidad de la unidad latinoamericana.

Los Aportes se convertirán entonces en el documento fundacional partidario, expresado en su Carta Orgánica Nacional, a través de su primer artículo: *“El Partido se constituye como fuerza política a partir de la denuncia de la subordinación nacional al sistema capitalista dependiente y propone la lucha por una nueva sociedad, más amplia y más justa, asentada en los principios del Humanismo Liberador donde serán socializados la riqueza, la cultura y el poder. Constituyen el Partido Intransigente los ciudadanos argentinos que adhieran a su Declaración de principios y bases de Acción Política y a los Aportes para el Proyecto Nacional.”*

La Convención de Rosario de 1984

Con el fin de la dictadura cívico militar y el advenimiento de la democracia en octubre de 1983, se produce un vuelco masivo de la juventud a la militancia política. Miles de ellos van a canalizar sus inquietudes en el Partido Intransigente. Esta nueva militancia va a tener características diferenciales con las anteriores entre las que se destaca el rechazo de la violencia como forma de acción política. En el Partido Intransigente se van a desarrollar principalmente cuatro frentes: el estudiantil, el gremial, el barrial y el de derechos humanos.

El 29 de junio de 1984 la Convención Nacional reunida en la ciudad de Rosario, luego del análisis de la coyuntura va a desarrollar el siguiente planteamiento: *“Habiéndonos planteado un correcto diagnóstico de la crisis, disponiendo de la base doctrinaria insustituible que constituyen los Aportes para el Proyecto Nacional aprobados por esta HCN en el año 1975 y la propuesta de la coyuntura expresada en la Plataforma Electoral Nacional de 1983, es necesario avanzar resueltamente en la concreción de esas banderas y consignas”*. Para cumplir con el objetivo de construir y articular una voluntad colectiva, en este caso bajo la forma de partido político, aquella Convención va a desarrollar el marco teórico y los métodos para realizar una práctica política acorde con la ideología de liberación que el partido sustenta. Se



va a introducir en uno de los temas más complejos para que la construcción de la unidad de concepción se exprese en forma coherente con la acción política cotidiana: la convicción de que en la práctica militante, en las conductas individuales y colectivas es donde el sistema capitalista dependiente va a debilitarse o a fortalecerse.

La nueva etapa

En el 2007 nuestro Partido decidió, mediante resolución de la Convención Nacional, participar del Frente para la Victoria y apoyar la candidatura a Presidenta de la Nación de Cristina Fernández de Kirchner. No fue el inicio sino la culminación de un proceso de dos años de discusión y elaboración teórica que, en línea con nuestros históricos documentos, produjo una plataforma partidaria como aporte a las propuestas comunes del Frente. En dicha plataforma básicamente expresamos nuestra convicción sobre la necesidad de profundizar el rumbo como única garantía de éxito de la construcción política que sostenga el modelo.

En ese sentido proponíamos afirmar el carácter nacional y regional del proyecto, profundizar la reconstrucción del Estado y la distribución de la riqueza y, fundamentalmente proponíamos la recuperación de los aportes de trabajadores y trabajadoras apropiados por la especulación financiera de las AFJPs, como así también una nueva Ley de Medios inclusiva y desconcentradora y una asignación universal para todos los menores de 18 años.

Estábamos convencidos que la figura de Cristina Fernández era resistida por el establishment justamente porque tenía la capacidad y la decisión de avanzar en ese camino.

Finalmente, en el año del Bicentenario, los intransigentes realizamos un análisis de los siete años del proceso de construcción de un nuevo Proyecto Nacional iniciado en 2003. Allí ratificamos una vez más nuestro compromiso con el rumbo asumido y seguimos caracterizando a la presente como una etapa de transición en la que aún no se ha consolidado el nuevo modelo, que sigue siendo deslegitimado por los sectores económicos dominantes. Se valen para ello de la política del desgaste, de la alianza con los poderes mediáticos y de la utilización de sus voceros políticos.

Por todo ello hoy, más que nunca, el PI redobla su compromiso con el proceso político iniciado en 2003 y pone a disposición del análisis y del debate, las páginas siguientes.

Aportes Para el Proyecto Nacional

(1975)



Por una nueva sociedad más justa

La nueva edad histórica que Yrigoyen anticipara ya está en curso.

La misión histórica del capitalismo ha concluido. La crisis es total, y corresponde a la declinación de un sistema que no puede dar respuestas justas a las necesidades de la humanidad. Es el fin de una forma de vida que con sus prácticas irracionales limita y distorsiona las posibilidades legítimas de los pueblos.

Argentina sufre por la dependencia de ese sistema. Si bien la dependencia es un fenómeno originado en la economía, luego se traslada a todos los estamentos de la sociedad, hasta su plena dominación. Agotado por sus terribles contradicciones, el sistema capitalista dependiente solo ofrece un futuro de escasez, desocupación y gravísimas convulsiones sociales.

Todos los grandes problemas de nuestro país están vinculados a esa realidad. Por lo tanto, su definitiva cancelación constituye el principal objetivo de todo movimiento nacional.

Una política reformista o modernizante no basta para la transformación revolucionaria. La auténtica solución no consiste en mejorar un poco el sistema en crisis; tampoco provendrá de la concentración absoluta del poder en una burocracia totalitaria y represiva.

Para el pueblo no cabe otra alternativa que luchar por una nueva sociedad, más apta y más justa, asentada en los principios del humanismo liberador.

En la nueva sociedad el poder, la riqueza, la cultura, los recursos naturales y los medios técnico-científicos estarán al servicio del Hombre y no de una clase privilegiada; el lucro y el individualismo irresponsable, valores absolutos en la sociedad capitalista, serán suplantados por la solidaridad y la justicia social, la participación popular y la planificación socio-económica de la producción, la distribución equitativa de las riquezas nacionales y el resguardo de los valores espirituales y morales de los seres humanos.

DOS TEORÍAS

Si hay dos sociedades en pugna –la vieja que muere sin remedio y la



nueva en gestación-, también hay dos teorías que la expresan: una regresiva y otra revolucionaria.

Mientras proclama libertades formales y abstractas, la teoría capitalista ampara la descarnada explotación y represión de los pueblos y hombres. La dependencia, la miseria, el analfabetismo, la corrupción y todas las lacras sociales, para el liberalismo económico son hijas de la fatalidad y nada ni nadie puede evitarlas.

Por el contrario, para la teoría revolucionaria la explotación y el atraso no son inevitables. Por eso es la ideología de la esperanza. Su fe en el porvenir no se basa en un irracional presentimiento de soluciones mágicas. Por ser revolucionaria nuestra teoría se asienta en el conocimiento metódico y exacto de la sociedad vieja y en el pronóstico de la nueva sociedad, en la experiencia cotidiana de los pueblos en marcha y en la elaboración de una estrategia y una táctica acordes con las posibilidades argentinas. Intenta la correcta interpretación de los sentimientos colectivos y la incorporación, a su teoría y práctica, de la dinámica transformadora de los movimientos populares.

La teoría revolucionaria exige una evaluación certera de las fuerzas que combaten; de un preciso ajuste entre sus principios, sus tareas y la realidad donde actúa; de la equilibrada compensación entre sus deberes y posibilidades. Y por sobre todo demanda el más estrecho contacto con su única fuente de inspiración y de poder: el pueblo.

Por eso, la ideología elaborada a partir de la teoría revolucionaria no es abstracta y tiene dimensión real; es la guía de la acción popular por la liberación nacional y social.

RESPUESTA A LA CRISIS

La crisis estructural del sistema puede verificarse con relativa facilidad. Cuando en vez de justicia y desarrollo, el poder vigente emplea la prepotencia del terror, es que ese poder ya no tiene vida útil. Está viviendo su muerte y la descomposición queda al descubierto; se desmoronan los mitos, la arbitrariedad gobierna y cunde la inmoralidad.

No hay salvación individual y ninguna parcialidad puede escapar del desastre. Con la tremenda fuerza de los hechos, aparece la única respuesta posible a la crisis: la convergencia de las fuerzas revolucionarias nacionales para dar juntas la batalla por la nueva vida y la nueva sociedad en un país emancipado.

Hasta el presente las fuerzas representativas de interés popular, por variadas diferencias, se han aislado entre ellas. De esa dispersión se beneficiaron los enemigos comunes que sí supieron reunirse cuando sus



intereses fueron amenazados o comprometidos.

Esta experiencia histórica no puede reducirse a un tema más de la especulación intelectual. Es preciso corregirla en la práctica, porque la hora actual reclama la superación de discrepancias secundarias para conformar el bloque emancipador. Ningún participante de las luchas por la liberación debe dejar de intentar la unidad política, para decidir la suerte futura.

En este momento de crisis hacen falta, como nunca, ideas claras, proyectos coherentes y sensibilidades alertas para evitar la frustración colectiva.

La victoria sobre la dependencia y el atraso llegará si se reúnen la orientación esclarecedora con la capacidad de movilización del pueblo en la primera línea de la batalla por la liberación. No hay otro modo de superar la crisis y construir un porvenir diferente.

Con este documento, el Partido Intransigente aporta una guía de acción y una visión del país que tenemos y del modelo argentino que ambicionamos; al mismo tiempo, sus propuestas conforman una plataforma para el diálogo y las coincidencias con aquellos sectores que comparten idénticos anhelos.



SÍNTESIS HISTÓRICA

Un pueblo sin memoria es un pueblo sin porvenir, solo revalorando nuestro pasado a partir de las gestas de resistencia popular, será posible avanzar en la historia inconclusa de nuestra liberación nacional y social.

Hace más de un siglo y medio nacimos a la vida independiente en una era de la historia caracterizada por el tránsito del mercantilismo al capitalismo, signada por los resplandores de la Revolución Francesa y el naciente liderazgo del industrialismo inglés.

En la ejecución de aquel acontecimiento primordial para la patria coincidieron fuerzas diferentes con propósitos no siempre homogéneos; pero, no obstante ello, consiguieron materializar el hecho básico de la independencia en condiciones singularmente adversas, cuando el país se debatía en medio de desgarramientos interiores y cuando la conjura de la reacción colonialista preparaba sus fuerzas para sofocar la naciente libertad americana.

Hacia falta coraje, ese coraje reclamado por San Martín para las grandes empresas, para afirmar los dos términos inseparables de la independencia y la unidad nacional. Así fueron nuestros orígenes; más tarde ese hecho histórico fue desvirtuado hasta dejar el anhelo emancipador recluso en los términos de la independencia política y con el tiempo ni siquiera eso.

La Revolución quedó inconclusa y la causa emancipadora prisionera entre los filamentos de una nueva corona imperial: la Británica.

A partir de entonces las potencias imperiales de Europa rivalizan en su intento de imponer sus intereses comerciales en las ex-colonias españolas, contando para ello con la complicidad de las nacientes oligarquías criollas.

Gran Bretaña fue imponiendo paulatinamente su hegemonía, eliminando a sus molestos competidores y la generación del 80, comprometida con la estructuración de un país dependiente, dentro de las nuevas condiciones económicas creadas por la división internacional del trabajo, se encargó de institucionalizarla.

La genuflexión de las clases dirigentes no logró sin embargo acallar las voces patrióticas y de la propia crisis de ese proyecto oligárquico-dependiente surgieron, a partir de 1890, las corrientes redentoras que habrían de dar expresión, en el siglo siguiente, al primer movimiento popular e-mancipador bajo el liderazgo de Alem e Irigoyen.

Allí se encuentra el acta de nacimiento de la intransigencia en la frase acuñada por Alem «*Yo soy radical intransigente*», con la que estigmatizó



al sector dispuesto a pactar con el régimen, sector que habría de intentar sin pausa, a lo largo de la historia, esterilizar la vocación emancipadora de los movimientos populares.

La historia de la UCR se caracteriza como la historia del país por la lucha constante que en su seno libraron las dos tendencias, la intransigente emancipadora y la acuerdista vinculada a los intereses de la entrega.

El acceso de H. Yrigoyen al gobierno en 1916 significa el triunfo de la causa popular y la incorporación a la vida cívica de vigorosos sectores hasta entonces marginados. Se había dado el primer paso hacia la consumación de la Revolución Democrática en una Argentina donde el ciclo político protagonizado por la oligarquía comenzaba a declinar.

La defensa del patrimonio nacional caracterizado por la política de Yrigoyen en materia de transportes, marina mercante, conservación de la riqueza petrolera y su explotación, la inauguración de un nuevo estilo en materia de política internacional y sus esfuerzos a favor de la justicia social enmarcan los hitos fundamentales de su política.

A través de su caracterización de la «causa» Yrigoyen expresó al país que aspira a vivir con dignidad, ejerciendo su voluntad de autodeterminarse para construir una sociedad justa, donde los derechos humanos adquieren categoría de valores inmutables; por contraposición al «régimen», expresión retrógrada de los pequeños que piensan el país en términos e factoría y el pueblo en términos de tribu. Para él, los hombres debían ser sagrados para los hombres y los pueblos para los pueblos.

La dependencia estaba amenazada y sus personeros no tardaron en reaccionar: el 6 de setiembre de 1930 Hipólito Yrigoyen fue derrocado por un golpe de estado. Con su caída, el pueblo sufrió una dura derrota en su lucha por la liberación. Una vez más la resistencia nacional fue aplastada por la dominación extranjera y sus aliados nativos.

Así nace una nueva etapa caracterizada por el fraude y la entrega que el juicio popular ha denominado «la década infame»; para que ello ocurriera fue necesaria la alianza de sectores contrarrevolucionarios desplazados por el yrigoyenismo y los elementos acuerdistas que desde adentro minaban la entraña del movimiento popular. Su expresión fue la Concordancia: frente a ella, un radicalismo castrado abandona las banderas de la revolución. Como contrapartida aparecen entonces los movimientos reivindicatorios del acervo partidario que tienen su primera expresión en FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina).

En un contexto nacional condicionado por la situación internacional emergente de la segunda guerra mundial, comienza a percibirse la decli-



nación del imperio británico y su sustitución por los Estados Unidos.

Nuestras clases dirigentes carentes de vocación patriótica y de imaginación malograron la oportunidad histórica de lanzar al país por el camino de su definitiva liberación.

A pesar de ello el país se transforma con el desarrollo de la industria liviana; una nueva clase social, el obrero industrial, irrumpe reclamando su participación, no consentida por los grupos dirigentes, en el proceso nacional.

El 4 de junio de 1943 termina la era del fraude, precisamente el día en que, en la Cámara de Comercio Británica, se debía proclamar la fórmula Patrón Costas-Iriondo.

Una nueva etapa del proceso estaba en marcha y el 17 de octubre de 1945 las multitudes se galvanizaban en la búsqueda del rol protagónico que se expresa en la aspiración de volver a ser artífices de su propio destino. El entonces coronel Perón encarna esta nueva fecha símbolo que da nacimiento al segundo gran movimiento popular de este siglo.

La conducción radical en manos de la corriente negadora de la esencia popular revolucionaria de la intransigencia, enfrenta este proceso con su participación en la Unión Democrática, que significaba la reedición de las viejas prácticas acuerdistas con sus tradicionales adversarios.

Simultáneamente en el seno del radicalismo comenzaban a evidenciarse los síntomas de la aparición de una nueva vertiente de las corrientes yrigoyenistas que estaban preanunciando el fin de la conducción claudicante y la formulación de un programa que le devolviera al Radicalismo su condición de fuerza revolucionaria, que había de plasmarse con la fundación del Movimiento de Intransigencia y Renovación, cuya primera manifestación concreta es la declaración de Avellaneda.

Se nuclearon en el mismo movimiento radicales intransigentes de todo el país, pero principalmente de Capital, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires intérpretes de un sentimiento cada vez más generalizado tendiente a recuperar el principismo intransigente, propiciando además una renovación de hombres y métodos para que la gran causa, que había sido desviada desde sus conducciones en su carácter político, social y estaba afectada moralmente en los procedimientos cívicos institucionales en su propio seno, pudieran en adelante cumplir su cometido en la vida nacional; firman el manifiesto inicial, entre otros, Lebensohn, Alende, Pérez Aznar, Roque F. Coulin, etcétera.

El acceso del movimiento peronista al poder implicó incorporar a la vida política argentina a una capa social hasta entonces marginada por el régimen imperante: los sectores más pauperizados de la población, en especial la clase obrera.



El nuevo gobierno concretó una etapa de reivindicaciones sociales y de nacionalizaciones en sectores importantes de la economía; no obstante, se postergaron cambios estructurales que hubieran, en esas circunstancias particularmente propicias, posibilitado la liquidación definitiva de las estructuras de la dependencia.

Sus contradicciones internas, los métodos autoritarios, el culto a la personalidad, el abandono de políticas nacionales en materia energética y la corrupción administrativa, lograron erosionar al peronismo y terminaron causando su caída en 1955.

La política del gobierno de facto se caracterizó por su revanchismo, de manera especial contra los trabajadores y una concepción de la economía inspirada por la mentalidad libre-empresaria al servicio del capitalismo, a la vez que pretendió instrumentar su continuidad apoyado por los sectores conservadorizados de la UCR.

Ello provocó la reacción de la línea intransigente yrigoyenista que impidió la consumación de esta nueva desviación; los escindidos, al amparo de un fallo judicial arbitrario, formaron la UCRP.

El pueblo consagró el triunfo del programa intransigente en 1958, pero la UCRI infccionada por los sectores desarrollistas, archivó el programa provocando con ello una nueva frustración nacional.

A partir de entonces en el seno de la intransigencia se libra una nueva y definitiva lucha que culmina en 1963 con la exclusión del sector responsable de la defraudación. Afirmando sus principios emancipadores, la Intransigencia propuso la realización de una efectiva Revolución Nacional.

En los «lineamientos políticos fundamentales» advirtió en 1964: «El Estado de derecho liberal-burgués se ha mostrado ya sobradamente impotente para consumir la transformación de estructuras y realizar la idea contemporánea de justicia social».

Y en diciembre de 1965, señaló que «el cambio social que imponen los nuevos tiempos no puede ser la bandera de un solo partido o sector de la vida nacional».

Puntualizó que «se requiere la influencia poderosa e irresistible de las mejores energías de la comunidad argentina» y convocó al diálogo para «plasmear un programa sobre bases de coincidencias fundamentales».

En 1972 el yrigoyenismo revolucionario se organizó políticamente como «Partido Intransigente».

En las primeras reuniones del Frente Cívico de Liberación Nacional (Frecilina) el Partido Intransigente exigió la adopción de un claro programa de liberación nacional.

Como ello no se obtuvo y dado que algunos sectores que lo integraban



no eran garantía para la concreción del mismo, el Partido no participó del Frente Justicialista de Liberación Nacional (Frejuli).

En la coyuntura electoral de 1973 reivindicó esa propuesta en el marco de coincidencias esenciales a través de la Alianza Popular Revolucionaria (APR), cuya presencia presenta un hecho nuevo en la política nacional.

Despojados de artificiales reservas y anacrónicos prejuicios el Partido Intransigente marcó una apertura a amplios sectores populares, que no toleran una sociedad injusta y excluyente.

La alternativa de la APR nucleó a un importante sector de las jóvenes generaciones que se sintió interpretado por objetivos que se proyectan más allá del acto electoral y que aparecen explicitados en el programa de liberación nacional del Partido Intransigente.

Ese programa sostiene que la revolución nacional es el único camino para la liberación del pueblo de toda dependencia y de toda opresión económica, política y cultural; el único camino hacia la socialización del poder, la riqueza y la cultura.

El apoyo electoral obtenido por la APR en 1973, confirmó la validez de la propuesta de convergencia revolucionaria. Sobre todo si se toma en cuenta que siendo el eje de aquellas elecciones el repudio masivo a las oligarquías nativas y sus mandantes imperiales, el pueblo buscó concentrar sus votos en una sola de las fuerzas políticas representativas de su interés, produciéndose así una acentuada polarización.

El tiempo transcurrido mostró que aquella polarización devino enforzada opción, al tradicional estilo conservador, entre dos agrupaciones, la UCR y el Justicialismo, pese a que entre ambas detuvieron el impulso transformador contenido en los votos mayoritarios del 73.

Ante esa realidad, el Partido Intransigente está más convencido que nunca de la única vía posible hacia la revolución, por eso propugna y seguirá propiciando la convergencia de las fuerzas revolucionarias, porque esa es la única unidad nacional valedera, la unidad para la liberación.

EL SISTEMA EN CRISIS

Nuestro país no vive una crisis particular; la debacle es total en el sistema del que forma parte. Corresponde a la declinación de una forma de vida asentada en la práctica irracional de los más arbitrarios mecanismos de explotación.

La necesidad de ahondar en la comprensión de las dinámicas realidades del presente histórico, aparece como imperativo si se pretende cum-



plir con la esperanzada tarea de remover los obstáculos hacia el bienestar futuro, ya que muchos fracasos fueron causados por la incomprensión de las fuerzas políticas ante las exigencias de los tiempos o por la preservación de actitudes o mecanismos de organización social superados por el desarrollo humano y social.

La naturaleza del capitalismo es una suma de derroche y desorden. Si bien en cada unidad de producción hay métodos de alta racionalidad para conseguir el máximo beneficio, en la totalidad del sistema lo que predomina es la irracionalidad y el despilfarro. Valga como ejemplo un dato bien conocido: la destrucción de cosechas por razones de orden económico en un mundo donde millones de seres humanos mueren de hambre.

Si la inequidad domina al conjunto, en el plano individual no bastan, en general, la capacidad de sacrificio o de talento para acceder a la mentada «igualdad de oportunidades»; solo el poder del dinero abre las puertas del régimen.

Como resultado, el mundo se estremece por la avalancha de calamidades. El hambre, la corrupción, la desocupación, el alza del costo de la vida, la inflación y la recesión, el analfabetismo, la usura, la discriminación racial y la persecución ideológica son solo algunos de los suplicios



que atormentan a millones de hombres en este orden caduco, particularmente en América Latina, Asia y África.

PERFIL DEL RÉGIMEN

Así como en la nación hay una minoría que disfruta las riquezas producidas por la comunidad, en el mundo las metrópolis imperiales, con Estados Unidos a la cabeza, alimentan su poderío con la miseria de los pueblos. Para sostener tanta injusticia necesitan de una división internacional del trabajo que contemple sus requerimientos antes que las posibilidades nacionales.

Todo vale para el poder imperial: el bloqueo económico, el chantaje financiero, la compra de dirigentes y partidos, el asesinato, la presión política y hasta la intervención armada, son sus recursos habituales en las áreas bajo su influencia dominante. Santo Domingo y Chile, entre otros, son trágicos rostros del escenario imperialista en América Latina.

No hay dudas, nada puede esperarse del régimen imperante. Ni los inmensos recursos naturales, ni los descubrimientos científico-tecnológicos podrán ser utilizados para provecho del ser humano, mientras los valores distintivos sean:

- La maximización de beneficios como única meta de las unidades de producción.
- La posesión de las riquezas por parte de individuos que las usufructúan, sin sentido social, haciendo caso omiso de los sufrimientos del pueblo.
- La producción sobre la base exclusiva de las ganancias y de la especulación.
- La inversión del capital solo en los sectores de mayor rentabilidad, sin ninguna propuesta de desarrollo equilibrado y sostenido.
- La oferta y la demanda como elemento regulador de la economía.
- La intermediación parasitaria y la existencia de sectores improductivos.
- La descontrolada iniciativa que caracteriza al inestable equilibrio del capitalismo.
- La explotación de los pueblos en beneficio de algunas potencias.
- La concentración del poder de decisión en gigantescas empresas multinacionales.
- Los intereses armamentistas que cimentan su progreso en la permanente existencia de focos bélicos.
- La coerción y la violencia como réplica a las legítimas demandas de los pueblos y naciones sometidas.



Cada uno de estos rasgos, y todos en su conjunto, están expuestos con brutal crudeza en la realidad cotidiana del mundo. Incluso se han agudizado al producirse durante las últimas décadas la integración del sistema bajo la hegemonía de los Estados Unidos. Lo que significa el control total de los monopolios y la ilimitada expansión de las corporaciones multinacionales. Todo ello, asentado en la apropiación individual del trabajo social, la forma más primitiva y descarnada de explotación.

Sobre la compleja trama de intereses materiales que conforman el poder imperial, se levanta una arquitectura política cultural e ideológica que lo ampara y lo auspicia y es tan opresor como sus formas materiales porque su inteligencia está destinada a justificar la iniquidad y la dependencia. Su propuesta ideológica es hipócrita y escapista porque intenta presentar un mundo ideal, de libertades abstractas y formales, de promesas fraternales para un futuro que nunca llega y de una paz apuntalada por los mercaderes de la guerra.

El propósito es claro: se trata de adormecer conciencias, de apagar toda luz de rebelión, de frenar la lucha por un porvenir mejor.

EL DRAMA NACIONAL

La vida argentina está impregnada de imperialismo; sus estructuras económicas, sociales y culturales infiltradas por la dependencia. Atrapada en el proyecto hegemónico norteamericano y en los intereses de las empresas multinacionales carece de poder de decisión para determinar su propio destino como nación soberana.

La carencia de autonomía para el desarrollo es la causa esencial del drama nacional; por ese motivo sufre una crisis profunda y permanente. Al actuar sobre toda su estructura, esa deficiencia crónica multiplica las expresiones del atraso, tales como las siguientes:

- Acentuada desigualdad en la distribución del ingreso nacional.
- Desarrollo desigual, lento y descontrolado; presencia de áreas de pobreza en un país pleno de recursos naturales.
- Pérdida del poder adquisitivo del salario; inflación creciente e incontenible.
- Desocupación, sub empleo y graves conflictos laborales; necesidad del doble empleo para subsistir.
- Persistencia de latifundios que estancan y disminuyen la productividad agropecuaria.
- Industrialización dependiente; importación de tecnología casi siempre inadecuada a nuestras propias demandas de desarrollo.
- Lento crecimiento demográfico y vastas porciones desérticas del te-



territorio nacional, sin presencia humana que respalde la soberanía territorial.

- Analfabetismo oculto por datos estadísticos que distorsionan la realidad; elevados porcentuales de deserción y repetición en todos los niveles de la enseñanza; desaprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y científicos por falta de planificación.

- Difusión de enfermedades y muertes por desnutrición; ausencia de un sistema nacional de salud que asegure prestaciones preventivas e igualitarias.

- Inestabilidad política originada en el desequilibrio económico social y en la incapacidad de los grupos dominantes para resolver los problemas argentinos.

- Retroceso político-económico de Argentina en el mundo y especialmente en América Latina.

- Violencia social; terrorismo individual; proscripciones y censuras políticas e ideológicas; destrucción y asesinatos.

- Antagonismos inter-sectoriales (ciudad vs. campo, provincias pobres, etc.) nacidos de la especulación y del crecimiento inarmónico.

- Debilidad operativa y subordinación logística y tecnológica en la defensa nacional.

Es imposible negar que los datos consignados vienen registrándose desde hace décadas sin resolución alguna. Los problemas de fondo persisten y a medida que pasa el tiempo, la dimensión de la crisis permanente alcanza niveles alarmantes, alejando cada vez más la posibilidad de superar el desastre.

El drama nacional no tendrá nunca final mientras el modelo capitalista-dependiente siga regulando la vida argentina.

El cambio indispensable, claro está, no pasa por la simple modificación de las formas del sistema vigente porque solo se lograría así perpetuar la dependencia.

Tampoco aportará soluciones la formación de un súper poder donde el interés colectivo sea reemplazado por las apetencias de una burocracia totalitaria.

Ni cambios de guardia en el statu quo, ni jerarquías omnímodas para la salvación nacional. El Partido Intransigente demanda la transformación revolucionaria de la Argentina y luchará como siempre por un ordenamiento social en igualdad, justicia y libertad.

EL NACIONALISMO POPULAR REVOLUCIONARIO

Todo proyecto nacional supone una teoría y una práctica política. No



basta con negar la existente, se requiere afirmar lo por venir. La revolución nacional importa en primer término una toma de conciencia sobre el agotamiento del modelo capitalista-dependiente, pero al mismo tiempo reclama la reflexión acerca de los medios, del camino de la filosofía para superar el esquema establecido, y construir el nuevo.

En el siglo XX dos grandes movimientos nacionales intentaron profundizar el proceso de liberación. El yrigoyenismo, que produjo una revolución democrática posibilitando la participación de las mayorías populares y el peronismo que realizó su propia experiencia, dando lugar a una trascendente reforma social que ubicó al movimiento obrero organizado al nivel de los otros factores de poder.

Queda pendiente como tarea para este tiempo la tercera etapa de esa línea de resistencia nacional y popular: poner fin a la dependencia y a la dominación oligárquico-imperialista.

Las banderas del nacionalismo popular revolucionario expresan justamente los tres ejes rectores para la actual etapa de lucha:

El nacionalismo vale como expresión de una política anti imperialista, de afirmación de nuestra soberanía nacional y de integración latinoamericana.

Es popular, porque se basa en destruir los mecanismos elitistas del proyecto oligárquico y dar participación a las mayorías, a la vez que garantiza la justicia social.

Es revolucionario porque lucha para quebrar la dependencia, cambiar las estructuras y crear una sociedad nueva, donde serán socializados el poder, la riqueza y la cultura.

La Intransigencia, como expresión del nacionalismo popular que se desarrolla históricamente desde la línea del yrigoyenismo revolucionario, ha asumido la tarea transformadora y creativa de llevar hasta su culminación el proceso de liberación nacional y social.

LAS TRAMPAS DEL ENEMIGO

La experiencia ha demostrado que las fórmulas mágicas no existen; para lograr resultados justos se requiere ante todo políticas justas. No habrá liberación nacional y social sin una acertada orientación, una organización eficiente y una política revolucionaria, nacionalista y popular.

La tarea es ardua y el objetivo ambicioso. No podrá cumplirse en un día ni la victoria será fácil. El enemigo es artero, poderoso y posee aún amplio campo de maniobras.

Es posible, a esta altura, identificar algunos de los procedimientos ha-



bituales de la coalición oligárquica-imperialista. Hay que alertar al campo popular sobre esas maniobras, cuyo esquema básico suele expresarse mediante:

La presión directa o indirecta de los grupos de poder, locales y foráneos, para limitar, distorsionar y detener la acción de las fuerzas revolucionarias, llegando si es necesario al empleo de la violencia y el genocidio.

La propuesta de falsas soluciones, rotuladas de muy diferentes maneras –desde las falaces «batallas por el autoabastecimiento» hasta las utópicas promesas de «nación-potencia»-, cuyo único objetivo es frustrar una y otra vez la voluntad nacional, para dejarla inerme ante el avance del bloque imperial.

A veces estos procedimientos se benefician de otro tipo de flaquezas. Son las que se originan en el propio campo popular y revolucionario, como consecuencia de la impaciencia, del dogmatismo o de los prejuicios, que inducen a caer en la trampa tendida por los adversarios, con sus falsas opciones y sus interesadas prevenciones. También en estos casos es preciso mantenerse alertas contra las ilusiones equívocas que propician objetivos ideales pero inalcanzables, porque desconocen básicamente la realidad del momento histórico que nos toca vivir.

UNA ESTRATEGIA PARA LA EMANCIPACIÓN

Así como el liberalismo económico es la ideología de la dependencia, el nacionalismo popular revolucionario es la ideología de la liberación nacional y social. En sus principios se nutre la estrategia para forjar el proyecto de desarrollo autodeterminado, cuyas características esenciales son:

La participación popular como única manera de garantizar la victoria y respaldar el proceso emancipador.

La ejecución de una política agraria, cuyo inmediato objetivo será evitar que la tierra siga constituyéndose en un bien de renta y especulación, realizando una reforma agraria que elimine el latifundio y el minifundio y haga de la tierra un bien social de producción.

El desarrollo de la industria básica, una política económica exterior independiente y soberana, el aprovechamiento integral de nuestras riquezas naturales, que son fuentes de progreso y desarrollo capaces de neutralizar cualquier intento de bloqueo o chantaje imperialista.

El programa científico-tecnológico que permita retener en el país a los cerebros que hoy emigran; evitar el desangramiento de la economía nacional por la importación de patentes, pago de royalties y otras formas de dependencia tecnológica que no sean útiles para la estructura pro-



ductiva.

El rescate del acervo cultural de la Nación, adecuado a los avances del pensamiento humano y el reemplazo del egoísmo individual e irresponsable por la filosofía de la solidaridad social que garantiza la realización del individuo.

La integración latinoamericana, sobre la autodeterminación de cada nación, para enfrentar las políticas imperiales y realizar en común las tareas de la emancipación en la Patria Grande, como lo quisieron los fundadores de la América Libre y en base a la común oposición a toda forma de dominio.

En la sociedad a la cual aspiramos sus actividades serán planificadas para que la producción y la riqueza tengan un carácter social, partiendo del reconocimiento de que su origen es el trabajo creador de la comunidad. Solo así será posible que el trabajo deje de ser un modo de servidumbre y alienación para convertirse en una actividad liberadora y socialmente útil

EL PUEBLO COMO PROTAGONISTA PRINCIPAL

La estrategia para la liberación nacional se fundamenta en la movilización integral de la capacidad humana, porque no hay mejor seguro contra el burocratismo, el reformismo estéril y los ciegos extremismos que la participación del pueblo.



Despertar la participación política colectiva es un principio que debe ser aplicado en todas las instancias, desde la producción y la cultura, hasta la administración pública y las organizaciones sociales. En la sociedad que proponemos los hombres deberán ejercer directamente o con el mínimo de intermediación, todas las formas de participación en las escalas económicas, sociales, políticas y culturales. Un ordenamiento social justo exige destruir todos los privilegios y tener conciencia de que perder un privilegio no es sacrificar un derecho sino restablecer la presencia de una justicia que siempre debió ser respetada.

Esta participación debe comenzar desde el mismo momento de la lucha liberadora. Ningún país es fuerte si la mayoría de sus habitantes no se interesa en la defensa de la soberanía y la integridad nacional. El Estado no es el Estado-gendarme, que reprime y castiga, sino el estado que se apoya en un sólido frente interno y en una sana economía.

El primer deber del Estado, por consiguiente, es garantizar a cada ser humano la seguridad de ser dueño de su propio destino, sin que su origen social o herencia económica constituyan una limitación. El grado de voluntad y de inteligencia, la personalidad de cada ser humano serán certificado suficiente para tener derecho a la educación, al trabajo, a la cultura y ala salud, en el marco de una sociedad igualitaria donde los intereses de grupo queden subordinados a los intereses sociales.

CONFLUENCIAS NECESARIAS Y POSIBLES

En el vacío político o en el vacío social no puede formularse, ni mucho menos realizarse, ningún plan transformador. Lo primordial es asegurar la participación protagónica del pueblo y la colaboración leal entre las fuerzas revolucionarias.

La historia contemporánea demuestra que si bien los trabajadores, como agentes activos de la producción, son el motor de todo proceso de liberación, no se puede instrumentar un proyecto nacional revolucionario –y con mayor razón en Argentina por sus estructuras sociales- sin el concurso de los sectores medios, los pequeños y medianos empresarios y sin la coincidencia del poder político, el poder económico, el poder social y el poder militar unidos en la defensa de los objetivos nacionales determinados por la voluntad popular.

La convocatoria de la hora incluye a todas las fuerzas realmente interesadas en la revolución nacional, para que confluyan hacia un gran movimiento popular que expresa la continuidad histórica del grigoyenismo y del peronismo y sea la síntesis de la tercera etapa de afirmación popular. A partir de los intereses comunes, dejando de lado



las formas para atender a los principios, el movimiento nacional, popular y revolucionario conquistará y realizará el proyecto nacional y el nuevo modelo de sociedad que nos libere definitivamente.

Existen convergencias programáticas que ya ofrecen alternativas ciertas para la coincidencia. No se trata de una mera recopilación documental y libresca, sino la observación lisa y llana de lo ocurrido en las últimas confrontaciones electorales. Más del 80 por ciento de los ciudadanos depositaron su confianza en promesas programáticas de distintas fuerzas políticas que eran coincidentes en su visión de futuro.

Frente al incumplimiento del programa es imperativo aglutinar las fuerzas populares a fin de garantizar la concreción de los objetivos fijados.

¿CUÁL LEGALIDAD INSTITUCIONAL?

Es cierto que la revolución nacional y popular será ante todo una revolución argentina, sin retóricas ni modelos importados.

Por lo tanto, sus instituciones y sus mecanismos de cambio tendrán que sustentarse ante todo, en las características propias del ser nacional.

Resulta indispensable introducir modificaciones importantes en los criterios imperantes. No basta hablar de instituciones o legalidad, como hacen algunos, para garantizar la justicia social y el desarrollo. Mencionarlas en el vacío, sin darles un contenido concreto, lo único que logra es desprestigiar a esas instituciones y a esa legalidad.

La mera legalidad formal es tan vacua como su inexistencia; para lo único que sirve es para justificar la subsistencia del régimen capitalista-dependiente. Si la legalidad no sirve para construir la independencia económica, política, social y cultural, pierde su legitimidad, se convierte en una fórmula abstracta, sin ningún valor. Si en lugar de estimular la liberación, consolida las formas de injusticia, la legalidad se convierte en un instrumento de opresión. Con esa legalidad retaceada, deformada, yerma, se engendra la violencia que termina por arrasar con todas las instituciones.

El Partido Intransigente define a la institucionalidad por su condición revolucionaria, sin maniqueísmos ni estridencias. Su convicción es que la violencia y la injusticia son dos caras de una misma situación y por lo tanto inseparables. No es cuestión, entonces, de ser más violentos o más injustos que el propio sistema. El más efectivo remedio es cegar la fuente de la violencia y de la injusticia, es decir, ponerle fin al régimen capitalista-dependiente.

Como lo quiso Yrigoyen, en precursora definición de lo que hoy es



conciencia en el Tercer Mundo, luchamos por un mundo donde «los hombres sean sagrados para los hombres y los pueblos para los pueblos».

La participación popular, el nacionalismo económico, la justicia social y la integración latinoamericana, son los pilares de la anhelada nueva sociedad, construida en función de nuestras mejores tradiciones, de las experiencias, del momento histórico, de las estructuras productivas y del equilibrio y dinámica de las fuerzas actuantes. El programa de la Intransigencia, con el pueblo de protagonista, es una bandera de lucha por el porvenir.

EL PROGRAMA CONTRA LA DEPENDENCIA Y POR LA LIBERACIÓN

Un programa político no es la mera enunciación de objetivos ideales que luego en la práctica se desnaturalizan u olvidan. Es mucho más que eso; ante todo es una respuesta a la situación que se quiere modificar y por lo tanto, es una bandera de lucha.

Para ello se requiere conocer el perfil de cada elemento de esta sociedad en la dependencia. A partir de esa realidad se esbozan proyectos reales para la liberación, que son reivindicaciones actuales y tareas futuras para el nuevo Estado y la nueva sociedad. Con ese criterio, el Partido Intransigente expone al pueblo su plataforma programática que es también su compromiso de lucha y su promesa de realizaciones.

EL ESTADO

EN LA DEPENDENCIA

Como expresión del sistema capitalista-dependiente es un instrumento coercitivo; padece de un burocratismo paralizante que lo ha convertido en un deficiente administrador y no actúa en función de una política de desarrollo autodeterminado

PARA LA LIBERACIÓN

- Será nacional, revolucionario y asegurará e implementará formas de plena participación popular.
- Garantizará el respeto de los derechos humanos, políticos y sociales.
- Se instrumentará sobre la base de la democracia representativa, reconocerá el pluralismo ideológico e incorporará formas de participación



popular directas.

- Facilitará a cada persona el acceso a los medios indispensables para ser artífices de la propia vida, sin limitaciones de origen social o económico.
- Dirigirá y orientará las inversiones, procurando un más rápido y armonioso crecimiento de la infraestructura y la capacidad productiva de la economía.
- Ejecutará políticas de descentralización y regionalización en los más diversos niveles, para lograr la efectiva integración económica y territorial y la vigencia real del federalismo.
- Afirmará la autonomía política, económica y social de la comuna como célula básica de la administración pública.
- Establecerá la función social de la propiedad, subordinándola al bien común.

PARTICIPACIÓN POPULAR

EN LA DEPENDENCIA

La ausencia de organizaciones que canalicen la participación directa y el control de los actos de gobierno, conjuntamente con los restantes males de la dependencia, son causas que han concluido por profundizar y generalizar los conflictos hasta límites de extrema disociación social.

Esta situación, que niega un derecho adquirido por el pueblo en su larga lucha por la igualdad, hace imperativo superar los intereses de privilegio, para alcanzar una más efectiva y creciente participación popular, en pro de un sólido frente interno que asegure el proceso de liberación nacional.

PARA LA LIBERACIÓN

- Democratizará la vida sindical introduciendo prácticas que aseguren el control y la participación real de los trabajadores en las actividades gremiales.
- Asegurará la existencia de Partidos Políticos e implementará mecanismos de participación directa por parte de sus afiliados.
- Dará participación a los trabajadores en la gestión empresarial, tanto estatal como privada.
- Hará efectiva la presencia de los productores y los trabajadores en los organismos de planificación y comercio exterior.
- Facilitará las organizaciones comunitarias y barriales para que actúen en defensa de sus derechos, en el control de los servicios públicos y



en campañas de salud, educación y bienestar.

PLANIFICACIÓN NACIONAL

EN LA DEPENDENCIA

El país crece, pero desordenadamente, sin una orientación definida que le de sentido de futuro y estímulo a la mayoría de sus habitantes. El desarrollo relativo es inarmónico, desigual, inestable y desequilibrado como consecuencia de una estructura económica sujeta a las ambiciones de un grupo de empresas o sectores, los que se guían por el exclusivo interés de ampliar constantemente su rentabilidad, aún a costa del porvenir nacional.

PARA LA LIBERACIÓN

● La planificación económico-social será obligatoria para los sectores públicos y privados, a fin de garantizar el desarrollo integrado.

● Basará su esquema de acción en mecanismos de consulta y decisión colectiva que aseguren la participación dinámica y permanente de todos los sectores incluidos o interesados en el proceso de planificación nacional.

● Definirá las áreas y sectores de la producción a cargo del Estado y los que corresponden a la actividad privada nacional o extranjera, para que ambas –estatal y privada- puedan desenvolverse con estabilidad y provecho para el conjunto nacional.

● Orientará las inversiones públicas –el factor más activo y dinámico del desarrollo- hacia aquellos sectores que permitan el crecimiento acelerado, independiente y armónico de la economía nacional.

● Evitará la degradación del medio ambiente, protegerá las reservas naturales y alentará todo esquema social que no tenga al consumo como único acto protagónico de la vida colectiva.

● Practicará un sistema de estímulos y emulación para incorporar más rápidamente a las normas de planificación a los productores, los trabajadores, los organismos y las unidades de producción.

● Rechazará todo esquema centralizador o verticalista para su elaboración y ejecución, porque ello supone un serio riesgo de burocratización en la medida que limita el interés, la creatividad y la respuesta activa del conjunto económico-social.

● Propenderá a la descentralización operativa de las regiones geoeconómicas.



CAPITAL EXTRANJERO

EN LA DEPENDENCIA

Desde 1957 a la actualidad, la liquidación de obligaciones financieras exigió egresos por valor de 3.510 millones de dólares, mientras que los ingresos netos de capital alcanzaron a 547,7 millones. Por lo tanto, por cada dólar ingresado al país salieron 6,5 para saldar deudas anteriores. Entre 1970 y 1974 los servicios financieros con el exterior superaron en 42 veces el financiamiento externo recibido. Además, su acción limita directa o indirectamente la autodeterminación nacional en la medida que busca solamente acrecentar su interés particular; acentúa la deformación geopolítica del país y sostiene, como columna principal, el régimen capitalista-dependiente.

PARA LA LIBERACIÓN

- Será canalizado hacia aquellos sectores que permitan su óptima utilización, en áreas predeterminadas por el Estado de acuerdo a las condiciones que este fije.



SISTEMA FINANCIERO, BANCARIO Y TRIBUTARIO

EN LA DEPENDENCIA

Las radicaciones de capital extranjero en los sectores productivos son casi inexistentes, predominan las transacciones financieras de corto plazo y los créditos comerciales destinados a financiar la importación de bienes de capital y los préstamos ya obtenidos. La incapacidad

funcional del Banco Central y de las instituciones oficiales de crédito, el desorden del régimen impositivo, agobiante y plagado de injusticias, desalientan al inversor y al ahorrista de nuestro país y favorecen la inversión especulativa y las maniobras de la usura y del contrabando. No hay control ni represión eficaz de la fuga de divisas; diversos son los mecanismos por medio de los cuales las empresas extranjeras sacan ilegalmente, divisas del país. Por ejemplo: sobrefacturación de las importaciones; subfacturación de las exportaciones; exageración de los gastos de servicio, de los gastos de publicidad y de los gastos de patentes; falsas facturaciones de compraventa; falsas amortizaciones y falsas nuevas inversiones. Solo en materia de sobrefacturación de las importaciones, los cálculos disponibles indican que en los últimos tres años se ha evadido la impresionante suma de 2.400 millones de dólares, alcanzando el porcentaje de la maniobra algunos «picos» de sobresalto: 70 por ciento en enero y 74 por ciento en febrero de 1974.

PARA LA LIBERACIÓN

- Serán estatizados la banca, el crédito y el seguro, con excepción de los fondos movilizados por el sistema de crédito auténticamente cooperativo.

- El Banco Central tendrá a su cargo en forma exclusiva y excluyente la tenencia y negociación de divisas. Las transgresiones serán penadas severamente.

- En materia de inversión y crédito ocuparán la atención prioritaria los siguientes rubros: agropecuarios, extractivos y mineros, incremento de las disponibilidades energéticas, desarrollo integral y autónomo de las industrias de base, actividades e industrias de bienes exportables, construcción de viviendas e industrias productoras de bienes de consumo esenciales para la población y todo otro rubro contemplado por la planificación nacional.

- Para conseguir la plena disponibilidad de los recursos bancarios y financieros se desalentarán las actividades rentísticas e intermediarias y se eliminará toda forma de actividad usuraria, por tratarse de ocupaciones socialmente inútiles y parasitarias.



- Se orientarán los créditos a las actividades de los sectores auténticamente cooperativos.
- La política fiscal actuará como instrumento de reajuste estructural y de redistribución del ingreso nacional.
- El régimen tributario será modificado, eximiendo al trabajo y al consumo popular y se instrumentará sobre la base de criterios prácticos y equitativos.
- Eliminará progresivamente los impuestos indirectos, sustituyéndolos por los que gravan a la renta y a los patrimonios.
- Defenderá, como cuestión de interés nacional, el poder adquisitivo de la moneda.

COMERCIO EXTERIOR

EN LA DEPENDENCIA

En los últimos cuarenta años la participación de nuestro país en el comercio internacional pasó del 3 al 0,4 por ciento del total mundial. Una visión dramática de esta realidad la da la constatación de que mientras hace 50 años exportábamos un promedio de 300 dólares por habitante, actualmente apenas superamos los 80.

El manejo comercial de la producción argentina exportable padece de un alto grado de concentración, a lo que se suma el origen foráneo de algunas empresas; todo esto atenta contra la autonomía nacional porque no hay ninguna traba que impida las maniobras monopólicas en la negociación de las exportaciones.

Es posible afirmar que esta intermediación absorbe 640 millones de dólares anuales. Por fin el deterioro en los términos del intercambio (el país vende su producción cada vez más barato y compra las manufacturas e insumos industriales cada vez más caros) opera como una bomba de succión de las riquezas y los esfuerzos argentinos.

PARA LA LIBERACIÓN

- Será nacionalizado en todas sus etapas hasta su destino final, mediante la intervención de un ente que se integrará con representantes del Estado y los productores, organizados en forma tal que se asegure su auténtica representación, en concordancia con los objetivos fijados por la planificación nacional.
- Fomentará la captación de nuevos mercados y la expansión de los existentes, tanto para nuestros productos tradicionales como para las



manufacturas no tradicionales.

- Suscribirá acuerdos bilaterales y multilaterales de mediano y largo plazo para colocar regularmente los excedentes de nuestra producción a precios remunerativos.

- No aceptará ninguna barrera levantada por razones de orden político o ideológico.

- Promoverá la integración económica latinoamericana.

COMERCIO INTERIOR

EN LA DEPENDENCIA

La intermediación innecesaria y muchas veces de mero «pase», rebaja la ganancia del productor y encarece artificialmente el precio de venta al consumidor.

En el rubro hortalizas, por ejemplo, la participación del productor se reduce al 8 por ciento del precio de venta al consumidor; el 92 por ciento restante se distribuye entre intermediarios.

La monopolización de algunas áreas, además, provoca distorsión del mercado y alzas especulativas del costo de productos de primera necesidad.

PARA LA LIBERACIÓN

- Promoverá las cooperativas de producción, distribución y consumo y creará mercados de concentración urbanos y regionales que aseguran el abastecimiento de la población, sin la influencia de la intermediación parasitaria y de las maniobras monopólicas.

- Creará un fondo compensado para productos agropecuarios, a fin de asegurar mercados y precios mínimos a los productores.

- La especulación y las maniobras de desabastecimiento serán severamente penadas.

- Penará con todo rigor a quien destruya la producción para elevar los precios.

POLÍTICA EXTERIOR

EN LA DEPENDENCIA

La orientación de la política exterior se ha caracterizado desde hace



décadas por la falta de un rumbo cierto, afín con los intereses nacionales. Sus rasgos más salientes son: dependencias de los centros externos del poder; carencia de una clara afirmación de soberanía en los conflictos limítrofes, en los Mares del Sur, Territorios Antárticos e Islas Malvinas; ambigua y contradictoria participación en los organismos internacionales; dubitaciones y retrocesos en el tratamiento de cuestiones vitales, en especial las referidas a la energía y cuencas hidrográficas; ausencias de políticas o actitud directamente prescindente frente a los procesos emancipadores del Tercer Mundo; aceptación intermitente de fronteras ideológicas trazadas por la geopolítica imperial.

PARA LA LIBERACIÓN

- En aras del interés nacional se afirmarán:

- La soberanía

- La seguridad

- El desarrollo independiente

- Se opondrá activamente a todas las formas de imperialismo y apoyará los movimientos de liberación tendientes a abolir el colonialismo y el neocolonialismo en todas sus manifestaciones.

- Respalda la integración latinoamericana y la interacción con todos los países del Tercer Mundo.

- Revisará y denunciará los convenios, tratados y acuerdos internacionales cuando contradigan, se opongan o entorpezcan el interés nacional y los fines de la integración latinoamericana.

- Promoverá la creación de un organismo latinoamericano en sustitución de la OEA.

- Apoyará el Sistema Económico latinoamericano (SELA)

- Definirá soluciones inmediatas y categóricas con respecto a las Islas Malvinas, cuencas hidrográficas e integridad territorial.

RÉGIMEN DE TIERRA

EN LA DEPENDENCIA

Latifundios improductivos, capitales inmovilizados, minifundios cuya superficie es incapaz de proveer a un nivel de vida medianamente digno. La tierra constituye un bien de especulación y no de producción. Es el símbolo de status social por excelencia. El régimen de propiedad indica, según datos de 1975 del Consejo Agrario Nacional, que en la provincia de Bs. As. hay 60.455 propietarios para 2.049.206 hectáreas, en tanto



que 15.068.863 hectáreas (más del 50% del total productivo) están en manos de 6.075 propietarios terratenientes.

La mayoría de las tierras permanecen ociosas o su producción está muy por debajo de su capacidad potencial. La zona pampeana, que es la que concentra la riqueza agrícola y un 80% de la producción ganadera, apenas tiene bajo cultivo un 38% del total de la tierra censada.

En general, el uso del suelo en nuestro país es muy deficiente, estimándose que más de la mitad de la tierra se explota en forma inadecuada. Hoy, con más del doble de población que cuarenta años atrás, se destina menos superficie que entonces a la siembra de trigo y maíz.

A esta situación debe sumársele la baja productividad, que comparada con la de otras partes del mundo, pone de manifiesto el retraso nacional: trigo, Argentina 1.300kg. por hectárea, Europa 4.000kg.; maíz, Argentina 2.400kg., Estados Unidos y Canadá 5.000kg.

Estas realidades demuestran que la incorporación de tractores y maquinaria agrícola efectuada en los últimos años no incrementó la superficie sembrada ni la productividad, ya que la simple tecnificación es insuficiente para solucionar el problema agrario, que no hay salida mientras se mantengan los patrones tradicionales de tenencia de la tierra y se continúe determinando en forma incorrecta el precio final que percibe el productor.

Al encontrarse atrapados por una estructura agraria congelada y dependiente, los pequeños y medianos productores, a pesar de su eficiencia y reconocida aptitud, se ven en la imposibilidad de incrementar la producción y la productividad. Además, la intermediación parasitaria encadenada, tolerada por funcionarios del Estado, se apropia de elevadísimos porcentajes del precio final, dejando al productor una ínfima parte.

Mientras tanto, no existe ordenamiento en la producción, se despilfarran lo producido y no se trazan planes de mediano y largo plazo.

Falta infraestructura de extensión suficiente para asistir a la mayoría de los productores.

La mano de obra es migratoria o golondrina por falta de oportunidades de trabajo permanente en las distintas regiones.

Los minifundistas están obligados a realizar tareas fuera de su explotación en trabajos temporarios, por salarios magros y sin que se hagan efectivas las leyes que amparan al trabajador rural.

Se advierte la atomización de la oferta de productos por ausencia de organizaciones cooperativas que garanticen una comercialización justa para el pequeño y mediano productor frente a una demanda oligopólica poderosa.



PARA LA LIBERACIÓN

- Se realizará la reforma agraria para eliminar el latifundio y el minifundio y para introducir prácticas que concurren al financiamiento del desarrollo y al incremento de los niveles de productividad.
- Se facilitará el acceso a la tierra únicamente al auténtico productor, mediante la entrega en propiedad y en otras formas de explotación.
- Adoptará un régimen legal específico encuadrado en el Derecho Agrario y diferenciado del Derecho Civil, que instituya y caracterice la propiedad rural.
- Ordenará la producción según las características ecológicas de cada región y aumentará las posibilidades de almacenamiento, para poder hacer frente a una política de reservas que permita comercializar oportunamente la producción agraria en función de la demanda y de los precios internacionales.
- Según las regiones, serán determinadas las extensiones óptimas de las unidades de producción y se implementarán medidas para agrupar minifundios en unidades de máxima eficiencia, para colonizar tierras fiscales y privadas improductivas y para modificar el régimen de arrendamientos rurales en beneficio del trabajador de la tierra.
- Asegurará el dominio de los inmuebles ubicados en las fronteras en personas físicas de nacionalidad argentina.
- Prestará asistencia crediticia a quienes carecen de capacidad financiera para introducir los cambios tecnológicos en sus explotaciones, mediante el crédito de fomento supervisado.



- Modificará el sistema de comercialización para impedir el despilfarro de la producción y garantizarle al productor los márgenes de que actualmente se apropia la intermediación parasitaria.

- Se impedirá, mediante legislación adecuada, la utilización de la tierra como bien de renta o de especulación, aplicando el impuesto a la renta normal potencial de la tierra.

- Propiciará el asesoramiento técnico y la capacitación.

- Fomentará el movimiento cooperativo y le dará acceso al comercio interior y exterior de la producción.

- Apoyará las organizaciones representativas de los pequeños y medianos productores para impulsar el proceso transformador de las estructuras agrarias.

RÉGIMEN INDUSTRIAL

EN LA DEPENDENCIA

La progresiva desnacionalización y vaciamiento de empresas de origen nacional, es una de sus principales características. Otras son: el estancamiento de la producción, la profundización de los desequilibrios regionales, la pérdida de mercados y el dificultoso ingreso a los nuevos, la carencia de apoyo crediticio y de promoción regional; o lo que es casi lo mismo, lentísima aplicación de programas trazados.

PARA LA LIBERACIÓN

- Impulsará el crecimiento orgánico de la industria básica con vistas a quebrar la relación de dependencia con los proveedores imperiales.

- Las industrias básicas y estratégicas quedarán reservadas al Estado.

- Reactivará las industrias de interés nacional y fomentará la pequeña y mediana empresa.

- Recuperará de inmediato las empresas que han sido desnacionalizadas por el capital internacional.

- Dotará a las empresas estatales de estructuras racionales y eficientes, de moderna tecnología y de capacidad competitiva y reguladora en las áreas en que actúen.

- Redistribuirá y promoverá la radicación industrial con criterio regionalista e incorporará tecnología moderna en la pequeña y mediana empresa.

- Mediante la asociación de capitales estatales promoverá la creación de empresas translatinoamericanas, con el objetivo de lograr la explota-



ción conjunta de los recursos naturales.

RÉGIMEN LABORAL

EN LA DEPENDENCIA

El deterioro del salario real, la participación cada vez menor del trabajador en la distribución de la riqueza que produce, el desempleo y el elevado costo de vida, son algunos de los flagelos del mundo laboral. En sus organizaciones gremiales, entre tanto, no siempre se encuentra una desinteresada y eficaz defensa de los intereses profesionales, debido al uso que hacen de esas entidades algunas cúpulas sindicales, más interesadas en solventar rencillas partidarias o atender a su beneficio personal que en sostener la legítimas reivindicaciones de sus bases.

PARA LA LIBERACIÓN

- Auspiciará la reforma de la empresa para garantizar:
 - El reajuste automático de sueldos y salarios.
 - La cogestión obrero-empresaria.
 - La autogestión laboral.
- Fijará la política de ingresos mediante la compatibilización del incremento de la productividad, las utilidades empresarias y la participación obrera, según las normas de la planificación nacional.
- La afiliación sindical será automática y las bases tendrán a su disposición los mecanismos necesarios que le permitan ejercitar el derecho de revocar el mandato conferido a sus dirigentes.
- Ningún cargo representativo sindical podrá ser ocupado sino mediante elección por voto secreto y obligatorio.
- Las direcciones de los organismos previsionales se integrarán con auténticos representantes de los trabajadores, tanto de los que están en actividad como los pasivos.
- La mecanización industrial y la incorporación de tecnología se realizarán sin disminuir las fuentes de trabajo.

CIENCIA Y TÉCNICA

EN LA DEPENDENCIA

El país destina escasamente el 0,4% del producto bruto interno a la



ciencia y la tecnología. No solo Europa, Estados Unidos y Canadá atraen a los científicos y los profesionales argentinos.

También Brasil, Venezuela y México absorben a muchos cerebros nacionales que se marchan decepcionados por la lamentable situación en que se encuentran en nuestro propio país. Mientras tanto, el país paga más de 150 millones de dólares anuales por la tecnología importada de los centros imperiales.

PARA LA LIBERACIÓN

- Mediante el control de un ente específico integrará un sistema Científico y Tecnológico Nacional, orientado hacia el desarrollo económico social independiente, en donde estará debidamente valorado el papel vital del investigador, otorgándole dedicación exclusiva y equipamiento indispensable en centros regionales, universidades y unidades de producción.

- Desarrollará tecnologías propias, basadas en la máxima y racional utilización de los recursos disponibles.

- Buscará la apropiación de la tecnología necesaria para los requerimientos nacionales.

- El agro y la industria proveerán los fondos destinados a la inversión nacional en ciencia y técnica.

SALUD

EN LA DEPENDENCIA

La situación general es alarmante, se observa un aumento injustificado del riesgo de enfermar o morir, así como altos índices de morbi mortalidad materno-infantil.

La generalidad de la población no tiene acceso a una atención médica científica igualitaria, completa y oportuna. La validez de esta aseveración se comprueba al observar la más que deficiente distribución nacional del personal médico. En Capital Federal se dispone de 61 médicos por cada 10.000 habitantes, mientras que existen áreas rurales donde hay 5 médicos para igual cantidad de habitantes. Los servicios hospitalarios son ineficaces e insuficientes. El promedio de 9 camas por cada mil habitantes en Capital, desciende a 3 para igual cantidad en Formosa y Misiones. El resultado es que, en provincias como Santiago del Estero, el 38,1% de las muertes se produce sin previa atención médica, al igual que el 44,9% de los nacimientos.



Las prestaciones sanitarias se han convertido en una mercancía que se brinda con fines de lucro y que resulta de difícil acceso, de la misma manera que los medicamentos, cuya distribución solo está orientada a satisfacer los intereses de los grandes laboratorios.

La miseria hace estragos y reaparecen plagas y enfermedades supuestamente erradicadas, como consecuencia de las terribles condiciones de vida. En el conurbano bonaerense el 68% de la población carece de agua corriente y el 82% no dispone de servicios cloacales.

Finalmente, tampoco la planificación sanitaria es adecuada y no contempla las necesidades nacionales ni regionales.

PARA LA LIBERACIÓN

- Se organizará un Sistema Nacional Integrado de Salud que brindará atención sanitaria completa e igualitaria para que el pueblo goce de los beneficios de la medicina preventiva, reparadora y de rehabilitación.

- Eliminará las desigualdades con que se brinda la atención médica a los distintos estratos sociales, a las diversas provincias y a las áreas rurales, mediante la redistribución y el aumento de los recursos humanos y técnicos en las zonas postergadas.

- Orientará los recursos disponibles con criterio regional, según las prioridades dictadas por la frecuencia y el tratamiento de las enfermedades.

- Pondrá en práctica el Historial Personal de Salud y el examen periódico, preventivo y obligatorio de la población, así como impulsará la educación sanitaria en todos los estratos sociales.

- Complementará la financiación de la atención médica a través de un Seguro Nacional de Salud.

EDUCACIÓN Y CULTURA

EN LA DEPENDENCIA

La enseñanza no da respuesta a las exigencias de un país moderno.

La igualdad de oportunidad es una falacia que excluye a los sectores de insuficientes ingresos: los alumnos que son hijos de familias obreras representan el 1,1% del total de inscriptos en la Universidad de Buenos Aires, el 1,4% en Córdoba y el 4,1% en Tucumán. La población analfabeta de más de 18 años de edad en el año 1971 era de 1.774.400 personas. Los porcentuales de deserción escolar son más que alarmantes en todos los niveles:



Primario, 55%. Medio 48,2%.
Técnico, 72,6%. Universitario, 60%.

No existe encausamiento de los graduados técnicos y universitarios para cubrir racionalmente las necesidades del país, lo cual estimula el éxodo de cerebros y se mal paga a los docentes, manteniendo todo el sistema educativo y cultural al margen del quehacer nacional.

PARA LA LIBERACIÓN

- Asegurará el acceso a la enseñanza gratuita en todos los niveles y modalidades, sin limitación alguna, adecuando el desarrollo de los programas a las necesidades regionales.

- Planificará la enseñanza para orientar las vocaciones hacia las reales necesidades del desarrollo nacional, asegurando la educación permanente.

- Implantará en la Universidad el gobierno tripartito y mantendrá un permanente intercambio cultural con los países de América Latina.

- Fomentará el compromiso hacia el trabajo y la comunidad, combinando las actividades intelectuales con las productivas y comunitarias en todos los niveles y modalidades de la enseñanza.

- Impulsará la práctica masiva de programas de educación física, deportiva y de recreación.

- Con apoyo del magisterio y del movimiento estudiantil erradicará todas las manifestaciones de analfabetismo que aún perduran.

- El Estado proveerá los medios necesarios para asegurar las manifestaciones culturales que transmitan los valores de la nueva sociedad, sin interferir en la actividad personal y la libertad de expresión.

- Utilizará los medios de comunicación masiva para divulgar y arraigar entre los pobladores de todo el territorio los auténticos valores de la educación y la cultura nacionales, sin que ello implique aislarse de las manifestaciones no comerciales procedentes de otras latitudes.

- Los mecanismos de la publicidad comercial serán regulados para evitar la distorsión del consumo, la creación de necesidades superfluas y las deformaciones culturales.

FUERZAS ARMADAS

EN LA DEPENDENCIA

Como el país del que forman parte, las fuerzas armadas también están condicionadas a las estructuras que mantienen nuestra situación de-



pendiente. La aceptación de una pretendida política de defensa del hemisferio acentúa su subordinación logística y tecnológica del exterior.

PARA LA LIBERACIÓN

- Las fuerzas armadas, identificadas con la tradición libertadora sanmartiniana, asumirán su papel insustituible en el campo de la defensa nacional.
- Comprometerán toda su capacidad espiritual y material en la defensa del patrimonio de la Nación, participando activamente en el esfuerzo común para construir un país que termine con los lazos de la dependencia.
- Sumarán su propio poder al poder del pueblo y se empeñarán en la inevitable lucha contra el imperialismo y por la liberación nacional y latinoamericana.
- Se organizarán y capacitarán en la dimensión que exige el país, dotadas de equipos modernos y eficientes y provistas de todo lo necesario para el cumplimiento de sus misiones, sin dependencias en cuanto a tecnología y materiales críticos.
- Continuarán su participación a través de organismos específicos en la ejecución de proyectos relativos a recursos materiales críticos y estratégicos, afirmando el poder de decisión nacional.



POLÍTICA DEMOGRÁFICA

EN LA DEPENDENCIA

Actualmente existen territorios desiertos al lado de conglomerados abusivos: solo el Gran Buenos Aires contiene el 36% de la población en el 0,1% de la superficie, mientras la Patagonia alberga al 3% de la población en el 28% de la superficie.

El desequilibrio demográfico entre las distintas provincias es producto de los diferentes ritmos de crecimiento de las economías regionales, con lo cual algunas provincias son expulsoras de población mientras que otras se convierten en polos de atracción. Tucumán, Entre Ríos, Chaco, Catamarca y La Rioja son las más afectadas por las emigraciones masivas y crecientes.

PARA LA LIBERACIÓN

● Basará sus decisiones en el principio de que los seres humanos son el bien más importante de la Nación y que sus cualidades físicas y mentales constituyen el principal objetivo estratégico del Estado.

● Estimulará el crecimiento acelerado y multiplicador de la población.

● Consolidará la integración territorial mediante la creación de incentivos que aseguren la presencia humana en las fronteras y en los grandes espacios vacíos de la Nación.

● Fomentará la inmigración y facilitará las condiciones para la integración de los extranjeros, en particular de aquellos que provengan de países limítrofes y residan en zonas fronterizas.

VIVIENDA Y URBANISMO

EN LA DEPENDENCIA

El crecimiento de los centros urbanos es anárquico y antieconómico. Los parcelamientos responden a criterios especulativos que hacen dificultosa la construcción de redes de equipamiento y servicios públicos, que incluyen agua corriente, cloacas, pavimentos, electricidad, teléfonos y transportes; al mismo tiempo hay un acelerado retroceso de espacios verdes de uso comunitario.

Se suma a todo ello el déficit de vivienda que castiga especialmente a las capas menos pudientes. Los datos sobre distribución del déficit según el status socio-económico así lo indica: clase alta (sin déficit), clase



media (20%) y clase de más bajos ingresos (80%), es decir hacen falta en este sector más de un millón y medio de viviendas. Los planes oficiales son ineficientes o directamente no se cumplen, alejando la posibilidad de la vivienda propia.

PARA LA LIBERACIÓN

- Implementará políticas urbanísticas que establezcan una racional utilización del suelo, eliminando los intereses inmobiliarios y especulativos, para garantizar una auténtica planificación urbana y regional que organice racionalmente, desde una perspectiva popular, la distribución del espacio destinado a la vivienda, salud, educación, trabajo, recreación y defensa del medio ambiente.

- Con la participación del Estado y los propios interesados implementará un vasto plan de construcción masiva de viviendas familiares.

- El Banco Hipotecario Nacional controlará todos los recursos financieros –estatales y privados- necesarios para el Plan de Viviendas Urbanas.

- Implementará sistemas de inspección para asegurar idoneidad técnica y precios razonables en el sector privado de esta industria.

RECURSOS NATURALES

EN LA DEPENDENCIA

Se explotan irracionalmente sin permitir la recuperación de las especies útiles. El manejo inadecuado de los suelos y el desconocimiento y desinterés por la aplicación de prácticas conservacionistas, han facilitado la acción de procesos erosivos, agotamientos, degradación y acentuación de las deficiencias hídricas y eólicas. Otro tanto sucede con el despilfarro del agua en zonas de riego o la salinización de grandes extensiones por falta de asesoramiento.

En materia de silvicultura, la situación es igualmente catastrófica. A principios de siglo los bosques naturales argentinos excedían las 100 millones de hectáreas, en tanto que hoy apenas si alcanzan a 40 millones, sin que se adviertan planes serios de reforestación. La explotación de los bosques en forma indiscriminada ha traído como consecuencia que algunas provincias hayan sido totalmente devastadas.

Los ríos están siendo contaminados por los desechos industriales, sin que haya una política que impida tal proceso, así como se carece de



políticas mineras que garanticen el autoabastecimiento de productos de origen mineral. La riqueza ictícola es explotada preferentemente por corporaciones extranjeras, dejando para nuestro país gabelas insignificantes. La misma falta de iniciativa se observa para la aplicación de una política de recursos hídricos que garantice nuestros derechos sobre la Cuenca del Plata y para la aceleración en el uso de los recursos hídricos cordilleranos.

PARA LA LIBERACIÓN

- Aumentará la productividad de los sectores agrario, forestal, pesquero y minero para concurrir con su producción al financiamiento del desarrollo.

- Serán estatizados los procesos de extracción, industrialización, comercialización y transporte de los recursos energéticos y de los minerales básicos y de interés nacional.

- Serán relevados los recursos de todo tipo, en especial los del subsuelo, las aguas y la vegetación para determinar su capacidad productiva, como base para el ordenamiento del uso y manejo de tales recursos.

- Defenderá el medio ambiente mediante la explotación racional de los recursos naturales, sean animales, vegetales o de otro tipo.

- Implementará planes de conservación y manejo de suelos afectados por erosiones hídricas y eólicas.

- Se ampliarán las áreas de riego mediante la utilización racional del potencial hidrológico del país, aprovechando en particular los embalses construidos con fines energéticos para promover la piscicultura interior y la expansión de las áreas regadas.

- Los recursos pesqueros marinos serán explotados de tal manera que garanticen la extensión del consumo de proteínas de dicho origen en la dieta de la mayoría de nuestra población. La industria pesquera será descentralizada para promover el desarrollo patagónico y se creará la infraestructura de frío que alcance a todo el territorio nacional.

- Promoverá la reforestación de las zonas desmontadas y extenderá los montes cultivados a las áreas marginales para la agricultura y la ganadería.

POLÍTICA ENERGÉTICA

EN LA DEPENDENCIA

En 1974 se importó petróleo y derivados por un total de 470 millones



de dólares; a esta cifra se suman 315 millones de dólares por el crudo extraído en concesiones privadas y en virtud de cláusulas de reajuste del precio en relación con el precio internacional. Además, se perdieron 120 millones de dólares que correspondieron a las ganancias obtenidas por las empresas extranjeras comercializadoras, las cuales, a pesar de la publicitada «argentinización de las bocas de expendio», han seguido facturando en destilerías a los mismos precios de antes. También en 1974 la importación de carbón significó una erogación de 55 millones de dólares, al mismo tiempo que el país, en uno solo de los yacimientos (Río Turbio), tiene reservas de 500 millones de toneladas.

PARA LA LIBERACIÓN

- Diversificará las fuentes internas de energía eléctrica tratando de disminuir la participación del petróleo mediante el desarrollo del potencial hidroeléctrico y atómico disponibles y el desarrollo e investigación de otras fuentes de energía.

- Pondrá en práctica un Programa de Energía Eléctrica tendiente a elevar la capacidad de generación instalada y la correspondiente expansión de los sistemas de transmisión y distribución.

- El Estado y las cooperativas en las pequeñas y medianas localidades urbanas, tendrán a su cargo en forma exclusiva la generación, transformación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica.

- Disminuirá el grado de dependencia externa del petróleo a través de un programa intensivo de prospección e intensificación inmediata de la producción interna, acortando los plazos que median entre el descubrimiento y la explotación de los yacimientos.

- Sustituirá gradualmente al petróleo como fuente de energía para maximizar su utilización como insumo industrial.

- Todas las etapas de la actividad petrolera y gasífera estarán exclusivamente en manos del Estado.

TRANSPORTE

EN LA DEPENDENCIA

El panorama sectorial se caracteriza por el desorden como consecuencia de la competencia irracional entre el camión y el ferrocarril. Actualmente tiene lugar una transferencia de tráfico ferroviario al transporte automotor, que excede las distancias consideradas aceptables desde el



punto de vista de su economicidad. Este hecho, impulsado por las terminales automotrices, determinó un sobredimensionamiento del parque automotor de cargas y se estima poco probable que a mediano plazo se pueda adecuar la estructura caminera y ferroviaria a las exigencias propias de cada uno. Esto pone de manifiesto la absurda competencia desatada por las empresas multinacionales, dirigida a la maximización de beneficios a cualquier costo, sin reparar en los intereses nacionales y la necesidad de distribuir la carga de acuerdo a las condiciones de economicidad de cada sistema.

Por otra parte, el material de las empresas estatales es en su gran mayoría vetusto y anticuado (la edad promedio de la Flota Mercante es de 37 años); además la concentración porteña perjudica sensiblemente el tráfico comercial con el exterior, que se realiza en un 95% por agua.

El puerto de Buenos Aires centraliza casi el 95% de las importaciones y el 75% de la exportaciones, a pesar de ser un puerto de difícil acceso y altos costos de mantenimiento que encarece los fletes como consecuencia de sus limitaciones de calado.

En el rubro marítimo, la postergación nacional resulta innegable: en el comercio de exportaciones ELMA participa con el 6%, el resto de la bandera argentina con el 4% y las banderas extranjeras con el 90%; en las importaciones a ELMA le corresponde el 5%, el resto de la bandera argentina el 20% y a las banderas extranjeras el 75%.

PARA LA LIBERACIÓN

- Programará un sistema de transportes que determine la idoneidad y la rentabilidad de cada medio, fijándole las áreas correspondientes, lo que evitará la falsa competencia entre el camión, los ferrocarriles y los medios fluviales, al conseguir una óptima utilización de los recursos disponibles.

- Incrementará la frecuencia de los servicios y la disponibilidad de vagones de pasajeros en las líneas urbanas y suburbanas y de vagones de transporte para larga distancia.

- Por su condición de país marítimo formulará una política naviera que aliente sustancialmente la capacidad y la participación de nuestra flota mercante nacional, mediante la construcción de unidades en astilleros argentinos.

- Habilitará nuevos puertos para descentralizar nuestras importaciones y exportaciones, aplicando criterios regionalistas y de eficiencia operativa.

- Reservará para el Estado la explotación de los servicios aéreos nacionales e internacionales.



TURISMO

EN LA DEPENDENCIA

Los altos costos limitan las posibilidades de la mayoría del pueblo de conocer y disfrutar su propio país. Una infraestructura obsoleta y escasa, una industria desorganizada e infiltrada por intereses foráneos no constituyen ningún aporte serio a la economía nacional. No existe una política de promoción y auspicio del turismo nacional e internacional, excepto el que se realiza por medio de las obras sociales sindicales.

PARA LA LIBERACIÓN

- Promoverá mediante el desarrollo de una adecuada infraestructura el acceso masivo del pueblo al turismo interno.
- Incrementará sustancialmente el ingreso de divisas provenientes del turismo receptivo internacional.

LA MUJER

EN LA DEPENDENCIA

Sufre una doble explotación: la que sufre de su condición de asalariada y la que deriva de la realización de las tareas domésticas, considera-



das típicas y exclusivamente femeninas por las pautas culturales aún vigentes. Esa concepción del trabajo doméstico como trabajo gratuito – dentro de una economía basada en el dinero- lleva a establecer que el 65% de las mujeres pertenecen a la población económicamente no activa. El otro 35%, pese a la declaraciones formales sobre la igualdad, se desempeña –con contadísimas excepciones- en tareas subordinadas, bajo condiciones salariales discriminatorias y sin posibilidades reales de acceder a los puestos de mando en la administración pública o privada. Sobre una población femenina estimada en 12 millones, casi 3.500.00 carecen de instrucción primaria o esta es incompleta. Solo un 6,25% completó estudios secundarios y un 0,93% posee título universitario. Blanco preferido de la publicidad, es incitada al consumo permanente y a desarrollar –en nombre de valores muy discutibles- una mentalidad poco dispuesta a transformaciones profundas.

PARA LA LIBERACIÓN

- Logrará en igualdad con el hombre una efectiva participación en las actividades sociales, políticas y económicas, eliminando todo trato discriminatorio que limite las oportunidades o afecte los derechos y dignidad de la mujer.

- Garantizará la participación de la mujer en el proceso de liberación nacional mediante la creación de guarderías y jardines de infantes y otras instituciones que aseguren la tenencia, educación y salud de sus hijos y faciliten las tareas domésticas durante las horas de trabajo.

CONVOCATORIA A LA LUCHA POR LA LIBERACIÓN LA TERCERA ETAPA DE LA RESISTENCIA NACIONAL

En esta nueva etapa de la argentinidad, los signos del mundo han cambiado en un sentido de avanzada tecnológica, de liberación humanista y de emancipación nacional. Sin embargo nuestro país inmerso en la crisis general del régimen que capitanean los Estados Unidos de Norteamérica, se estremece por una avalancha de calamidades. La vida argentina está impregnada de imperialismo; sus estructuras económicas y sociales infiltradas por la dependencia. Atrapada en el proyecto hegemónico norteamericano, carece de voluntad propia para decidir su propio destino como nación soberana y autodeterminada.

El carácter capitalista-dependiente de su estructura económica, origen y causa de su crisis más profundas, multiplica los síntomas del atraso al actuar sobre todos los elementos del cuerpo argentino. La inequidad en la distribución de la riqueza, el desempleo, el analfabetismo, las crecien-



tes dificultades del productor agrario no latifundista y del empresario industrial no monopolista, la inestabilidad política permanente, el retroceso de la presencia nacional en América Latina y en el mundo, la violencia y el terrorismo extremistas, los falsos antagonismos inter-sectoriales, son otras tantas expresiones del atraso y de la carencia de autonomía para el desarrollo.

Hasta ahora no se ha logrado modificar radicalmente este sombrío panorama, buenas intenciones, promesas que no se cumplieron o quedaron a mitad de camino, meros paliativos, ya que quedaron intactas las sustancias del drama nacional.

Subsisten agravados los problemas de fondo y parece cada vez más lejano el día de la salvación nacional.

En los tiempos que corren todos los capítulos de la crisis están abiertos ante la angustia y la zozobra de millones de argentinos. Es en la dependencia de un sistema agónico, en la carencia de un propio proyecto independiente de desarrollo, donde deben buscarse las razones prioritarias de los graves malestares que todos sufrimos.

Por ello se equivocan quienes hacen de la institucionalidad un fin en sí mismo.

Si la legalidad no sirve para construir la independencia económica, para la socialización del poder, la riqueza y la cultura, pierde su legitimidad, se convierte en una fórmula abstracta, sin ningún valor. Con la legalidad retaceada, vacua, yerma, lo único que se logra es engendrar conflictos y en definitiva, se compromete el destino de todo el sistema institucional.

Tampoco son las alternativas elitistas las que aportarán soluciones válidas, solo por la intervención de uno o más factores de poder.

Es innegable que muchos se dejan encandilar por los métodos drásticos, pero sin porvenir cierto, urgidos por la dimensión del desorden y la corrupción. Algunas voces se han alzado para señalar a la crisis moral como raíz de todas las dificultades.

Nadie puede negar que la inmoralidad amenaza cubrir los más variados estamentos de la vida nacional, que el latrocinio y el peculado constituyen el mecanismo más eficaz para la especulación individual.

Todos los culpables deben ser castigados con el más severo rigor de la ley penal.

Es imperioso e imprescindible hacerlo así, por razones de dignidad nacional y para amedrentar a los inmorales y oportunistas.

Hay que llegar, sin embargo, al fondo de la cuestión. No se trata de la desgraciada actuación de algunas personalidades malignas; la verdadera fuente del mal está en la propia base del régimen, donde el poder del



dinero es la llave para todos los privilegios y la garantía de todas las inmunidades.

No habrá solución en tanto los trabajadores no reciban una equitativa retribución por su trabajo.

No habrá solución mientras los productores sigan esquilados por intermediarios y especuladores.

No habrá solución mientras el lucro máximo sea la única ley valedera.

No habrá solución mientras persista el arbitrario derroche de recursos humanos, naturales y de capital.

No habrá solución mientras persista la fuga masiva de capitales al exterior.

No habrá solución mientras no se desaloje efectivamente del poder a los aliados internos de los intereses foráneos, antes británicos y ahora principalmente norteamericanos.

No habrá solución mientras se mantenga la estructura agraria improductiva, mientras se carezca de industria de base, mientras no se implemente una política económica exterior independiente.

No habrá solución sin la participación del estado en el efectivo control de los principales mecanismos de la vida nacional.

No habrá solución mientras no se garantice la participación popular en el control y la gestión de los asuntos públicos.

No habrá solución mientras el desorden y el caos no sean reemplazados por la planificación nacional.

La tarea es clara y terminante: DEBEMOS RECUPERAR EL CONTROL DE NUESTRA ECONOMÍA PARA REALIZAR UNA REVOLUCIÓN QUE PERMITA UNA EQUITATIVA, CRECIENTE Y RACIONAL DISTRIBUCIÓN DE LAS RIQUEZAS NACIONALES.

La participación popular, el nacionalismo económico, la justicia social y la integración latinoamericana, son los pilares de la nueva sociedad que construiremos.

La liberación nacional y social y el desarrollo económico son exigencias necesarias, hasta la supervivencia como Nación. Las tensiones políticas, la presión demográfica, la crisis de alimentos y el desgaste de los recursos naturales en los países imperiales, entre otros factores, configuran situaciones que nos obligan a atender en plazos perentorios la utilización de todo nuestro potencial. En caso contrario, el porvenir nos encontrará cada vez más disminuidos en nuestra capacidad de decisión e incluso en nuestra integridad territorial.

Para modificar el actual estado de cosas no basta con la decisión revolucionaria. El proceso no es mecánico ni fatal. Los enemigos a vencer son poderosos y arteros y tienen aún amplio campo de maniobras. La frus-



tración consecuente pretende paralizar la voluntad colectiva, para abrir paso a cualquier aventura o solución desesperada que, en definitiva, siga manteniendo en lo esencial el régimen capitalista-dependiente.

Lamentablemente, hay núcleos deseosos de cambios violentos que, en definitiva, facilitan la maniobra oligárquico-imperialista, ya sea porque apelan a métodos que reprueba el sentimiento colectivo o porque orientan su combate hacia enemigos supuestos, confundiéndolo todo y al fin paralizando la acción popular.

Todo proyecto nacional supone una ideología y una práctica política. No basta con negar lo existente, se requiere afirmar lo por venir. La revolución nacional importa la toma de conciencia del agotamiento del modelo capitalista-dependiente y al mismo tiempo, la propuesta sobre los medios, el camino y la filosofía para superar el esquema establecido y construir el nuevo.

La **INTRANSIGENCIA** se yergue ante la nación toda, desde su origen en la línea nacionalizante y socializante del yrigoyenismo revolucionario, para proclamar su decisión de asumir la tarea transformadora y creativa de llevar hasta la culminación el proceso de resistencia nacional contra la opresión extranjera y por la plena emancipación.

Son las banderas del nacionalismo popular revolucionario, las que amparan esta determinación transformadora.

La INTRANSIGENCIA ES NACIONALISTA porque afirma la política antiimperialista, de soberanía y autodeterminación nacionales.

La INTRANSIGENCIA ES POPULAR porque rechaza todas las soluciones de minorías, de cualquier signo y reclama la justicia social y la participación activa de las mayorías.

La INTRANSIGENCIA ES REVOLUCIONARIA porque lucha para quebrar la dependencia, para crear una nueva sociedad donde estén socializados el poder, la riqueza y la cultura.

Sabemos que nuestro país tiene los recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos sus pobladores. Si no lo hace es porque la potencialidad nacional no está al servicio común, sino de unos pocos privilegiados.

En la nueva sociedad que proponemos, el Estado planificará –con la participación de los sectores productores, empresarios y obreros– la producción y la riqueza para que tenga un carácter fundamentalmente social, ya que su origen es el trabajo creador de la comunidad. Solo así será posible que el trabajo deje de ser un modo de servidumbre y alienación para transformarse en una actividad liberadora y socialmente útil.

Ningún país es vigoroso si la mayoría de sus habitantes no se interesan en la defensa de la soberanía y la integridad nacional. Ningún Estado es fuerte solo por su capacidad de castigo o de represión si no se



apoya en un sólido frente interno y en una sana economía.

En el vacío político o social no tienen andamios los planes reformistas por más retórica revolucionaria que los adorne. La estrategia de la INTRANSIGENCIA para la liberación nacional se apoya ante todo en la movilización integral de la capacidad humana. No hay mejor seguro que la participación del pueblo contra el burocratismo, el reformismo estéril y los ciegos extremismos.

La tarea revolucionaria no es para un grupo de hombres iluminados, ni para una sola fuerza política. Es posible llevarla a cabo únicamente por la colaboración real de cuantos quieren abatir al régimen de la dependencia y realizar la revolución nacional.

La indispensable alianza, en la cabecera de un gran movimiento popular, tiene la particularidad de ser para nosotros la continuidad histórica del yrigoyenismo, lo que no obsta para que advertamos la necesaria presencia del peronismo-pueblo y de todos los sectores coincidentes en esta tercera etapa de la resistencia nacional, que deberá ser la etapa de la victoria popular.

El futuro no es propiedad privada de nadie. Se requiere el concurso de la civilidad democrática y revolucionaria y los sectores coincidentes de las fuerzas armadas. No habrá revolución sin la integración del poder civil y el poder militar.

Nadie puede eludir la convocatoria ni desoir el imperativo histórico. Ningún sector puede reclamar para sí la exclusividad de la conducción. Es cierto, a propósito de esto, que los trabajadores son el motor de todos los procesos emancipadores, como agentes activos de la producción, pero no se puede instrumentar un proyecto nacional revolucionario –mucho menos dentro de las especificidades argentinas– sin el concurso de los sectores medios, de los pequeños y medianos empresarios, de los sectores industriales y campesinos y de las expresiones activas de la cultura nacional.

En el plano político existen sobradas pruebas de la confluencia posible. Basta advertir que el ochenta por ciento del electorado votó, en los últimos comicios, programas convergentes.

La experiencia posterior demostró que con las fuerzas dispersas ninguna de estas plataformas pudieron llevarse a la práctica; es entonces imprescindible establecer las bases de coincidencia.

El país, además, ha tomado conciencia con respecto a la anulación práctica de su federalismo, reducido a una mera prescripción constitucional. La revolución nacional ampliará los límites del progreso tecnológico y el desarrollo industrial, constreñidos hoy al Gran Buenos Aires y a algunas grandes ciudades, hasta un término donde se confundan con



los límites geográficos de la Nación, restaurando así las bases federalistas de una organización surgida de la propia entraña y afirmada históricamente por las luchas populares.

Estos aportes para un Proyecto Nacional han establecido un diagnóstico y señalado propuestas para una urgente realización. Por todo ello la Convención Nacional del Partido Intransigente: CONVOCA A QUE TODOS UNIDOS CONTRA LA OLIGARQUÍA Y EL IMPERIALISMO HAGAMOS POSIBLE LA JUSTICIA SOCIAL, LA AUTODETERMINACIÓN NACIONAL Y LA NUEVA SOCIEDAD.

Como en las horas de la fundación patriótica, vamos hacia la reivindicación de la INDEPENDENCIA Y LA UNIDAD NACIONAL. EL PARTIDO INTRANSIGENTE ESTARÁ EN LA PRIMERA LÍNEA DE LA LUCHA, HASTA LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS POPULARES Y NACIONALES.

Córdoba, 13 de diciembre de 1975

Ataulfo Pérez Aznar,
Presidente de la Convención Nacional

"Hacia una nueva política para una nueva Argentina"

(1984)



La complejidad de la situación actual, la necesidad de llenar ese inmenso espacio abierto entre un movimiento social con características particulares, tal como lo venimos analizando, y una superestructura política que no da las respuestas adecuadas a las exigencias objetivas que hoy plantea la historia nacional, hace que pase a ser determinante HOY MÁS QUE NUNCA, la necesidad de una herramienta válida para la tarea inconclusa de construir la nación, esto es, un motor de liberación nacional y social.

Habiéndonos planteado un correcto diagnóstico de la crisis, disponiendo de la base doctrinaria insustituible que constituyen los Aportes para el Proyecto Nacional aprobados por esta HCN en el año 1975, y de la propuesta para la coyuntura expresada en la Plataforma Electoral nacional 1983, es necesario avanzar resueltamente en la concreción de esas banderas y consignas.

Si nuestro objetivo es producir las transformaciones sociales, políticas y económicas que nos permitan construir el país y la sociedad que nuestro pueblo necesita y se merece, debemos conseguir los mecanismos de transformación social, real y concreta, para no caer en el mero discurso estructural y estrategista que, correcto para comprender nuestras metas y los caminos globales a emprender, no nos permite dotar a la militancia partidaria, y con ello al pueblo, de las tareas concretas a encarar en cada



etapa.

Reconocemos que la diferencia entre la mera declamación de banderas antidependientes y liberadoras y la firme determinación de llevarlas a cabo se establece en la conducta, metodología, organización, funcionamiento y cursos de acción que se debe dar el PI para ser una herramienta real de transformación.

Si se entienden las banderas y consignas como medio electoralista, el PI será necesariamente un partido declamativo. Pero si entendemos que las mismas son un compromiso cierto, real y posible, el partido encontrará que las coyunturas electorales serán una importante herramienta si se corresponde con un accionar constante, pertinaz y concreto EN y CON el pueblo, en función esclarecedora, organizativa, conductiva y de ayuda, sin especulaciones.

Decimos también que no basta con este tipo de reivindicaciones generales y públicas, sino que es necesario sumergirnos en el conjunto de los problemas del pueblo argentino, que sean visualizados correctamente por la población, que esté dentro del ámbito geográfico de un frente barrial o de un pueblo del interior, por los estudiantes que comparten con nuestros jóvenes carreras técnicas, secundarias y universitarias, por los obreros que trabajan junto a nuestros militantes en las empresas, por los profesionales, comerciantes e industriales entre los que se desarrollan las tareas cotidianas, donde en cada uno de nuestros militantes sea realmente visto el perfil y la conducta que hoy debemos fortalecer e identificar.

Con todo esto podemos eludir, con trabajo y participación, la trampa ideologista de caer en lo puramente contestatario y cerrar, por una actitud principista, los caminos para que el conjunto del pueblo de la Nación, nos identifique como una alternativa válida.

Esta participación implica apoyar, conducir, elaborar soluciones, cursos de acción y de lucha, propuestas viables y realistas que permitan ir creando condiciones de conciencia y organización en el pueblo, integrando las instituciones y movimientos intermedios ya existentes y/o creando los que sean necesarios, sin dividir, pero sin claudicar con nuestros objetivos finales.

Esto es actuar con auténtica vocación de poder, ser creadores permanentes de conducción y movilización que asegure el cumplimiento democrático y revolucionario de los cambios estructurales que nuestro país necesita.

Los problemas de organización forman parte de algunas cuestiones poco elaboradas por nuestro partido y que suelen ser considerados frecuentemente como cuestión puramente técnica y no como uno de los



problemas político-ideológicos más importantes de un proceso de liberación. Esta subestimación con respecto a los problemas metodológicos y organizativos es un signo más de la falta de madurez del movimiento popular y una manifestación de todo lo que hemos analizado acerca del nivel de conciencia y organización de los sectores populares de los que formamos parte inseparable.

Destacamos más arriba el rol y la importancia que los Aportes para el Proyecto Nacional tienen al constituirse en la síntesis doctrinaria producida por ese movimiento de intransigencia, que nace con Alem, se continúa en el yrigoyenismo antiimperialista, en la elaboración de Gabriel del Mazo, en la militancia inculdicable de Moisés Lebenshon y que alrededor de la figura de don Oscar Alende recibe nuevos y revitalizantes aportes humanos, políticos y sociales que le dan esta característica distintiva y nueva que hoy presenta.

Sin embargo, esta síntesis doctrinaria, surgida y elaborada a partir de la realidad concreta de un país con nombre y apellido: Argentina Dependiente, enraizada en las luchas populares de casi un siglo, no ha tenido todavía su correspondencia con la necesaria gestación de una síntesis en criterios de organización, participación y metodología de trabajo que permitan transformar al PI en una auténtica herramienta de liberación y de cambio social.

Esto significa que la propuesta política global, estratégica de nuestro partido, debe materializarse en políticas concretas en cada sector o etapa de la vida nacional. Y materializar nuestra política en cada uno de estos sectores (económico, del trabajo, educativo, etc.) implica que sus propios protagonistas (productores, trabajadores, estudiantes, docentes, etc.), deben tomar como suyas las políticas que el partido va delineando en el trabajo común en cada uno de esos ámbitos.

Es precisamente en esos ámbitos donde encontraremos la líneas conductoras que nos permitan gestar la síntesis de la que hablamos. Con esto afirmamos que esta definición en el terreno organizativo, metodológico, de cómo debe ser el PI que queremos y sobre todo el que necesita el pueblo argentino, no puede, no debe ceder a vacuos esquematismos, debe en cambio profundizar lo ideológico conjuntamente con lo organizativo. Debe conseguir traducir las consignas en propuestas operativas instrumentales. Esta manera de entender el trabajo político nos permitirá avanzar en lo ideológico, a la vez que mejorar nuestra práctica. Nos permitirá delinear cada vez con mayor precisión la sociedad liberada, a la vez que transformará nuestra acción en el camino más seguro y más rápido hacia ese destino.

Avanzando en estas definiciones y teniendo como firme referente todo



el cuerpo doctrinario del partido, su plataforma, las Resoluciones de esta H.C.N., del Comité Nacional y de cada nivel de conducción, debemos afirmar que estos principios generales deben necesariamente concretarse en ejes de trabajo organizativo.

Sabemos que necesitamos transformar este, nuestro PI, en un poderoso Partido de Masas, con presencia cierta y real en el consenso popular, enraizado profundamente en la sociedad argentina, generador y organizador de conciencia nacional y antiimperialista en la sociedad y en su propio seno.

Para ello se impone entonces, la necesidad de encarar las tareas inmediatas que permitan al PI materializar en hechos concretos lo que su discurso ha ido delineando. Será en esos hechos y en esas metodologías donde el perfil partidario se definirá y fortalecerá. Y esto siendo tarea y criterio para toda la militancia partidaria, es condición imprescindible a ser tomada en la actual coyuntura por todos los niveles de conducción.

Organizar y conducir debe ser la consigna motora a ser asumida en actos concretos por todos los ámbitos de dirección partidaria a ser aplicados orgánica y metodológicamente en cada uno de los frentes de trabajo: territoriales (urbanos y rurales) y sectoriales (sindical, de la juventud), que es donde el PI se construye cotidianamente a lo largo y ancho del país y también y, fundamentalmente, generando instancias de regionalización que sean canales válidos de interrelación entre la conducción y las bases.

«Conducir es trabajar con el pueblo», sintetizar sus experiencias, deducir de éstas principios y métodos aún mejores y más sistemáticos, luego llevarlos nuevamente al seno del movimiento popular para aplicarlos en la solución de los problemas. Esto implica: delinear objetivos, decidir las orientaciones generales, fijar las medidas políticas efectivas y un plan común, establecer los métodos de trabajo correcto y verificar su cumplimiento.

Conducir y organizar es hoy la necesidad prioritaria de que cada ámbito de dirección dé respuesta a los problemas con una línea correcta, con conocimiento pleno de los organismos inferiores, de la vida y de las inquietudes del pueblo en general.

Será por otra parte imperioso que cada organismo partidario discuta y estudie en detalle la línea general del partido para desarrollarla, perfeccionarla y hacerla más concreta.

Esto es, reforzar el papel de las conducciones orgánicas y reforzar el rol de la militancia intransigente como ámbito de enriquecimiento colectivo de la línea de nuestro partido. Línea que debe necesariamente ser refrendada por un trabajo consciente y metódico de inserción en todos



los sectores del pueblo argentino.

Si hoy se impone, como lo hemos afirmado más arriba, la necesidad de reforzar el perfil y la identidad del partido, esto no puede lograrse sin la plena participación en el movimiento de masas, ni de su adecuación organizativa y metodológica que instrumente en política concreta, en cada uno de los frentes de trabajo, territorial, gremial, de la juventud, las banderas liberadoras que son el honor de los hombres y mujeres de la intransigencia.

En el actual momento político la lucha por la estabilidad institucional, en defensa de la democracia contra toda pretensión desestabilizadora o golpista es parte inseparable de la lucha por el fortalecimiento de esa democracia que la queremos no sólo formal, sino capaz de transformar a la sociedad en sus mismas raíces.

Es en el marco de la legalidad constitucional donde debe darse el proceso de acumulación de fuerzas de nuestro partido y demás organizaciones populares, y esas condiciones deben mantenerse para desatar el más profundo debate de masas sobre los más importantes temas de actualidad nacional, para perfilar al Partido Intransigente frente a las grandes mayorías nacionales.

A esta tarea grandiosa, con la seriedad y la convicción que nos distinguen, esta H.C.N convoca a todos los intransigentes a asumir sin demoras la responsabilidad que la historia de nuestra Patria hoy nos pone por delante.

Rosario, 29 de junio de 1984.

Convención Nacional

PLATAFORMA ELECTORAL DEL PARTIDO INTRANSIGENTE

Aportes Programáticos
para la Concertación Plural

(2007)



INTRODUCCIÓN

Las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 marcan el fin del ciclo del modelo neoliberal que comenzara a instalarse en nuestro país veinticinco años antes, caracterizado por la aceptación acrítica de las políticas económicas impulsadas por los centros mundiales de poder y sus organismos multilaterales de crédito que impusieron la valorización financiera como modo de acumulación del capital, la destrucción sistemática de la industria nacional, y la pérdida masiva de puestos de trabajo, que condujo a la miseria a millones de hogares argentinos.

En lo estructural la sustitución del patrón de acumulación, devaluación mediante, por otro con preeminencia de la acumulación productiva, mas acorde con el proceso mundial en desarrollo, permitió saldar las contradicciones al interior del bloque dominante con la adecuación de todos al modelo en curso.

En lo superestructural la adecuación no fue posible; ello se tradujo en una crisis de autoridad caracterizada por la pérdida de consenso del bloque dominante en la sociedad y la deslegitimación de su representación política -especialmente de los partidos tradicionales y la centroizquierda que ejercieron el gobierno en la etapa anterior-, expresada patentemente en la consigna “que se vayan todos”, coreada durante aquellas jornadas por multitudes que –más allá de su indignación- no encontraban el actor político que pudiera articular el nuevo bloque so-



cial y desarrollar una nueva hegemonía sobre el conjunto de la sociedad.

Esta contradicción entre la estructura dominante y el sistema de representación política es lo que nos permite caracterizar a la etapa como de transición, signada esencialmente por la disputa entre lo viejo que pugna por perpetuar la dominación y lo nuevo que intenta abrirse paso para realizar las transformaciones estructurales que nos liberen de esa dominación.

Ésta es la contradicción central que atraviesa - en la actual etapa - toda nuestra sociedad y, como tal, no podía dejar de expresarse en el plano gubernamental, más aún si se toma en cuenta la heterogeneidad del conglomerado político que sostuvo la candidatura presidencial de Kirchner.

El intento de constituir una fuerza de centroderecha (aunque no pueda finalmente concretarse) entre Lavagna - Macri con el patrocinio de los representantes políticos del antiguo régimen, expresa la intención más lúcida de las clases dominantes por saldar la contradicción a su favor.

Una característica de las etapas de transición que no podemos dejar de mencionar, es la mayor autonomía del poder político con relación a los intereses del bloque dominante. A partir de este enfoque, creemos que nuestra evaluación acerca de la gestión del actual gobierno nacional debe priorizar el balance entre las políticas progresivas y regresivas desplegadas por el gobierno. En otras palabras, si prevalecieron acciones con un sentido transformador o si, por el contrario, ellas favorecieron la consolidación del bloque dominante.

Como bien lo expresara el Comité Nacional de nuestro Partido en los fundamentos de la resolución adoptada en su sesión plenaria del 19 de agosto de 2006, "las políticas desplegadas por el gobierno nacional en materia de derechos humanos, defensa nacional, alineamiento internacional, integración latinoamericana, reestatización de empresas públicas, entre otras, coinciden con los lineamientos de nuestro programa partidario; las retenciones sobre las exportaciones agrícola-ganaderas y energéticas, las medidas para regular el aumento de precios de productos de consumo popular, el mayor control ejercido sobre los concesionarios de servicios privatizados, constituyen señales de un rumbo diferente y provocan la irritación de los que hasta hoy se creen los "dueños de la nación".

En el plano político, la posición adoptada por el Presidente Kirchner de enfrentar al aparato del PJ bonaerense controlado por Duhalde - cuando podía acordar en condiciones que le eran favorables- y la concurrencia a las elecciones legislativas de 2005 con un nuevo instrumento electoral -el Frente para la Victoria- también es demostrativo de su vo-



luntad transformadora. Ello se ve ratificado con el cambio de gabinete ministerial realizado inmediatamente después de aquellos comicios, que significó el desplazamiento de la conducción económica del país del ex Ministro Lavagna, hoy candidato del establishment.

Es cierto que se necesita acumular mucho poder político y consenso social activo para avanzar en la transformación de sectores clave de la estructura socioeconómica: profundizar las medidas adoptadas y promover nuevas políticas que permitan una redistribución progresiva del ingreso; revisar las políticas de los noventa que privilegian las inversiones de capitales extranjeros en el área minería, con consecuencias tales como el deterioro del medioambiente y de las condiciones de vida de la población local; promover políticas que sustituyan el papel central que siguen ejerciendo las empresas transnacionales en la explotación de recursos naturales estratégicos, como el petróleo y el gas; modificar la estructura impositiva profundamente regresiva, entre otras, son algunas de las políticas necesarias que se inscriben en una línea favorable a la consolidación de un nuevo bloque popular.

Pero, como apuntamos en los párrafos precedentes, las contradicciones entre la continuidad y la ruptura constituyen un condimento intrínseco de los procesos de transición. Por otra parte, la concentración cada vez mayor de la economía en manos de empresas transnacionales y gru-



pos empresarios nacionales diversificados y el control casi total de los medios de comunicación por sectores afines al bloque dominante son condiciones heredadas del periodo anterior que, sin duda, configuran una correlación de fuerzas adversa para cualquier intento de transformaciones estructurales favorables a las mayorías populares. En el marco de democracia restringida en el que se desarrolla este proceso el gobierno desarrolla una estrategia gradualista y de allí la consigna “el cambio recién empieza”.

De ello se desprende que un cambio sustancial de la correlación de fuerzas preexistente es un requisito ineludible para que un proceso de transición pueda desembocar en el alumbramiento de un nuevo bloque histórico capaz de ejercer la hegemonía sobre el conjunto de la sociedad y realizar las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que consoliden el nuevo modelo. Esto solo será posible con la presencia conciente, organizada y movilizadora de las mayorías populares.

Ello requiere, a su vez, de una nueva herramienta política, cuya legitimidad se construya en base a su capacidad de aglutinar, organizar y movilizar a las clases y sectores que van a conformar el nuevo bloque histórico en torno a un programa de transformaciones que contemple los intereses nacionales, que no son otros que los de las mayorías populares.

En la Argentina de hoy, la recuperación de legitimidad de la mal llamada “clase política” apenas se limita al liderazgo del presidente Kirchner y a un reducido número de dirigentes. Pero esta es una tarea que no puede delegarse solamente en el Presidente, sino que dependerá fundamentalmente de la capacidad militante de las organizaciones populares para ir llenando el vacío de representación que se manifestó descarnadamente en las jornadas de diciembre de 2001. En este sentido es la acumulación de fuerzas o poder político, como consecuencia de la mayor legitimidad social obtenida, lo que irá generando las condiciones para profundizar los cambios en materia socioeconómica, en las relaciones internacionales y en la política regional.

En ese orden de ideas, compartimos el criterio expuesto en la ya mencionada sesión del Comité Nacional y de la Convención Nacional del 16 de diciembre de 2006 de adherir a la concertación plural convocada por el gobierno del presidente Kirchner. Entendemos que constituye un avance significativo en el camino de construcción de la herramienta política que represente al nuevo bloque histórico que pugna por nacer en la mente y en el corazón de la mayoría de los argentinos, así como en los movimientos sociales que jalónaron la resistencia al modelo neoliberal.

En este camino debemos lograr la confluencia de diversas identidades políticas populares en un proyecto de nación compartido, en una diná-



mica que necesariamente traerá aparejado el surgimiento de nuevos referentes de este espacio a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Sin nuevos referentes políticos que expresen el quiebre del 2001 y el anhelo de una Argentina mas igualitaria, democrática y soberana, si no se logra construir organización territorial que consolide esta propuesta, sin proyecto compartido y sin la presencia conciente organizada y movilizadora de las mayorías populares, en la lógica contradictoria entre continuidad y ruptura que caracteriza la etapa, las perspectivas de cambio se verán dificultadas.

Un partido político que pretenda ser nacional, popular y revolucionario, no puede permanecer del otro lado de la vidriera, contemplando y analizando pasivamente las contradicciones que se presentan en la estructura económica y social, sino que debe actuar desde el interior de este proceso para que estas contradicciones se resuelvan en favor de las mayorías populares. Los procesos revolucionarios que se inscriben en la historia de los pueblos no son el producto mecánico de un ciego determinismo histórico, sino la combinación adecuada de las condiciones objetivas con la acción conciente de las fuerzas transformadoras que conducen el proceso hacia el rumbo fijado por la ideología que las nutre.

No nos mueve la soberbia de creer que nuestro análisis de la realidad esté exento del margen de error propio de todo razonamiento humano, pero creemos que si no se asume este riesgo carecería de sentido nuestra existencia como organización política revolucionaria. Nuestro compromiso militante consiste, precisamente, en intentar transformar esta realidad injusta y opresiva, aún en situaciones confusas o francamente adversas. Si sólo actuáramos cuando estuviéramos completamente seguros del resultado, no quepan dudas que dejaríamos de cumplir el rol que pretendemos cumplir en la lucha por la liberación nacional y social.

América Latina está inmersa en un proceso de transformaciones favorable para las mayorías populares con el surgimiento y consolidación de nuevos liderazgos como expresión de un cambio en la correlación de fuerzas regional a favor de los pueblos. A partir de nuestro compromiso como militantes populares, debemos direccionar la acción política con el objetivo de consolidar esta nueva correlación de fuerzas en la Argentina, de forma que nuestro país no pueda ser utilizado como retardatario del proceso continental.

El próximo 28 de Octubre estará en juego ni mas ni menos que la profundización de esos cambios o la vuelta al pasado. Quienes nos sentimos comprometidos con las profundas transformaciones que son necesarias para la construcción de un País Justo, Libre y Solidario, no podemos permitir que se debilite esa posibilidad.



Como decimos más arriba la estrategia del actual gobierno no es de shock sino gradualista, de allí la consigna “el cambio recién empieza”. Lo que se realizó hasta aquí es parte de las tareas a desarrollar en un largo proceso de recuperación del Estado y construcción de un nuevo proyecto de nación. De allí que en los próximos años conviviremos con la tensión que generan las demandas insatisfechas y la reconstrucción del Estado como instrumento indispensable para su satisfacción. Las propuestas que a continuación se especifican, se inscriben en el proceso político en marcha con el que coincidimos en su rumbo estratégico, y que no están sujetas solamente a un orden administrativo que alcance niveles razonables de eficacia y efectividad para hacerlas posibles, sino también a la construcción de credibilidad social a partir de la cual se podrán construir relaciones de fuerza favorables al campo del pueblo.

Por todo ello está claro que la coyuntura histórica que nos toca vivir reclama con urgencia la conformación de un frente nacional, edificado en torno a una sólida plataforma programática que contemple la revisión de las políticas expresión de continuidad del modelo neoliberal, y que también contemple la generación de nuevas políticas dirigidas a la profundización del rumbo adoptado, algunas de las cuales desarrollaremos a continuación.

EL CAMBIO RECIÉN EMPIEZA

1.- *Afirmar el carácter nacional y regional del proyecto alternativo.*

Nuestro primer eje programático – por ser marco necesario de los siguientes – es el carácter nacional del proyecto de las fuerzas populares y democráticas. La profundización de la mundialización económica, política y cultural hace necesario un proceso de construcción nacional que garantice una presencia soberana de nuestros países en ese mundo en cambio. Un país sin identidad, pierde la capacidad de proteger a sus ciudadanos, destruye su economía, sus instituciones y su cultura. Se transforma en una tierra de nadie quedando relegado a un estadio inferior al igual que una colonia.

El carácter nacional del proyecto que proponemos debe entenderse en el marco de una política de integración hacia el MERCOSUR y no la pensamos como posterior a las grandes definiciones programáticas nacionales. Ella es concomitante, contemporánea. Al mismo tiempo que las fuerzas populares y democráticas formulan sus estrategias económicas y sociales alternativas, deben establecer las bases para una cooperación regional.



Por todo ello también proponemos continuar y profundizar el camino de ampliación de los lazos de integración, no solo geográficamente – Venezuela, Bolivia, etc. – sino en las distintas áreas (Culturales, energéticas, políticas, institucionales)

2.- *La reconstrucción del Estado.*

En nuestra concepción, el Estado no es neutral, es un espacio de mediación y de articulación compleja de fuerzas sociales. Estas funciones, en los países periféricos al centro capitalista dominante, se expresan en la necesidad de intervenir entre un esquema dominado por la potencias hegemónicas y una sociedad nacional con enormes desigualdades con un alto porcentaje de población en situación de pobreza, y una gran concentración del poder y del ingreso. Así, el Estado, según quién este a cargo del gobierno y a qué intereses sociales represente, ejecutará políticas públicas al servicio del interés general de la nación y del pueblo o en beneficio de intereses sectoriales minoritarios o extranacionales.

El Estado está siempre presente por acción o por omisión, “...la no intervención significa dejar las manos libres a los distintos grupos en los conflictos sociales y económicos y, por lo mismo, dejar que las soluciones queden libradas a las pujas entre el poder de esos grupos. En tales circunstancias, la no intervención implica la intervención a favor del más fuerte...” (Dr. Arturo E. Sampay)..

El Estado, impregnado por la concepción nacional-popular que conocimos, con sus mas y sus menos, hasta el golpe cívico-militar de 1976 se caracterizó, no sólo por la propiedad de empresas que proveían de servicios públicos esenciales y la explotación de recursos naturales estratégi-



cos, sino por el control de su renta con la que se realizaron caminos, diques, centrales hidroeléctricas y nucleares, etc. A partir del golpe militar las empresas siguieron siendo de propiedad estatal pero su renta fue apropiada por empresas privadas que operaban como proveedores o contratistas. Sumado al mecanismo del endeudamiento y la posterior transferencia de la deuda externa al Estado, es decir al conjunto de la sociedad, permitió la consolidación y desarrollo de grandes grupos económicos que junto a las transnacionales se van a apoderar, durante la década del 90, de todas las empresas estatales es decir, del patrimonio de todos los argentinos.

La propiedad estatal o la presencia y control de Estado cuando la explotación de servicios públicos o recursos naturales se realice por formas jurídicas enmarcadas en la economía social, es condición necesaria pero no suficiente para que las mismas estén al servicio de las mayorías. Por eso es necesario la construcción de un nuevo Estado, no burocrático ni autoritario sino democrático y participativo donde la propiedad estatal vaya acompañada de formas de control y gestión social que posibiliten la más amplia participación de usuarios y consumidores para que la rentabilidad de las empresas vuelva a estar al servicio de todos y no de las ganancias de unos pocos.

La crisis energética latente es consecuencia de la aplicación de las políticas privatizadoras propias de la década del 90 que profundizaron la entrega del petróleo y el gas natural, materias primas no renovables, indispensables para la construcción de un proyecto nacional.

Se impone una política de recuperación de la propiedad pública para que empresas que surgieron y se desarrollaron por el trabajo y el esfuerzo acumulado por generaciones de obreros y profesionales de nuestro país, vuelvan a formar parte del patrimonio de todos los argentinos.

El agua, el petróleo y el gas están asociados a casi todas las actividades de nuestra vida cotidiana, y no pueden estar sujetos a la lógica de considerarlos una simple mercancía y al servicio de la acumulación de ganancias de las grandes corporaciones.

Hasta la crisis de 2001, el Estado se había debilitado enormemente con pérdida de eficacia de sus instituciones y la impúdica colonización de éstas por parte de intereses sectoriales y extranacionales públicos y privados. Con el actual gobierno comenzó a recuperarse la autoridad presidencial conjuntamente con el despliegue de un activismo estatal destinado a dar respuesta a las demandas más sentidas de la población, a sostener la recuperación económica y a recuperar, en términos de dignidad, la presencia de nuestro país en el escenario internacional.

Desde nuestra concepción reivindicamos al Estado como eje de una



política de desarrollo, en especial con respecto a la planificación global, la moneda el comercio exterior, los recursos naturales, la energía, los servicios públicos, la preservación medioambiental. Esto significa un Estado no sólo fuertemente interventor, sino productor y con capacidad de control sobre los mecanismos esenciales de vinculación entre la economía local y la internacional y por lo tanto con capacidad para intervenir en los flujos de comercio, de inversión y tecnológicos. El Estado debe además recuperar su capacidad y eficacia como proveedor de bienes públicos en especial en relación a la salud, la educación, la seguridad y la justicia.

3.- Profundizar las políticas destinadas a revertir el proceso de destrucción productiva y encarar profundos cambios estructurales.

El nuevo régimen macroeconómico, luego de la implosión de la convertibilidad, tiene como pilares fundamentales la flotación administrada del tipo de cambio a niveles elevados en relación al promedio histórico y la autonomía monetaria. A partir de ellos, los fundamentos del funcionamiento general de la economía, adquieren una dinámica virtuosa si se los compara con los treinta años de aplicación de las recetas neoliberales impuestas por los organismos multilaterales de crédito.

Sobre la base de esos pilares se fue desarrollando un cambio de precios relativos de la economía, generándose un círculo virtuoso caracterizado por un aumento del PBI a tasas elevadas respecto del promedio histórico, tasas de interés compatibles con un país productivo, superávit fiscal y en la balanza comercial, crecientes tasas de inversión y creación de empleo, aumento de la participación del sector industrial en el producto, en las exportaciones y en el empleo. En cuanto a la distribución del ingreso y la inflación, las mejoras son menos contundentes.

Todos los indicadores, que permiten analizar la distribución del ingreso en la actual gestión, presentan cifras positivas aunque su recuperación es mucho más lenta que el crecimiento del producto. Por esta razón es que, si bien bajaron fuertemente los indicadores, las cifras de pobreza e indigencia subsistentes muestran cuánto camino queda por recorrer. Debido a la importancia asignada al tema, se desarrollará su análisis y consecuentes propuestas en un capítulo específico.

Por último la inflación, con indicadores razonables al principio, si tenemos en cuenta la fuerte devaluación, en el último año ha comenzado un proceso ascendente al que es necesario responder con políticas públicas adecuadas. Desde las perspectivas ortodoxas ligadas al antiguo régimen económico hasta ciertas visiones más heterodoxas, se viene insta-



lando la idea de que la causa de la inflación está ligada al crecimiento demasiado veloz de nuestra economía superando lo que - dicen - es su tendencia de largo plazo, produciendo excesos de demanda que generan aumentos de precios. Las tradicionales recetas contractivas que proponen, para reducir la tasa de crecimiento, son en el plano monetario la reducción de su expansión; en el fiscal, la disminución del gasto público; en la política salarial, la negación de aumentos; en el tipo de cambio, la apreciación el peso, etc.

El movimiento de los precios no responde a leyes naturales e inmutables sino que es el resultado de procesos históricos y sociales. Por esta razón es que, las causas principales de la inflación hay que buscarlas y remediarlas, en primer término, a partir de dar respuesta a las dificultades de la estructuras productivas para insertarse en la división internacional del trabajo, sosteniendo estructuras económicas internas con alto grado de eficiencia y equidad social. En este sentido, es necesario profundizar la capacidad de regulación del Estado en la dinámica contradictoria de precios internos / precios externos y en segundo término, las causas que surgen de la estructura productiva de nuestro país. En cuanto a la relación entre precios internos y externos, el objetivo es la búsqueda de mecanismos equilibradores para que los precios finales del mercado interno en alimentos no reflejen la suba del precio de las materias primas en el mercado internacional, en el marco de una política de tipo de cambio competitivo. El nivel de propuestas pasa por la profundización e institucionalización de dos mecanismos de regulación económica desarrolladas en el actual gobierno: el sistema de compensaciones a la producción de materias primas exportables y el análisis y regulación de la cadena de precios. El sistema de compensaciones a la producción de materias primas agrícolas exportables y a la industria que las procesa consistente en fijar precios de referencia por producto, compensar al productor cuando vendiera por debajo, compensar al industrial cuando comprara pagando por encima de ese valor, y establecer retenciones adicionales al exportador para equilibrar su resultado neto y financiar, así, el régimen de compensaciones.

Asimismo, un cuidadoso seguimiento y análisis de costos en las cadenas de valor permitirá - además de otorgarle mayor transparencia al funcionamiento de los mercados - producir intervenciones específicas mucho mas eficientes por parte de la autoridad pública-

En lo relativo a la estructura económica de nuestro país, es de toda evidencia que tiene una configuración mas cercana al monopolio que a la libre competencia en casi todos los mercados estratégicos, incluyendo la producción de insumos de uso difundido, alimentos, etc. Desde la



devaluación, los mayores aumentos se registraron en los sectores económicos con elevada concentración entre un 100 y un 400 % cuando la inflación promedio llegaba a poco más del 90 %. Estos aumentos afectan a toda la sociedad pero lo hacen con más intensidad sobre los asalariados, que los padecen en los precios de los bienes de la canasta básica. El posterior intento de recuperación de los salarios no provoca inflación, simplemente busca sostener el poder adquisitivo recuperado luego del ajuste devaluatorio. Los ajustes de precios que aplican empresas con posición dominante en el mercado, tienen el objetivo de preservar márgenes elevados de rentabilidad por parte de esos grandes grupos económicos.

En líneas generales, podemos decir que en el mundo se aplican dos sistemas para regular las conductas de monopolios u oligopolios: las denominadas leyes antimonopolio, como la de Estados Unidos, que pone límites a la porción de mercado que puede abarcar cada empresa y las que utilizan las leyes que sancionan el abuso de la posición dominante, mediante la imposición de fuertes multas, como las europeas. La característica principal es que el primer sistema actúa para que la concentración no se produzca y el segundo, evitando que la concentración pueda hacer mal uso de su poder.

En nuestro país rige la Ley 25.156, de Defensa de la Competencia, aprobada en 1999, cuya regulación contempla la penalización de prácticas anticompetitivas y también regula y autoriza las fusiones de empresas. El Tribunal de Defensa de la Competencia previsto en esa ley, nunca se conformó y la aplicación de la norma recayó en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

El nivel de propuestas sobre el tema en examen pasa por jerarquizar la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, otorgándole mayor presupuesto y estructurando equipos con reconocida competencia técnica dada la envergadura de las funciones a realizar. En segundo lugar, es imprescindible poner en funcionamiento el Tribunal de Defensa de la Competencia con estructura, presupuesto y poder real para sancionar fuertemente las prácticas anticompetitivas y los abusos de posición dominante.

Es necesario adoptar medidas estructurales de política financiera, crediticia, impositiva, comercial y laboral que promuevan el desarrollo de la industria manufacturera, del agro y sus encadenamientos productivos (donde se verifica una fuerte concentración de la propiedad, tenencia y extranjerización de la tierra) y de las áreas productivas en general. Parte esencial es la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, así como establecer legislaciones en materia de comercio exterior e



inversión extranjera y políticas de desarrollo tecnológico regidas por un proyecto autónomo, nacional y regional.

Será necesario combinar la producción hacia los mercados interno y externo, sostener políticas responsables en materia fiscal, así como articular políticas de desarrollo industrial. El éxito de esta política debe medirse por su papel en el restablecimiento de las cadenas productivas nacionales y regionales, la generación de empleo, la satisfacción de las necesidades sociales, la conformación de una economía balanceada y la incorporación de conocimiento y tecnología propia a los desarrollos productivos.

4.- Reactivar el mercado interno y aumentar las exportaciones no deben ser objetivos incompatibles.

La reestructuración económica orientada al desarrollo sostenible, al incremento del nivel de vida de la población y a la redistribución de la riqueza exige que se siga revirtiendo la tendencia a la reducción del mercado interno que rigió en los noventa conjuntamente con políticas de estímulo a las exportaciones.

Creemos por ello fundamental promover políticas para el control nacional de los excedentes y de diferenciación entre precios internos e internacionales, el estímulo a la pequeña y mediana empresa y su tratamiento diferencial en sus obligaciones tributarias, laborales y sociales con relación a las grandes empresas, la creación de empleos productivos que rescaten a la población económicamente activa de las filas del desempleo y del sector informal.

5.- Nueva Ley de Entidades Financieras. Profundizar la capacidad del Estado para regular la especulación financiera nacional e internacional.

Impulsar la sanción de una nueva Ley de Entidades Financieras que ponga esa actividad al servicio de la producción y de la promoción del crédito con fines sociales. Se debe continuar con la recuperación de la capacidad del Estado nacional para controlar los movimientos internacionales de capital especulativo. La volatilidad actual en los mercados internacionales del dinero está demostrando la necesidad de reforzar los mecanismos establecidos para controlar los movimientos de los flujos financieros de corto plazo. Se trata, además de limitar la vieja bicicleta donde se combinan la vigencia de dinero barato en los países centrales, con la depreciación de las divisas y atractivas colocaciones de mediano riesgo y estabilidad cambiaria en los nuestros. Estas operatorias



suponen para el inversor extranjero un rendimiento, en dólares, que duplica el de los títulos del Tesoro de los Estados Unidos que, además, podrían incrementarse si nuestro signo monetario se revaluara. La normativa vigente establece expresamente que las notas y letras, que emite el Banco Central para esterilizar el circulante generado por la política de sostenimiento del tipo de cambio, no pueden ser tomadas por inversores extranjeros. Es necesario que la autoridad monetaria la haga cumplir adecuadamente ya que, estudios del propio gobierno sitúan el nivel de incumplimiento en una cifra cercana al 30 %.

La necesidad de construir una nueva institucionalización mas acorde con el modelo productivo vigente, se manifiesta en relación con el funcionamiento del Banco Central: es la necesario avanzar de un encuadre arraigando en su “función primaria” de defender el valor de la moneda hacia otro que incluya como sus funciones mantener el crecimiento sostenido de los agregados monetarios y crediticios con el potencial de crecimiento económico, promover los objetivos de pleno empleo, estabilidad de precios y moderadas tasas de interés de largo plazo. En el Congreso Nacional ya hay presentados proyectos en este sentido y que además avanzan en la necesidad de regular la coordinación entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo Nacional “...en la formulación y ejecución de las políticas monetaria, financiera y cambiaria...”.



6.- Reforma tributaria al servicio de la inversión productiva y de una mejor distribución de la riqueza.

Deben impulsarse reformas sustanciales en los sistemas tributarios, de tal manera que la política fiscal contribuya a desarrollar economías productivas y lograr una mejor redistribución del ingreso. Deben tributar más los que más tienen y combatir la evasión. Para los contenidos de la reforma proponemos:

- Gravar las ganancias de capital (Ej.: por venta de empresas) y las rentas financieras (Ej.: plazos fijos, rendimiento de títulos, etc.).
- Establecer mecanismos de estímulo a la reinversión de utilidades a partir de gravámenes a su distribución.
- Mantener elevado el mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias personales pero incrementando las alícuotas para el 25 % del universo de mayores ingresos.
- Restablecer el impuesto a la herencia a partir de un mínimo no imponible similar al de los impuestos a los bienes personales.
- Elevar el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales, pero incrementando las alícuotas de los no exentos.

7.- Ciencia y Tecnología.

Las inversiones en ciencia y tecnología resultan fundamentales para enfrentar los retos de un desarrollo económico que beneficie a las grandes mayorías. Las mismas permiten disminuir la dependencia hacia el exterior, una cooperación científica y tecnológica internacional más equitativa y también una presencia más competitiva en el mercado global.

Deberá también propiciarse el apoyo y financiamiento de investigaciones y desarrollo tecnológico orientado a las energías limpias y renovables, como forma estratégica de sustentar un proyecto nacional con capacidad energética y cuidado del medio ambiente.

Nuestra estrategia de desarrollo debe estar basada en la creación de conocimiento, aspecto clave para superar la falta de competitividad y la dependencia en materia tecnológica. Para continuar este proceso de crecimiento basado en la creación de conocimiento resulta imprescindible un fuerte rol del Estado y establecer como prioridad para el próximo gobierno superar la meta del 1% del PBI en la inversión para este área..

Se debe revertir el proceso de apropiación de ganancias, producto de la revolución tecnológica y su aplicación a los procesos productivos, compartiendo los aumentos de productividad con los trabajadores y la sociedad. La propiedad y la actividad empresaria deben beneficiar al



conjunto de la sociedad.

8.- *La protección medioambiental como centro de las políticas productivas.*

En los últimos veinte años la problemática medioambiental ha ido ganando espacio en las agendas de las políticas públicas, al punto que hoy ocupa un lugar central entre las temáticas abordadas en los foros internacionales. Ello refleja la creciente conciencia de sectores cada vez más amplios de la población mundial acerca de los peligros que acechan a la especie humana como consecuencia de la depredación de los recursos naturales, la emisión de gases tóxicos, el sobrecalentamiento del planeta y otros fenómenos producidos por el accionar de las grandes corporaciones multinacionales y las estructuras estatales de los países centrales.

La introducción de la biogenética en los procesos productivos y otras prácticas, sin reparar en las consecuencias que ello podría acarrear, constituyen una metodología que utilizan regularmente los grupos económicos más concentrados con el fin de contrarrestar la tendencia al descenso de la tasa de ganancia que caracteriza a esta etapa del capitalismo.

Una demostración clara de la importancia de la temática ambiental en las políticas del actual gobierno es el redimensionamiento de las misiones y funciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y su jerarquización en el organigrama del ejecutivo lamentablemente empañada por las denuncias sobre el área.

No podemos dejar de mencionar la actuación del gobierno nacional en el conflicto suscitado con la hermana República del Uruguay, con motivo de la instalación- en zonas limítrofes- de plantas industriales de pasta base para la fabricación de papel, que tendrían un fuerte impacto ambiental sobre la cuenca del Río Uruguay y Río de la Plata, afectando directamente las actividades económicas de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

Si bien el problema aún no está resuelto, podemos señalar que, en este caso, la participación activa del gobierno nacional acompañando los reclamos vecinales se complementó con un fuerte ejercicio de docencia sobre estos temas y una acción diplomática que combinó la firmeza en la defensa de nuestros derechos con la medida necesaria para no provocar un deterioro mayor en el ámbito del Mercosur.

En síntesis, las políticas medioambientales proyectadas y aplicadas hasta hoy por el gobierno de Kirchner, apuntan a revertir la inacción en la materia que caracterizó a las administraciones que le precedieron. Tal



como lo hemos expresado con relación a otras áreas de gobierno, esta etapa de transición revela signos positivos, pero subsisten aún resabios de la etapa anterior que deberán eliminarse para consolidar esta tendencia.

Un tema que motiva preocupación es el relacionado con la explotación de los recursos mineros por empresas privadas-muchas de ellas multinacionales- que, al amparo de incentivos legales para sus inversiones, realizan prácticas depredatorias de alto impacto negativo sobre el ambiente, con consecuencias más graves aún- a corto o mediano plazo- sobre la calidad de vida de la población local. Si bien es cierto que dichos recursos son de dominio provincial, creemos que la Nación conserva facultades para establecer presupuestos mínimos de resguardo de medioambiente, conforme lo normado por el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional

Es una actividad perfectamente diferenciable entre:

1) Actividad minera metalífera, denominada también como gran minería, comienza con un gran desarrollo en la década del 90 en lo que hace a la legislación, aún vigente y la explotación de grandes proyectos mineros ej. Mina Bajo de la lumbrera, Catamarca; minera altiplano, Salta (litio); Cerro Vanguardia, Santa Cruz (oro); Veladero, San Juan (cobre y oro). Proyectos en explotación y otros proyectos en vía de ser explotados Ej. Pascua- Lama, Argentino Chileno (cobre y oro); Aguas Ricas, Catamarca (cobre y oro).

Propuesta: Es necesario un cambio sustancial en la legislación vigente, modificando principalmente las condiciones y los porcentajes de beneficio económico tanto para los estados provinciales y municipales (Beneficiarios Directos), conforme al Código de Minería y al Estado Nacional (Beneficiario Indirecto). La ley de Inversiones Mineras. Ley 24.196, establece una regalía del 3% de mineral extraído, como máximo para la provincia -dueña del recurso-. Modificación también, como consecuencia, de las leyes modificatorias y complementarias de esta ley madre.

-A los fines de establecer relaciones laborales claras y con un buen control de dichas relaciones, es importante sancionar una legislación específica de trabajo con un régimen propio, de modo de proteger los recursos humanos calificados y a los operarios (obreros)

-En cuanto a la protección del medio ambiente (derecho ambiental), es necesario la exigencia del cumplimiento de la legislación vigente. Ej. Informe de impacto ambiental anterior a la puesta en marcha del proyecto. Principalmente la exigencia de presentar dentro del proyecto las remediaciones parciales y finales de los impactos ambientales producidos antes, durante y al fin de la explotación.



-Es importante, en términos generales, en este segmento de la actividad minera, establecer nuevas reglas de juego acorde a estos tiempos (la legislación actual tiene una antigüedad de aproximadamente 15 años).

2) Actividad minera no metalífera. En este segmento se encuentran principalmente las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas). Los minerales incluidos, en principio, son los que son utilizados en la industria de la construcción. Ej. Caliza, yeso, arcilla, etc.

Propuesta; Es necesario establecer un régimen normativo destinado a un mayor desarrollo de la actividad. Es necesario un mayor apoyo, mediante subsidios, a las sociedades empresas y las empresas unipersonales. Ej. Industria cerámica, del ladrillo común.

Medio Ambiente: Es necesario implementar, al igual que en el caso de la gran minería, la remediación del medio ambiente tanto ante, durante y al final de la explotación.

Régimen Laboral: Es necesario la exigencia del cumplimiento de las leyes laborales vigentes, con algunas modificaciones específicas para el sector.

Planes Sociales: Es necesario intensificar los planes sociales nacionales actualmente vigentes. Ej. Plan social minero, plan de Huellas mineras, de manera tal de lograr un desarrollo vital a este segmento de la actividad minera.

9.- El agua no es un bien de mercado

El agua potable no es una mercancía. Considerar el agua potable y el saneamiento ambiental como derechos humanos fundamentales y asegurar su gestión pública y participativa desde la perspectiva de la sustentabilidad, es el mandato que, a nuestro juicio, nuestra sociedad debe exigir de sus representantes políticos, por el bien de las generaciones presentes y futuras.

El agua debe ser considerada como un derecho humano fundamental no sujeto a privatización alguna, como así lo manifestó mayoritariamente el pueblo uruguayo en una Consulta Popular celebrada a tal efecto. Así también, el servicio de saneamiento y el servicio de abastecimiento de agua para consumo humano deben ser prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales con participación y control de la sociedad civil.

10.- La redistribución progresiva del ingreso como objetivo central de la



acción pública

La implosión del modelo neoliberal en diciembre de 2001 dejó una secuela de destrucción social caracterizada por cifras de pobreza cercanas al 60 % y de desocupación de más del 23 %.

A partir de este sombrío panorama, la política de ingresos del Gobierno Nacional tuvo como objetivo la recuperación del nivel de ingreso real de los trabajadores activos y pasivos en un marco de estabilidad y una recuperación económica sostenida.

Se trató de medidas puntuales entre las que cabe mencionar:

- Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (Plan Jefes). La disminución de la cantidad de beneficiarios (mas de 600.000 mil) en el último período se debe que algunos titulares del Plan consiguieron empleo y a la posibilidad de los beneficiarios de optar por el traspaso al Plan Integral de Empleo: Más y mejor trabajo (implementado por el Ministerio de Trabajo) y al Programa Familias por la Inclusión Social, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Continúa con igual remuneración que al inicio del presente gobierno, solamente se le otorgaron sumas por única vez en diciembre de los tres últimos años.

- Jubilaciones y pensiones: permanentes subas de los haberes mínimos, aumentos para la totalidad de los haberes, suplementos en haberes hasta un piso, subsidios y jubilaciones anticipadas.

- Aumentos de sumas fijas a trabajadores del sector privado, incorporaciones al salario básico y continuos aumentos del salario mínimo vital y móvil.

- En las asignaciones familiares se incrementaron los montos de las asignaciones por hijo, prenatal y por hijo con discapacidad, y se modificó el tope máximo que permite la percepción del beneficio. Se elevan los topes y rangos de remuneraciones y haberes previsionales que habilitan al cobro de las asignaciones familiares.

- Reducción de aportes personales y aumentos de los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias.

- Aumentos a los trabajadores de la Administración Pública Nacional y otorgamiento de vales alimentarios.

A cuatro años de acción de gobierno en la materia podemos decir que cualquiera sea el sistema que se utilice para medir la distribución del ingreso, distribuciones personal o familiar del ingreso, distribución funcional del ingreso y coeficiente de Gini, la mejora en los indicadores es importante aunque no suficiente si tenemos en consideración que los actuales niveles de pobreza e indigencia subsistentes son incompatibles con un modelo con mínimos contenidos de equidad.



En este tema, el nivel de propuestas pasa por la concertación de un conjunto de políticas que al promover la redistribución de los ingresos y las riquezas, posibiliten continuar con el proceso de reducción de la desocupación, la pobreza y la desigualdad. Se trata de la realización gradual de políticas que permitan la aplicación universal de derechos consagrados por nuestra Constitución Nacional y que establecen un piso mínimo en la construcción de ciudadanía:

- Universalizar las políticas de asignación familiar de manera que alcancen a todos los menores de 18 años.
- Universalizar el acceso a los servicios públicos esenciales, a partir de la entrada en vigencia de la tarifa social.
- Desarrollar un sistema universal de cobertura sanitaria, que garantice el derecho a la salud de todos los habitantes.
- Continuar con la prioridad en la inversión educativa.
- Seguro de empleo y formación para todos los Jefes y Jefas de hogar desocupados.
- Plan de viviendas sociales que permita cumplir con ese derecho constitucional.

Finalmente, en la aplicación de la política económica del gobierno nacional para avanzar en una mejor distribución del ingreso, deberán instrumentarse las siguientes medidas:

- Implementación de una profunda Reforma Tributaria que permita modificar drásticamente la composición regresiva del sistema impositivo nacional.
- Modificación De la Ley de Defensa de la Competencia.
- Regulación del capital concentrado local y extranjero.
- Impulso de la economía popular, social y pública.
- Promoción de las Pymes como factor de democratización de la economía y principales generadoras de empleo.
- Tratamiento diferencial de las unidades económicas de menor tamaño, tanto urbanas como rurales.
- Normalización y regularización de la situación de los ocupantes de tierras.

11.- Continuar con las reformas en educación, salud y seguridad social.

La educación, herramienta imprescindible para construir una sociedad donde exista la igualdad de oportunidades, la salud, la vivienda y la seguridad social en sus diversos aspectos, constituyen otras áreas en donde se requerirá articular las reformas en marcha con iniciativas de largo plazo y de hondo contenido solidario. Los planes de emergencia, junto con la creación de políticas de ingreso social de carácter universal,



resultan imprescindibles para atender situaciones que no pueden esperar a que rindan sus frutos las transformaciones estructurales de fondo.

La Educación es un derecho social, en tanto resulta sustantivamente una responsabilidad de todos y es un bien de todos: su finalidad debe ser la de construir los vínculos culturales, cognoscitivos, lingüísticos, éticos y sociales entre otros; desde los principios humanistas de libertad; justicia; solidaridad en democracia e igualdad de oportunidades.

Vínculos que justifican por sí mismos el punto de partida y el sentido de pertenencia e identidad nacional del pueblo argentino en su contexto histórico, político, cultural y social; vínculos que deben construirse desde el debate, el consenso y la participación de todos; a fin que considere y contenga aquellas diversidades que son propias de las distintas regiones y provincias de nuestro país. Justamente, el sentido y significado de Nación está sustentado desde lo diverso.

La des-vinculación y des-humanización de la educación y del sistema educativo nacional, viene siendo ejecutada desde por lo menos, los últimos cincuenta años. Los gobiernos de facto y la década del noventa significaron lisa y llanamente la destrucción de la educación pública nacional.

El sistema educativo argentino desde sus comienzos y en su organización adquiere una estructura centralizada desde el Estado Nacional; responsabilizándose primero en la educación primaria y luego en la secundaria y universitaria. Si bien en las décadas del sesenta y setenta respectivamente el Estado Nacional comenzó un proceso des-centralizador y de traspaso de escuelas y agentes educativos a algunas provincias; en los noventa la ley 24049 facultó al Ministerio de Educación de la Nación a transferir el total de los servicios educativos a las provincias del país. Dicha “des-centralización” justificó el argumento neoliberal de considerar la educación como un gasto, desde un punto de vista netamente economicista frente a los órganos financieros internacionales y desde lo político pretendió significar la “federalización” de la educación en una ley promulgada a espaldas de los intereses nacionales.

El modelo y las políticas neoliberales de los noventa y su impacto en lo educativo, desde una pseudo ley “federal” de educación; controló y disciplinó a los estados provinciales y a sus docentes, mediante los “pactos educativos”; “diseños curriculares”; “políticas compensatorias”; “programas de calidad educativa”; “red federal de formación docente continua” entre otras; financiados por el Banco Mundial y que vinieron a engrosar la nada transparente deuda externa y que además, tuvieron su correlato en los altos índices de desocupación, precarización del trabajo y de destrucción sistemática de los vínculos sociales y del trabajo, sirva



de ejemplo: la exclusión de dicha normativa nacional a la educación técnica.

El Estado Nacional es garante del ejercicio universal al derecho social a la educación y su responsabilidad y obligación son indelegables e intransferibles para con ese ejercicio ciudadano. La Educación Nacional es libre, gratuita y laica; con igualdad de oportunidades y posibilidades para todos; atendiendo a lo regional, lo multicultural, los campesinos, las personas con capacidades diferentes, las personas privadas de la libertad.

Que consecuente con los principios de fe doctrinaria del Partido Intransigente corresponde proponer los siguientes objetivos a efecto de poder construir un mejor sistema educativo nacional:

- Reformular las funciones del Consejo Federal de Cultura y Educación; a efecto que los acuerdos que allí se logren, surjan del dinamismo del debate que con anterioridad deberán darse en cada jurisdicción pro-



vincial.

- Establecer que la obligatoriedad de la educación debe comenzar a los dos años de edad, hasta finalizada la educación secundaria.

- Garantizar la permanencia e inclusión mediante un sistema de becas; medios de transporte para los alumnos de zonas rurales; como así también la revalorización de los Centros Educativos Complementarios, promoción comunitaria, alimentación, apoyo escolar, talleres varios, entre otros.

- Implementar la reestructuración educativa teniendo en cuenta los siguientes Niveles: a- Jardín Maternal, b- Inicial – Primario, c- Secundario, d- Terciario No Universitario y e- Universitario.

- Favorecer políticas de urgente reparación para las Modalidades de Educación Especial; Artísticas, de Adultos y Educación a Distancia; por ser históricamente las más olvidadas y soslayadas.

- Construir en todos los casos, una pedagogía de la participación, que genere instancias de construcción colectiva y de aprendizaje de la participación en la educación para toda la comunidad educativa.

- Incluir a aquellos docentes sin trabajo en el Plan Nacional de Alfabetización.

- Generar mecanismos de monitoreo y evaluación permanente a efecto de garantizar el impacto deseado de las distintas acciones educativas tanto en el orden nacional como provinciales. Fijando para ello, metas concretas y criterios de mejora a largo, mediano y corto plazo.

- Favorecer las acciones de capacitación y perfeccionamiento, gratuita, continua y en servicio.

- Crear un organismo nacional de educación terciaria no universitaria con funciones en los aspectos curriculares, de perfeccionamiento y capacitación; planeamiento educativo y evaluación; incorporando al mismo, un cuerpo de rectores que representen a cada una de las provincias.

- Democratizar los Institutos de Nivel Terciario No Universitario, con la creación de Consejos Directivos; garantizando: a) el derecho de elegir y ser elegidos con el voto directo de los docentes de hasta cuatro años de antigüedad en la institución, el cargo de Rector por el lapso de cuatro años. b) el derecho de elegir y ser elegidos con el voto directo de docentes, no docentes y alumnos la integración de su Consejo Directivo.

- Aprobar los diseños curriculares nacionales para los distintos niveles y modalidades desde una construcción consensuada atendiendo a la subjetividad y a lo diverso.

- Diagnosticar en toda la nación, la cantidad y calidad de los edificios escolares; a efecto de poder conocer fehacientemente los medios con los que se cuenta en las distintas jurisdicciones del país. De manera tal de



planificar, en función de espacios y medios posibles.

- Derogar la Ley de Educación Superior a efectos de: a) profundizar su democratización, posibilitando que todos los docentes con un mínimo de cinco años de antigüedad tengan el derecho de elegir y ser elegidos como autoridades universitarias. b) rediseñar los contenidos curriculares y la incumbencia académica a fin de establecer la formación docente y la formación del investigador respectivamente. c) adecuar y planificar las ofertas educativas en relación a las necesidades e intereses de cada región.

- Promover la articulación y la realización de acciones tendientes a vincular y socializar las investigaciones y la formación del investigador entre los Niveles Secundario y Terciario No Universitario y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

En definitiva, la cultura y la educación son los bienes que sostendrán y vincularán un proyecto colectivo y humanista de Nación para todos, en igualdad de condiciones y posibilidades. Por ello, la nueva legislación educativa debe brindar y garantizar la pluralidad democrática y la formación ciudadana de los distintos actores; como así también la posibilidad de poner en marcha y de manera institucional, diversidad de metodologías capaces de crear espíritu crítico, de establecer conexiones con el pasado, del uso de la lengua. Debe ofrecer entrenamiento a los diferentes actores para abordar las nuevas realidades del proceso enseñanza-aprendizaje que contengan y eviten la exclusión del derecho social a educarse.

12.- Reconstruir el sistema previsional público basado en la solidaridad intergeneracional y la equidad

Creemos necesario profundizar la reforma consagrada por la ley 26222, fortaleciendo el sistema previsional público a través de las siguientes medidas:

- a) Restablecimiento del carácter universal del sistema de reparto, restituyendo la obligatoriedad de los aportes de todos los trabajadores en actividad. Sistema de capitalización opcional para aquellos trabajadores que quieran efectuar aportes adicionales a las A.F.J.P.

- b) Progresiva elevación del porcentaje de las prestaciones previsionales con respecto a los salarios de los trabajadores en actividad, hasta alcanzar la meta del 82% móvil.

- c) Derogación de todas las normas que establecieron disminuciones



del porcentaje de los aportes patronales para determinados sectores, actividades o regiones. Los aportes previsionales no deben ser variables de ajuste para otorgar incentivos económicos que pueden brindarse a través de otras herramientas de las políticas fiscales.

d) Participación efectiva de los beneficiarios y de los trabajadores en actividad en la administración de los fondos previsionales y en la planificación, ejecución y control de medidas que puedan afectar al sistema previsional.

13.- Profundizar la democracia.

El involucramiento creciente de sectores sociales resultará determinante y adquiere sentido estratégico. El poder transformador de las fuerzas democráticas dependerá, más que nunca en esta época, de su capacidad para interpretar y ganar el apoyo activo de las grandes mayorías, así como del impulso de auténticas y flexibles políticas de alianzas que posibiliten amplios consensos sociales.

El objetivo no es llegar al gobierno, sino llegar para transformar la sociedad y como ello no es tarea de unos pocos años, sino un proceso complejo y largo, será imprescindible consolidar y ampliar los respaldos sociales para la construcción de un proyecto estratégico que permita mantenerse en el gobierno y realizar los grandes cambios que demanda nuestra sociedad.

Es por todo ello que nos parece fundamental asegurar procesos a través de los cuales se garantice la participación democrática en la toma de decisiones por parte de todas y todos los actores sociales en un marco de relación igualitaria y de respeto a la diversidad.

Propiciar el desarrollo de estrategias políticas que articulen lo nacional con lo regional y lo local, asegurando reales procesos de descentralización y la democratización de los procesos de elaboración y aplicación de políticas públicas.

Nuestra meta es la revolución, es decir, una profunda transformación de la sociedad, la que habrá de realizarse reafirmando y recreando la democracia, aspecto esencial de todo proyecto alternativo. De lo que se trata es de abrir más y mejores canales de participación de todos los segmentos de la población, sobre todo de quienes continúan marginados del proceso de decisiones. El avance de una nueva democracia pasa por lograr mayor poder político para el pueblo y restituirle a las instituciones del Estado-Nación la capacidad decisoria que le permita cumplir sus funciones de mediación social. La vigencia y consolidación de un sistema político-institucional democrático son sustanciales para el pro-



yecto alternativo.

Queremos la democracia que hemos logrado reconquistar, nos hacemos responsables de su preservación, pero no aceptamos las restricciones y las mezquinas limitaciones que la derecha oligárquica pretende perpetuar.

La democracia participativa a la que aspiramos debe incorporar el “Presupuesto Participativo (PP)” y la “Planificación Estratégica Participativa (PAP)” como instrumentos de la gestión pública. Sancionar una nueva ley que regule la participación popular y establezca una combinación de Iniciativa y Consulta Popular para que tanto en el plano legislativo (aprobación de leyes) como en la administración pública (aprobación de decretos reglamentarios) se garantice que los mecanismos de la democracia representativa no puedan frenar o distorsionar las iniciativas de los pueblos.

14.- No hay democracia política sin democracia comunicacional.

Tenemos la firme convicción que es imprescindible trazar una estrategia encaminada a fomentar la democratización de la comunicación que a la vez sea impulso, sostén y defensa de las transformaciones necesarias para una sociedad mas justa.

Esa estrategia deberá contener los puntos que enunciamos a continuación:

- Promover un Marco Legal inclusivo y desconcentrador
- Promover políticas que tiendan a democratizar el acceso a la información y a la producción de mensajes
- Promover y apoyar a los medios comunitarios, alternativos, populares con estrategias similares a las de apoyo a pymes y cooperativas. (Créditos y subsidios para reconversión tecnológica, cursos de capacitación, aliento de redes, etc.)
- Promover la participación de la gran cantidad de estudiantes y docentes de cine, televisión, comunicación en el desarrollo, capacitación, apoyo y fomento de iniciativas sociales y comunitarias de comunicación popular.
- Promover la utilización de software Libre y de internet libre, democratizando lo más posible el acceso a la red.
- Promover la participación de trabajadores de prensa, sindicatos, espectadores y la ciudadanía en general en concejos consultivos, audiencias públicas, organismos de contralor y todos aquellos ámbitos en los que pueda debatirse el tema.
- Promover la comunicación Pública en todos sus soportes (Radios,



cable, televisión abierta, etc.) y niveles (Nacional, provincial, municipal) continuando con la tarea realizada hasta el momento y profundizándola

Únicamente con una estrategia que incluya estas propuestas podremos avanzar hacia la necesaria democracia informativa y comunicacional con la que podremos garantizar la construcción del camino de las transformaciones sociales que deseamos

15.- Política exterior al servicio de los intereses de los pueblos y de la integración soberana de América Latina.

La política exterior debe estar al servicio de los intereses de cada país y de la búsqueda y promoción de mercados para su producción, en el marco de los siguientes principios: afirmación de la independencia irrestricta en las decisiones que tome cada nación, solidaridad con los pueblos del mundo, reafirmación del principio de no intervención y autodeterminación, mantenimiento de relaciones con todos los países, democratización de los organismos internacionales, promoción de la constitución de un frente de países en desarrollo por el comercio justo y contra el intercambio desigual, defensa de los derechos humanos, defensa del medio ambiente, respaldo al desarme y activo compromiso a favor de la paz mundial, lucha por un orden internacional justo. La política exterior de los gobiernos populares debe ayudar a la creación de un nuevo orden internacional.

El proyecto alternativo, sólo podrá abrirse camino si conjugamos ese valor superior que es la solidaridad. Solidaridad con quienes luchan por el pan, por la democracia, por la paz y por la justicia. Con quienes se enfrentan a la reacción y al imperialismo, solidaridad con Cuba, solidaridad con las organizaciones políticas comprometidas con las transformaciones democráticas y revolucionarias a lo largo y ancho de nuestro continente.

La integración no excluye el interés nacional, pero sólo mediante esquemas de integración subregional y regional será posible alcanzar el peso específico que permita negociar exitosamente frente a los bloques económicos que hoy se consolidan en el mundo. Como proceso, debe estar encaminado a lograr la convergencia y complementariedad económica y social de los países de la región.

La integración no es sólo una cuestión técnica o económica, sino que constituye una tarea esencialmente política, de una envergadura y una significación tal que no puede quedar sólo en manos de los gobiernos: en



ella tienen que participar activamente los partidos políticos, los movimientos populares, las organizaciones no gubernamentales, los empresarios afectados por el neoliberalismo y todos los actores reales, especialmente los verdaderos productores de riqueza. Dos proyectos aparecen como prioritarios para afianzar la integración en el mediano y largo plazo: El Banco del Sur y el el proyecto de gasoducto que permitirá la integración gasífera de América del Sur. El actual gobierno ha operado regionalmente bajo estos principios, su continuidad será la garantía de profundización del camino de integración regional emprendido.

16.- Derechos Humanos: Memoria, Verdad y Justicia

La tarea de recuperación de la memoria colectiva y esclarecimiento de la verdad que ha realizado el gobierno de Kirchner debe ser continuada y profundizada, a través de las diversas herramientas que poseen el Estado y la sociedad para dichos fines. El establecimiento de nuevos “sitios de la memoria”, el incentivo a las investigaciones acerca del accionar del terrorismo de estado, la inclusión en los planes educativos de materias que aborden esta temática, la promoción de eventos culturales relacionados con esta cuestión constituyen –entre otras- medidas que



deben adoptarse para lograr ese objetivo.

Pero no alcanza con la verdad y la memoria si no llega la justicia. Si bien el juzgamiento y condena de todos los responsables es una tarea del Poder Judicial, el gobierno debe adoptar todas las medidas a su alcance para remover obstáculos que impidan o dificulten su realización. Así, por ejemplo, la protección de los testigos, el enjuiciamiento de los magistrados renuentes, la depuración de las filas de las fuerzas de seguridad de elementos vinculados al terrorismo de estado, son tareas imposterables.

Por otra parte creemos importante continuar con las políticas destinadas a respetar la diversidad y poner fin a todo tipo de discriminación de género, etnia, etarea, condición física o mental, orientación sexual, de opción religiosa e ideológica. Proponemos, asimismo, el desarrollo de políticas públicas y la promoción de conductas colectivas en todos los niveles ya que ninguno de los objetivos mencionados en este párrafo se logrará sin una activa participación social.

17.- Seguridad: La política de Seguridad no es una variable autónoma del contexto socioeconómico

La exclusión social que padecen grandes sectores de nuestra población, como consecuencia de la vigencia del modelo liberal que los condujo a la desocupación y la miseria, inevitablemente tuvo su correlato en el aumento de la criminalidad. Por ello la respuesta a esta problemática está íntimamente ligada a políticas de inclusión social, descenso de las tasas de desocupación e indigencia, ampliación del acceso y contención del sistema educativo, es decir a la redistribución del ingreso.

El aumento de las penas, el agravamiento de las condiciones de disminución de cumplimiento de las condenas y otras propuestas de este tipo -a las que suele denominarse políticas de “mano dura”- demostraron que lejos de mejorar la situación, contribuyeron a agravarla.

En este sentido creemos que la aceleración en el mejoramiento de la situación socioeconómica, que reseñamos en los puntos precedentes, tendrá, a mediano plazo, su contrapartida en materia de seguridad. Sin embargo, ello no significa que no deban adoptarse políticas específicas en este área, ya sean coyunturales o de mayor permanencia, cuya propuesta reseñamos a continuación.

Establecer un liderazgo gubernamental integral sobre las instituciones de seguridad, lo cual supone abandonar la tendencia histórica a delegar en las instituciones policiales el manejo de las cuestiones de la seguri-



dad ciudadana.

Multiplicar las medidas destinadas a la prevención del delito.

Cambio de los programas de estudio en los establecimientos de formación de oficiales y suboficiales de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias, tendientes a mejorar la capacitación profesional y el compromiso con el sistema democrático y el respeto por los derechos humanos

Sistema de selección y ascensos de personal que privilegie el mérito, la capacitación permanente y el compromiso con la sociedad.

Reequipamiento de las fuerzas de seguridad que contemple la provisión de equipos y tecnologías acordes con los adelantos científicos en la materia.

Fomentar la participación de una ciudadanía activa y comprometida, que asegure la intervención de la comunidad en la elaboración de las políticas de seguridad, y el control del funcionamiento del sistema de seguridad.

En cuanto a la investigación de la criminalidad compleja, los ejes de la jerarquización orgánica y funcional deben ser la conformación de un área de inteligencia criminal, la elaboración de programas específicos, la mutua colaboración, complementación y asistencia recíproca con organismos provinciales e internacionales.

Intercambio fluido de datos entre las áreas de inteligencia de las distintas fuerzas de seguridad, con miras a una progresiva fusión de los mismos.

Reforma del sistema carcelario que privilegie el trabajo remunerado de los reclusos y su reinserción en la sociedad.

Buenos Aires, 11 de agosto de 2007

Convención Nacional

"Hacia un Bicentenario justo, libre y solidario"

(2010)

“Será que quienes abrazamos estas ideas desde hace mucho tiempo, siempre hemos concebido a la dignidad, a la justicia social y a la equidad como los objetivos fundamentales para transformar a una sociedad y sabemos que lo fundamental es, entonces, que todos puedan tener igualdad de oportunidades en la vida (...) y quiero que ustedes me ayuden a seguir construyendo una Argentina más justa, más equitativa, más igualitaria, más respetuosa de los unos con los otros”

Cristina Fernández de Kirchner



En vísperas del Bicentenario de la Revolución de Mayo y a punto de cumplirse siete años del inicio del proceso de construcción de un nuevo Proyecto Nacional, con la intención de realizar nuestro aporte analítico en la presente etapa, la Convención Nacional del Partido Intransigente

DECLARA

- Que continuamos visualizando la actual etapa histórica como la transición desde un modelo de valorización financiera y especulación, con exclusión y dependencia, hacia un nuevo modelo productivo con inclusión social e integración regional que desde el año 2003 viene expresando el gobierno de Néstor Kirchner y profundizando Cristina Fernández de Kirchner.
- Que dicho proceso enfrenta la dificultad de revertir más de tres décadas de implementación del modelo anterior y la feroz oposición de los sectores beneficiados por aquel.
- Que la disputa al interior del bloque económico dominante está centrada entre impedir la modificación de la matriz distributiva del modelo



anterior, apropiándose de los beneficios de cualquier crecimiento productivo o intentar una regresión a la especulación financiera e incluso a la Argentina excluyente y agroexportadora del primer centenario.

- Que la crisis internacional es una crisis estructural del capitalismo poniendo en cuestión, tal como sucedió previamente en nuestro país, el modelo de valorización financiera. Argentina y otros países de la región pudieron esquivar sus peores efectos porque, pese a las recomendaciones en contrario, profundizaron la presencia del Estado en la economía y la articulación regional, alejándose de las recetas clásicas recomendadas por los organismos financieros internacionales.

- Que los sectores económicos dominantes ven disminuida su capacidad de influencia sobre el poder político y, para recuperarla, intentan deslegitimarlo y desgastarlo con la ayuda fundamental de los conglomerados mediáticos.

- Que a esos sectores no les interesa la reconstrucción y ampliación del mercado interno ya que su objetivo es beneficiarse únicamente de la exportación de materias primas y sus derivadas de escaso valor agregado.

- Que la crisis de representación que afectó y afecta a los Partido Políticos y a otras instituciones de nuestra sociedad, tiene sus causas en el debilitamiento del Estado, la fragmentación de la sociedad, la creciente exclusión que generó el modelo neoliberal y la irrupción de los medios masivos de comunicación como mediadores simbólicos de demandas.

- Que un nuevo rol del Estado Nacional y de las nuevas articulaciones regionales, constituirá la base para la reconstrucción de las funciones básicas de mediación y articulación de intereses que caracterizaron a los partidos políticos hasta la instauración del modelo neoliberal

- Que en ese sentido ratificamos una vez más nuestro incondicional apoyo a Ley de Servicios Audiovisuales, a la implementación del Plan Argentina Trabaja, a la implementación de la Asignación Universal para la niñez y del Programa Conectar-Igualdad.

- Que continuamos firmemente apoyando la política de Derechos Humanos de este gobierno que, en el marco de la búsqueda de verdad, memoria y justicia, promueve los juicios contra delitos declarados de Lesa Humanidad e imprescriptibles.



- Que apoyamos las decisiones políticas que han resuelto el aumento del presupuesto en educación, la inclusión de los pueblos originarios en las políticas de Estado y la inclusión de las amas de casa en el sistema de jubilación estatal, entre tantas otras medidas que benefician a los sectores más desprotegidos de la sociedad.
- Que estamos convencidos que debemos seguir aportando a la consolidación del actual proceso político y, además, a la articulación de sectores políticos y sociales, nacionales y populares, que le pueden aportar al Proyecto Nacional una valiosa sumatoria de visiones plurales y de diversidad cultural.
- Que como ya dijéramos en otras ocasiones, la Argentina y América Latina toda, está pasando por una etapa histórica en la que no nos está permitido a quienes siempre soñamos con estas transformaciones, permanecer indiferentes. El compromiso con la etapa implica un camino de riesgos, contradicciones, avances y retrocesos. No transitarlo, o intentar atajos funcionales al pasado, constituiría una contradicción con nuestros postulados fundacionales y con los Aportes al Proyecto Nacional.
- Que por todo ello, ratificamos una vez más nuestro compromiso con la Presidenta Cristina Fernández y con el proceso político iniciado el 25 de mayo de 2003 conducido por Néstor Kirchner.

Plenario de la Convención Nacional

En la Ciudad de Buenos Aires a los 17 días del mes de Abril de 2010.



Fundamentos

1.- EL MODELO EN CURSO. BALANCE Y PERSPECTIVAS:

1.1.- De la crisis del modelo financiero a la emergencia del nuevo.

La Mesa directiva y la Convención nacional, a partir del 2003, caracterizaron el desarrollo de la etapa que se inicia con la crisis final de la convertibilidad en estos términos: “Las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 marcan el fin del ciclo del modelo neoliberal que comenzara a instalarse en nuestro país veinticinco años antes, caracterizado por la aceptación acrítica de las políticas económicas impulsadas por los centros mundiales de poder y sus organismos multilaterales de crédito que impusieron la valorización financiera como modo de acumulación del capital, la destrucción sistemática de la industria nacional, y la pérdida masiva de puestos de trabajo, que condujo a la miseria a millones de hogares argentinos”.

Caracterizábamos entonces el reacomodamiento de la estructura económica dominante de la siguiente manera: “En lo estructural la sustitución del patrón de acumulación, devaluación mediante, por otro con preeminencia de la acumulación productiva, mas acorde con el proceso mundial en desarrollo, permitió saldar las contradicciones al interior del bloque dominante con la adecuación de todos al modelo en curso”.

Pero advertíamos también la contradicción entre el nuevo modelo en curso y el sistema de representación política: “En lo superestructural la adecuación no fue posible; ello se tradujo en una crisis de autoridad caracterizada por la pérdida de consenso del bloque dominante en la sociedad y la deslegitimación de su representación política -especialmente de los partidos tradicionales y la centroizquierda que ejercieron el gobierno en la etapa anterior-, expresada patentemente en la consigna “que se vayan todos”, coreada durante aquellas jornadas por multitudes que -más allá de su indignación- no encontraban el actor político que pudiera articular el nuevo bloque social y desarrollar una nueva hegemonía sobre el conjunto de la sociedad”.

De allí que definiéramos a la etapa como de transición: “Esta contradicción entre la estructura dominante y el sistema de representación política es lo que nos permite caracterizar a la etapa como de transición, signada esencialmente por la disputa entre lo viejo que pugna por perpetuar la dominación y lo nuevo que intenta abrirse paso para realizar las



transformaciones estructurales que nos liberen de esa dominación”.

“Una característica de las etapas de transición que no podemos dejar de mencionar, es la mayor autonomía del poder político con relación a los intereses del bloque dominante”. Esta mayor autonomía posibilitó el despliegue de políticas que defienden los intereses mayoritarios de la población: “...las políticas desplegadas por el gobierno nacional en materia de derechos humanos, defensa nacional, alineamiento internacional, integración latinoamericana, reestatización de empresas públicas, entre otras, coinciden con los lineamientos de nuestro programa partidario; las retenciones sobre las exportaciones agrícola-ganaderas y energéticas, las medidas para regular el aumento de precios de productos de consumo popular, el mayor control ejercido sobre los concesionarios de servicios privatizados, constituyen señales de un rumbo diferente y provocan la irritación de los que hasta hoy se creen los “dueños de la nación”.

Esta irritación se manifestó a través de dos herramientas esenciales del bloque dominante: la generación del proceso inflacionario y la fuga de capitales en lo económico y el terrorismo comunicacional en lo político, que el arco opositor usufructuó, salvo escasas excepciones, sin medir consecuencias futuras y colaborando en la recuperación del poder económico por sobre el sistema de representación. Finalmente la articulación de las organizaciones patronales del campo contra el aumento de los derechos de exportación y su transformación en móviles permitió a este sector desplegar políticas que exceden los reclamos sectoriales y expresan su decisión de transformarse en el sector más dinámico de la clase dominante y desplegar políticas que parecen ir más por una restauración noventista que por el desarrollo de disputas sobre el ingreso en el marco del actual modelo.

Además de la contradicción entre el bloque dominante y sus expresiones políticas con el proyecto que encabeza Néstor Kirchner, nos interesa definir qué grado de disputas existen al interior del bloque dominante y si, a la vez, expresan luchas por la hegemonía dentro del nuevo modelo o un intento de restauración del anterior.

1.2.- La transición: disputas sobre la hegemonía en el nuevo modelo o restauración del modelo anterior.

La debacle del patrón de valorización financiera no arrastró consigo a los sectores que componían el bloque dominante en el contexto de ese modelo de acumulación. Si bien hubo alguna recomposición interna de dicho bloque, lo cierto es que la mayoría de las grandes empresas logra-



ron adaptarse - con mayores o menores dificultades - al cambio operado en el modo hegemónico de acumulación. Ello no debe sorprendernos si se toma en cuenta la diversificación de las inversiones que caracteriza a los grandes grupos económicos; dicho en otras palabras, los sectores que multiplicaron su rentabilidad a través de inversiones financieras son los mismos que adquirieron unidades económicas productivas rentables con una parte de las ganancias obtenidas en la timba financiera; son también los que obtuvieron las concesiones de los servicios públicos privatizados en ese periodo. Esta configuración de la economía, de características oligopólicas y con predominio en las principales empresas de las de origen extranjero, refuerza aún más la hegemonía que ejerce el bloque dominante sobre el conjunto de la sociedad, que se expresa no sólo en la estructura económica, sino también en el dominio de los aparatos culturales, especialmente en los medios de comunicación masiva.

La política económica desplegada por el gobierno nacional permitió, hasta fines de 2006, un crecimiento económico sostenido con una gradual mejoría en la distribución del ingreso. Una breve reseña de los indicadores económicos y sociales, previo a la crisis del INDEC, permite comprobar lo expuesto.

El Índice de Gini es el indicador más utilizado para medir la desigualdad en la distribución del ingreso. Toma valores comprendidos entre 0 y 1. El valor 0 corresponde al caso de «igualdad absoluta de todos los ingresos», el valor 1 al caso extremo contrario, donde todas las personas tienen ingreso 0 y una sola persona se lleva el total del mismo. Se lo utiliza a veces para comparar la distribución del ingreso entre países o para mostrar cómo evoluciona la distribución del ingreso de un país. La evolución de este coeficiente durante los años 2003 a 2006 (2003: 0,519; 2004: 0,502; 2005: 0,496; 2006: 0,489), muestra claramente la mejora en la distribución del ingreso como así también una moderada tendencia al estancamiento de la misma.

El instrumento utilizado para medir la distribución del ingreso entre los distintos factores de la producción es la denominada “Cuenta de Generación del Ingreso” que indica la Distribución funcional del ingreso. La distribución funcional es una forma de mostrar la diferencia de las rentas obtenidas por los propietarios de los factores productivos según su función en la sociedad. Muestra la parte de la renta nacional percibida por los trabajadores (Remuneración al Trabajo Asalariado RTA), por las empresas no constituidas en sociedad, propiedad de los miembros de los hogares (Ingreso Bruto Mixto IBM), y por los propietarios del capital (Excedente Bruto de Explotación EBE). De los datos que surgen de “cuenta de Generación del Ingreso” se observa que la devaluación implicó



una brutal transferencia de ingresos del trabajo al capital. El excedente Bruto de Explotación (retribución al capital) alcanzó el máximo del 52,3 por ciento, la Remuneración al trabajo Asalariado tocó el mínimo de 34,3; luego comenzó a recuperar hasta alcanzar el 38,6 por ciento (2005).

La distribución personal o familiar del ingreso por deciles, consiste en que la medición se realiza ordenando a la población o a los hogares por los montos de ingresos de menor a mayor. Luego se los agrupa en subconjuntos que contengan cada uno el 10 % de las unidades (población u hogares). Quedan así determinados los intervalos de ingresos correspondientes a cada uno de los diez subconjuntos conformados. En cada tramo de ingresos se sitúan tanto empresarios como trabajadores, no distingue por lugar en el proceso de producción sino por ingreso. Los datos que a continuación se transcriben permiten comparar cómo ha ido evolucionando, desde la década del 70, el ingreso de cada uno de los diez conjuntos, desde el de menor ingreso (Nro. 1) hasta el de mayor (Nro 10). El decil 10 - el mas rico del país - tiene su piso de ingresos durante el modelo de sustitución de importaciones; luego crece durante las próximas décadas, alcanzando su cenit en la crisis del modelo neoliberal. Comienza después un período de declinación de su ingreso que se va a redistribuir entre los deciles 6,7,8, y 9. El decil 9 - que expresa a la alta clase media- es el que menos oscilaciones tiene durante las últimas tres décadas y el que recupera con creces lo que obtenía en los '70. Los deciles 6,7 y 8 también recuperan prácticamente los niveles de los '70, resarcándose de las caídas de los '80 y '90. Los deciles 3 y 4 describen una trayectoria similar de caída durante los '80 y '90 y recuperación en la etapa actual pero que no alcanza los niveles de 1974. Los deciles 1 y 2 - los de menores ingresos- a partir de los '70 ingresan en un proceso de declinación hasta los '80 y '90 y la recuperación actual ni siquiera los lleva a una situación similar a las de esos años. Si el promedio de la recuperación desde el 2002 al 2006 es de aproximadamente un 25 % para los deciles 6,7, 8 y 9, para los deciles 1 y 2 es del 8 %. Por esta razón es que aún creciendo su ingreso, en términos relativos, su participación en la distribución disminuye constantemente.

La política de ingreso del gobierno que operó sobre el mercado de trabajo y las jubilaciones, fue la responsable de la mejora en el conjunto de indicadores laborales y sociales hasta principios de 2007. Así en el análisis del Coeficiente de Gini observamos la mejora en la distribución del ingreso aunque también una tendencia a avanzar mas lentamente. En cuanto a la distribución funcional pudimos ver cómo la mejora de la retribución del trabajo asalariado - vis a vis - con la retribución al capital si bien mejora recién se acerca a la de la década del '90. Por último, en la



distribución personal o familiar del ingreso observamos que la misma tendió a favorecer más a los sectores medios y medios altos que a los de menores ingresos.

Todos los indicadores, que permiten analizar la distribución del ingreso hasta el año 2007, presentan cifras positivas aunque su recuperación es mucho más lenta que el crecimiento del producto. A partir de entonces la inflación, si bien sobre ellas inciden múltiples causas, expresa la puja sectorial y el límite que las clases dominantes ponen al proceso de distribución. No existían en ese entonces las causas tradicionales que alimentaban los procesos inflacionarios: déficit fiscal y emisión monetaria expansiva. Por el contrario el proceso inflacionario es el instrumento de las clases dominantes para neutralizar las políticas de distribución del ingreso que de allí en adelante intentó el gobierno. Como tituló la revista Barcelona: “La distribución ya se hizo, lástima que no alcanzó para los pobres”.

El cambio de modelo o patrón de acumulación caracterizado por la ampliación de espacios de la esfera productiva en relación con la financiera, no nos devuelve automáticamente - ni en Argentina ni en el mundo - al keynesianismo o la etapa de posguerra denominada “de los 30 años gloriosos”. Muchos son los factores que imposibilitan ese retorno, ya que el avance del conservadurismo con el desmantelamiento de las regulaciones laborales protectoras de los derechos del trabajador, combinado con la revolución científico tecnológica, y su aplicación a los sistemas de producción, permitió la ofensiva exitosa del capital sobre el trabajo. Así, la nueva renta obtenida a partir de la mayor productividad generada por el conjunto de innovaciones científico- tecnológicas aplicadas a la producción, fue apropiada mayoritariamente por el capital y no socialmente a partir de alguna combinación de mejoras salariales, menos horas de trabajo con igual salario o disminución del precio de los productos o servicios. Esta masa de recursos se recicló en actividades especulativas y dio lugar a un proceso de concentración y centralización a escala planetaria, en el marco de lo que conocemos como globalización. La ciencia y su aplicación no son neutrales. Como toda creación social, dependen de quién se las apropia y con qué objetivos.

En estas condiciones se llegó a la elección que consagró a Cristina Fernández de Kirchner Presidenta en 2007, quien va a intentar profundizar lo realizado en el período anterior proponiendo llevar a cabo un proceso de institucionalización del modelo económico en curso.

Pero volviendo al tema de la inflación, sus causas hay que buscarlas y remediarlas, en primer término, a partir de dar respuesta a las dificultades de las estructuras productivas para insertarse en la división interna-



cional del trabajo, sosteniendo estructuras económicas internas con alto grado de eficiencia y equidad social. En este sentido, era necesario profundizar la capacidad de regulación del Estado en la dinámica contradictoria de precios internos / precios externos. Ante el aumento constante de los precios de nuestras exportaciones de granos, el gobierno nacional va a impulsar una reforma en el sistema de retenciones planteando la movilidad de las mismas y una escala diferencial según el tipo de granos. Se pretendió limitar el impacto de los precios internacionales en el consumo doméstico y poner límites al proceso de sojización que impactaba fuertemente en las demás actividades agropecuarias. Esta medida del gobierno nacional va a generar el conflicto más profundo y extendido desde el 2003, provocando un desgaste acentuado de la credibilidad por parte de crecientes sectores sociales.

Este será un tema a tratar en otro ítem; lo que nos interesa remarcar hasta aquí es que hasta ese conflicto la mayoría de los sectores dominantes se había adecuado al modelo neodesarrollista en curso pero pretendía limitar su evolución en términos de impedir la modificación de la matriz distributiva heredada del modelo anterior.

El ex presidente Kirchner definió su perspectiva ideológica como la creación de un “capitalismo en serio” o “... la reconstrucción del capitalismo nacional” sobre la base de apoyo que debería darle el desarrollo de una “burguesía nacional”. A partir de allí es que se ha caracterizado al proyecto como “desarrollista” o “neodesarrollista”, donde aparecen mezclados elementos vinculados a las dos etapas del proceso de sustitución de importaciones vividas por nuestro país. La perspectiva ideológica desarrollista está asociada a la idea central de asimilar los países subdesarrollados a los países desarrollados, con la diferencia que los primeros se encuentran en un estadio anterior de su desarrollo; por lo tanto las políticas de desarrollo tienen que tender a acelerar las etapas por las que debe pasar toda sociedad. Estas teorías no tienen en cuenta un elemento esencial: los países subdesarrollados forman parte de un sistema mundial, que tiene una historia que le ha otorgado un rol determinado. Es la historia de su integración como periférica y subordinada en ese sistema, y que ya nada tiene que ver con los orígenes del capitalismo sino con la de su integración al mundo moderno.

En nuestro país, esta ideología se vincula a la denominada segunda etapa de sustitución de importaciones y se caracteriza por la incorporación de nuevas actividades, mayoritariamente, a partir de inversiones extranjeras (automotriz, petroquímica, etc), desde 1955 a 1972. La llamada burguesía nacional - mas asociada a las tres presidencias de Juan Domingo Perón - estaba constituida por un sector de empresas nacionales vinculadas a la producción de bienes y servicios para el mercado



interno y que desplegaban su ciclo de expansión dentro de nuestro país. Como producen para el mercado interno bienes de consumo básico y de mediana complejidad, necesitan que ese mercado tenga el poder adquisitivo necesario y creciente para que pueda considerársele un mercado de consumo suficiente y en crecimiento. De allí la necesidad de una clase trabajadora y una media con creciente capacidad de consumo.

Estos actores sociales tan importantes para nuestro país: burguesía nacional, clase trabajadora y sectores medios, son los que fueron diezmados o asimilados al neoliberalismo por la dictadura y que las políticas impulsadas por el actual y anterior gobierno intentan reconstruir.

Es cierto que el sector agropecuario sigue reclamando la disminución o la eliminación de las retenciones a las exportaciones, que es lo mismo que pedir la vuelta al modelo anterior. Esto es así porque si entendemos que el modelo de base productiva no expresa simplemente una ampliación de la plataforma exportadora, sino fundamentalmente el desarrollo creciente de su mercado interno en el marco de un proceso de reindustrialización, el cambio de la matriz distributiva haciéndola cada vez más progresiva, no sólo es un objetivo deseable sino además imprescindible.

1.3.- La crisis internacional y el cambio de modelo.

Si bien no es el objetivo central de este documento realizar una caracterización detallada de la crisis internacional por la que está atravesando el capitalismo, sí es necesario desarrollar una mirada general sobre su probable evolución para entender cómo está impactando en nuestra economía, por un lado y las perspectivas futuras, por otro. El impacto actual y las probables salidas: si se trata o no de una crisis sistémica y, por lo tanto, salimos con un sistema post capitalista, no capitalista o el nombre que se le quiera poner. O - como parece mas probable - si la continuidad del capitalismo incluye un cambio estructural que abarcará los parámetros fundamentales en que hoy se sostiene y que afectarán el conjunto de relaciones geopolíticas, económicas, sociales, culturales y medioambientales del planeta.

Claro que a veces el nivel de cambio es muy profundo, como pasó en la gran crisis de de 1930 y de la que recién comienza a salirse definitivamente en el período de post guerra. Fue también posible porque las burguesías, en la lucha interimperialista, quedaron muy debilitadas; entonces surgió la posibilidad de negociar, con los representantes de los trabajadores, condiciones más equitativas en la distribución del ingreso. Y así surgieron las expectativas progresistas en el centro, a través de la



socialdemocracia (hoy absolutamente desacreditada por su adscripción a los postulados básicos del neoliberalismo), el socialismo que ya venía de la Revolución Rusa de 1917 como una de las alternativas más profundas de distribución del ingreso y de intento de sustitución de la explotación del hombre por el hombre y, finalmente, los movimientos nacionales y populares que hemos visto a lo largo del siglo pasado en Latinoamérica.

Estamos ante la caída de un ciclo normal del funcionamiento del capitalismo. Esto significa que el capitalismo tiene ciclos de auge y de caída. Cuando son más profundas esas caídas, es cuando llegamos a la recesión y a la crisis.

Hay básicamente tres grandes ciclos que se estudian: uno de stock, que es el ciclo de cuarenta meses al que hay que tener en cuenta porque a veces la crisis no es tan profunda pero los capitalistas aprovechan para deshacerse de un stock y con eso pueden dejar mano de obra de lado y acentuar los momentos recesivos.. Luego tenemos el ciclo medio o comercial y, finalmente, los ciclos de onda larga, que están siempre relacionados a la incorporación de una nueva matriz científica tecnológica.

¿Qué es lo que se puso en funcionamiento en la post guerra?: la generalización de lo que se conoce como matriz productiva-fordista o taylorista-



fordista, que era progresista porque el trabajador era importante no sólo ya en su función productiva sino también -y básicamente- en su función de consumidor. Eso es lo que permitió la salida de una crisis de superproducción.

El ciclo de crecimiento iniciado en la post guerra comienza a perder fuerza a fines de los '60 y principios de los '70. Es allí donde el mundo comienza a diseñar -y, en nuestro país, a partir de la dictadura militar- un modelo de acumulación donde lo central ya no es la matriz productiva (producción-trabajo-consumo) sino que va a ser sustituida en parte por la matriz de acumulación financiera, que en la Argentina fue profundizada por el menemismo hasta llevarnos a la crisis de 2001 durante el gobierno de la Alianza.

En realidad lo que explota es ese modelo de acumulación. Y hoy, el mundo, está ante una crisis de carácter estructural y no simplemente financiera.

Las crisis financieras suelen reiterarse cada seis u ocho años: entre 1720 y 1987 tuvimos treinta y dos de ellas en el mundo. Suelen contagiar de inestabilidad al conjunto de la economía. Se convierten en estructurales cuando impactan en los otros sectores de la economía y generan una recesión prolongada y profunda, haciendo que emerjan las dificultades que estaban afectando al conjunto del proceso de valorización y acumulación capitalista. De esas crisis tenemos tres en toda la historia del capitalismo.

Cuando el modelo productivo, nacido en la posguerra, comenzó a mostrar signos de agotamiento, en el mundo se comienza a discutir sobre las posibles formas de salida a la crisis. En los '70, en Naciones Unidas, los países del entonces llamado tercer mundo plantearon la necesidad de un Nuevo Orden Internacional (denominación que después utilizaría Bush padre pero en una propuesta en sentido contrario a la original). Se refería a una propuesta de redistribución no sólo nacional sino a escala planetaria, es decir tanto al interior de cada sociedad como también entre países. Ante una crisis de sobreproducción lo que se necesitaba era que más personas pudieran acceder al consumo.

Pero eso no fue lo que triunfó. Triunfaron Thatcher y Reagan y, con ese sistema, al mundo le fue bastante mal. En la década del '80 se creció menos que en la del '70 y, en la del '90 menos aún. El mundo empezó a decrecer pero de modo no homogéneo: hubo lugares donde se mantuvieron las tasas de crecimiento importantes y sustentables. Fueron justamente aquéllos donde no se aplicaba el neoliberalismo. Tenemos los ejemplos de China y Corea, países con un muy fuerte rol del Estado en la articulación económica. Como decía Deng Xiaoping: "Dejad volar al



pájaro libremente pero en su jaula”. Es decir, dejar jugar los elementos centrales del capitalismo pero articulados, controlados y desarrollados desde la política, desde el Estado.

Esta crisis -suponiendo que sea financiera- ya está impactando en la economía. El monto de las transacciones financieras globales al momento de su inicio era de dos mil trillones de dólares. El PIB mundial era de cuarenta y cuatro trillones: compárese con la cifra anterior. Es decir que la economía real está expresada financieramente, casi cincuenta veces. Obviamente, todo esto funciona mientras la gente cree en los papeles y ve que crecen en su valor. Pero hay un momento en que no se puede pagar y, allí, se desata la corrida y ya no hay crédito para nadie, ni para los que no pueden pagar ni para los que pueden.

Si acomodar la economía financiera a la economía real, es acomodar el valor de los papeles a la economía real, todavía queda por hacer mucha destrucción de activos financieros y eso es lo que hace ver a la crisis con dificultades de salida.

Otro tema a profundizar es que, si hubo hegemonía de la pauta financiera de acumulación, es muy probable que las empresas productivas - aunque no tuvieran ganancia en esa esfera - desarrollaran su contrapartida al interior de ellas, desde una base financiera trabajando en la especulación. De ese modo, pudieron ir a pérdida en el sistema productivo y ganar en el sistema financiero, con lo cual estamos ante un dibujo universal realizado por las treinta mil empresas globales multinacionales que dan vueltas por el mundo.

La participación de los servicios financieros dentro de las utilidades totales de las corporaciones americanas creció del 10% a principios del '80, al 40% en 2007. Sus utilidades se incrementaron en esa magnitud en la esfera financiera, lo que permitió mantener precios atractivos en la esfera productiva para sostener la rueda del consumo. Esto se cayó irremediablemente. Imaginemos en qué situación estamos a escala mundial y cuál es el valor real de los bienes y servicios.

Marx planteaba que el inicio de todas las contradicciones en el desarrollo de la especie es la contradicción del hombre con la naturaleza. Y éste es un componente de esta crisis que la distingue de las anteriores: el sistema productivo capitalista ha llegado a un nivel de agresión a la naturaleza que también pone en cuestión si es posible su reproducción con la actual matriz energética y de producción y consumo. Porque si el 15% de la población del planeta acapara para su propio consumo y despilfarro el 85% de los bienes, el otro 85% de la gente no puede consumir en la misma escala porque no le alcanza el planeta. Se necesitarían cinco planetas como este para sostener ese nivel de consumo.



Es una crisis estructural – o crisis del patrón de acumulación vigente – porque el surgimiento de obstáculos a los procesos de valorización y acumulación capitalista no se pueden eliminar con el simple resorte del movimiento cíclico usual. Porque toca elementos centrales de ese funcionamiento.

Si tomamos como ejemplo a la Argentina de 2001, vemos que el modelo de acumulación financiera entra en un conflicto estructural, porque hubo que cambiar un parámetro fundamental a partir del cual se modificaron los demás: el tipo de cambio. Entonces, ya el modelo no fue el mismo. El modelo de acumulación se apoyó en una base más productiva que financiera. Además, era la única posible porque las finanzas estaban quebradas. Todo lo contrario a lo que nos pasa ahora: financieramente estamos fuertes y mantenemos superávit fiscal y comercial. Si bien se ha retrasado el tipo de cambio no es en los niveles de poner en crisis el sistema, porque el gobierno compensa con el uso de herramientas arancelarias y para-arancelarias la competitividad de nuestro país.

En el mundo estamos ante una crisis estructural porque hay que cambiar parámetros básicos. El motor financiero colapsó y, así como en la década del '80 el sistema capitalista se sostuvo por la sobreexplotación de la mano de obra a partir de la agresividad de las nuevas normas del trabajo y la incorporación al sistema productivo de la nueva revolución científico-tecnológica, en esta etapa se consumió a través del saqueo de la clase media de los países centrales, que ahorra en bonos y parte de su jubilación presente o futura está garantizada o tiene que ver con este tipo de respaldo. Imaginemos a aquéllos que pensaban cobrar una jubilación de 10.000 dólares y ahora van a percibir el 10 o el 20 % de esa suma.

Esa política de saqueo sobre la periferia y sobre las clases subordinadas alcanzó un límite. No se puede salir sin modificar parámetros fundamentales de la estructura económica. Está terminado una etapa caracterizada por el imperialismo de orden colectivo. No ya el que conocimos antes de las guerras sino el que por acuerdo de las grandes potencias expresado en el G-7 y sus órganos de dominación económica como el FMI y el Banco Mundial, nos subordinó todos estos años. En nuestro país, el asesinato de Kosteki y Santillán, anuló momentáneamente la posibilidad de una salida fascistoide de la crisis. Argentina vivió una salida diferente a través del gobierno de Néstor Kirchner.

En algunos lugares del mundo está sucediendo otro tanto: Estados Unidos sale del esquema Bush con el triunfo de Obama. Pero, tanto en nuestro país como en todo el mundo, la salida no es necesariamente progresista ni democrática. La salida puede ser a través de formas autoritarias o neoconservadoras. Dependerá de lo que podamos construir en tanto fuer-



zas políticas y sociales y cómo podemos desarrollarlo en una esfera diferente a los Estados nacionales.

Suponiendo que la lógica es una nueva fase del capitalismo, será una nueva articulación entre el Estado, la sociedad y el mercado. Ello supone una economía con más capacidad decisoria del Estado y más capacidad decisoria de la sociedad y, por supuesto, la apropiación de las riquezas a través de un instrumento esencial que, en términos generales, podríamos llamar la economía social pero donde tiene un rol central el Estado nacional.

Sin embargo, eso no alcanza. Todos podemos aprender de los modelos de integración que nos garantizan una articulación plural en América Latina. Del ALBA debemos tomar un elemento que es básico para la construcción de la alternativa al neoliberalismo: el Estado Regional. Nosotros creemos, como fuerza política, que sin rol de los Estados no hay posibilidad de salida de la crisis; sin economía mixta donde haya una fuerte presencia del Estado tampoco.

Y, en ese sentido, algo que plantea el ALBA es la idea de empresas grannacionales, como antítesis de las transnacionales y su formato de acumulación privada. Porque cada etapa del capitalismo se correspondió con un desarrollo de la empresa. El capitalismo inicial con la empresa dominando el mercado interno. El capitalismo transnacional con las multinacionales desarrollando la fase imperialista. En el capitalismo que conocemos como globalización neoliberal se desarrolló un nivel de empresa que no funciona en la escala nacional: no le alcanza Estados Unidos, no le alcanza China, su esfera estratégica de negocios necesita del mercado mundial por su tipo de acumulación y de incorporación de tecnología.

No es probable que esa evolución retroceda. Por eso es esencial subrayar que para lograr el desarrollo de nuestros países, desde la izquierda ya no alcanza con el par conceptual equidad-igualdad como aquí ya se mencionó; es necesario también el par liberación-emancipación. La cuestión social y la cuestión nacional articuladas, entendiendo lo nacional como latinoamericano.

Y eso tiene que ver con nuestro proceso de integración, con la creación y fortaleza de un Estado a nivel continental, que tenga capacidad de regular los flujos económicos y que pueda sentarse como lo está haciendo en el G-20 pero con una perspectiva propia, con ese famoso mundo posible por el que soñamos y peleamos en la década del '90, más equitativo y más libre.

2.- IMPACTO EN LA ESTRUCTURA SOCIAL.

2.1.- La crisis del campo y la emergencia de nuevos actores sociales.



Las demandas de los sectores agrarios, no son fenómenos nuevos. Los gobiernos civiles que surgieron del voto popular, tuvieron en el sector agrario un agente demandante de acciones de gobierno que las favorecían.

Lo nuevo, en realidad, es que las retenciones sobre la soja de la Resolución 125 unieron solidariamente un extenso anillo de organizaciones de las patronales agrarias, cristalizando su expresión en la “mesa de enlace” y que a partir del conflicto y el lock-out patronal de comercialización de productos agropecuarios, cuestionaron toda la política del gobierno hacia el sector.

Pero su peso específico se dio por una importante participación y un método de lucha utilizado hasta el 2007 por sectores de desocupados, como fue el corte de ruta.

Dichos cortes paralizaron al país y la falta de mercancías en las ciudades dispararon los precios que luego del conflicto se desaceleraron en su alza pero no volvieron al punto de partida.

Es digno de señalar que muchos propietarios de pequeños y medianos campos - entre 200 has. a 800 has. - se han transformado en rentistas inmobiliarios a través del arriendo a sectores económicamente más poderosos que son arrendatarios y explotan el campo haciéndolo producir.

La explicación de esta doble renta, inmobiliaria y productiva, es que los precios de las oleaginosas tanto soja como girasol son excepcionalmente altos en el mercado internacional.

Esta alta rentabilidad acompañada por un dólar alto y sostenido en ese nivel por el gobierno, junto con los cambios tecnológicos que bajan los costos en el trabajo de la tierra y el cultivo, han permitido la nueva forma de explotación y la doble renta.

Los pool de siembra son otro sector de inversionistas organizado desde las instituciones financieras, que arriendan propiedades y ponen técnicas y administradores que operan en el territorio de explotación. Su importancia en el régimen de explotación agraria ha sido sobrevaluada; esta forma de inversión no está tan generalizada como se cree.

Es sorprendente la actitud de ciertos sectores rurales como la FFAA, que se plegaron a reivindicaciones de los grandes propietarios como la Sociedad Rural, quienes siempre fueron libre-cambistas; en tanto los Federados, siempre exaltaron en su planteo el rol del Estado.

Resulta más sorprendente aún esa actitud teniendo en cuenta que esos sectores rurales, en su conjunto, fueron muy favorecidos por la devaluación del 2001, y el sostenimiento del dólar alto desde el 2003 por el gobierno de Kirchner, el precio internacional de las materias primas, entre ellas las agropecuarias.



Observando este panorama podemos decir que el enfrentamiento del 2008 y su continuidad es por la distribución de los excedentes en la sociedad, en este caso la renta extraordinaria, al pasar los productos agropecuarios por un ciclo de valorización. Cuando caen los precios se discute como se reparten las cargas hacia la baja, a pesar de seguir produciendo beneficios.

Otro de los ribetes llamativos y que muestra las transformaciones en el mundo rural fue el desprecio de la Federación Agraria a un proyecto presentado por iniciativa de la bancada oficial en el Congreso de la Nación, que beneficiaba a los pequeños productores, en caso de que fuera aprobada, segmentando a su favor las retenciones propuestas en la caída 125.

El mundo del agro en su conjunto, con su unidad y coordinación, con sus nuevas formas de protesta y la magnificación a través de los medios (diarios, TV y radios), se convirtieron en actores prominentes en la sociedad y dejaron de ser actores de reparto.

De esta manera se transformaron en interlocutores a tres bandos. Las cámaras parlamentarias, el poder ejecutivo y la oposición política.

Posteriormente al conflicto, la falta de voluntad de acordar políticas en



distintos rubros del sector, y pedir mayores beneficios que los previsibles corriendo el arco, dan muestra de un interés por mantener la tensión en forma constante y también indican que su propuesta no es sólo una reivindicación sectorial, sino que la puja se da por hegemonizar la política económica en función de sus máximos intereses y optimización de su rentabilidad.

Sus símbolos con insignias nacionales, la exaltación de la argentinidad, el mostrarse como el sujeto social expresión del mundo agropecuario que fue fundador de la nación, no hacen más que recordarnos que fueron ellos, justamente, los actores de la “próspera historia nacional”, lograda a base de excluir a otros sectores sociales en la creación de la riqueza.

Se puede deducir –sin temor a equívoco- que su máxima aspiración es imponer un modelo de país agro exportador como el de fines de siglo XIX, algo cuya base material estaría dada por los precios internacionales de elementos destinados a grandes masas de población en aumento constante.

2.2.- Solidaridad de la Unión Industrial y los grandes grupos económicos.

Los sectores industriales se han mostrado remisos a firmar el Acuerdo del Bicentenario, un pacto propuesto en su momento por el Gobierno Nacional mirando al 2010 que pautaba conductas a seguir mirando la efeméride de este año.

Este pacto trazaba - a grandes rasgos - la institucionalización de los lineamientos del proyecto iniciado en el 2003 y que dio como resultado un alto crecimiento donde se repartieron beneficios a amplios sectores de la actividad económica nacional y se mejoraron índices sociales.

Aquéllos sectores adujeron entonces que no podían firmar el Acuerdo si no participaban, además, los empresarios agropecuarios que en el 2008 estaban en conflicto con el gobierno.

Esto hizo imposible el logro de consensos mínimos y generales, objetivos de corto y mediano plazo básicamente entre 5 y 6 años, que diseñara un horizonte de estabilidad por un espacio de tiempo, que pautara las conductas y objetivos generales entre los actores económicos de mayor relieve y el gobierno. La imposibilidad de concretarlo pone de manifiesto también lo superficial de la retórica del “consenso” esgrimida por buena parte de la oposición y los medios quienes reclaman que “nos pongamos de acuerdo en cuatro o cinco puntos” invisibilizando cualquier puja de intereses.

En el horizonte del año siguiente - 2009 - la crisis mundial en marcha



y un recambio en la conducción de la UIA, le dio un perfil más liberal en lo económico con dos bastoneros del frente Techint (Paolo Rocca) y Ledesma (Blaquier) en su composición directiva.

La política de la nueva conducción de la UIA oscila sobre el eje de una devaluación que daría una rentabilidad extraordinaria a los grupos económicos ligados al sector externo por 3 o 4 años y desataría un ajuste de precios internos amortiguados por la desaceleración económica, pero que pondría en retroceso el poder adquisitivo del salario y una lucha en marcha por su recuperación.

En el otro extremo del péndulo están aquellos sectores que componen la UIA que, más ligados al mercado, necesitan del Estado para protegerse de los productos importados a través del dólar y de mecanismos automáticos, como pactos binacionales o regionales.

Estos sectores necesitan, por un lado, protección pero también necesitan que la sociedad no sea extremadamente afectada por la pérdida de poder adquisitivo.

Otro elemento son los préstamos o créditos de largo plazo que la banca privada no ofrece porque no quiere riesgos y tiene mejores negocios y seguros. Sólo están siendo otorgados por el Banco Nación.

Las devaluaciones impulsadas por el primer grupo siempre vinieron del brazo de recetas ortodoxas asociadas a gobiernos autoritarios que hundían el salario.

Esta maxi devaluación beneficiaría a los exportadores, entre ellos los de productos agropecuarios: carne, girasol y soja. He aquí el hilo conductor que une los intereses de un sector de la UIA con la “Mesa de enlace”.

En cuanto a la AEA que agrupa a los sectores más concentrados de las empresas industriales nacionales, en su documento “Movilizar las energías del sector privado, un aporte al diálogo de todos los argentinos”, más que demandar al gobierno, plantea un modelo libremercadista cercano al país de la dictadura y de la década del ‘90, sin descartar reminiscencias del siglo XIX. Esto los pone en línea de aproximación con los sectores que componen la “Mesa de Enlace”, sobre todo CRA y SRA.

Todos estos sectores empresarios, salvo los ligados al mercado interno, se sentirán más cómodos con una planificación económica emanada por los cuadros burocráticos de los centros supranacionales de financiación, FMI, BM, OMC, o por las fundaciones de las grandes multinacionales.

Su no lugar está expresado en los proyectos autóctonos y autónomos consensuados por sectores políticos y sociales nacionales y populares que tengan como eje la inclusión social y las políticas de distribución.



Estas políticas van más allá del asistencialismo que los centros financieros internacionales tienen formateados para los que se cayeron del sistema en el pasado reciente de los '90 y de principios de 2000, que no fueron pocos. Llegaron a ser una masa crítica que dio por tierra con el modelo anteriormente planificado desde los centros de poder mundial vía FMI y "la autóctona" Fundación Mediterránea.

La solidaridad con la "mesa de enlace" se explica porque el gobierno no entra en esta tónica; tampoco se enfrenta porque hay sectores industriales que necesitan protección y valoran las políticas desarrolladas hasta ahora, por una equidistancia para la unidad del frente patronal.

2.3.- La oligarquía diversificada. Fortalezas y debilidades.

Los grupos conocidos como oligarquía diversificada, tuvieron su punto de partida en familias de la elite social argentina, propietaria de extensas superficies agrarias.

Con el paso de los años, han volcado los beneficios de la renta agropecuaria a la actividad financiera. En una tercera etapa se diversificaron en diferentes actividades (comercial, inmobiliaria, industrial, comunicacional). Esto les ha otorgado una ventaja al incidir en distintos sectores de la actividad económica y articularlos en función de sus intereses de hegemonía.

Representados políticamente en su momento por el partido Autonomista Nacional, la ley Sáenz Peña les recortó y limitó en su influencia política en la sociedad.

Pero en 1930 recurrieron al ejército para derrocar a Irigoyen y ante la crisis económica mundial, gobernaron sin pagar los mayores costos y descargarlos sobre las clases subordinadas. De ahí en adelante, el ejército fue protagonista fundamental de la política y el desarrollo económico argentinos en distintos sentidos.

El desarrollo industrial vinculado al mercado interno que se generó en la etapa entre 1945 y 1955, la aparición de roles importantes del Estado y la legitimidad de la acción sindical modificaron el panorama anterior. De ahí en adelante, los sectores de la oligarquía se expresaron política y electoralmente a través de partidos conservadores provinciales de escaso valor en su predicamento.

Luego de 1955 y hasta 1983, el Ejército fue el verdadero gestor de los intereses oligárquicos, poniendo fin a la etapa distribucionista, derrocando a Perón y condicionando a los gobiernos civiles que los sucedieron y desechándolos a través de golpes de estado.

El partido militar fue la expresión de los intereses de la oligarquía



diversificada, el sector financiero y los grandes grupos económicos.

En los '90 se da un hecho sorprendente. Carlos Menem se rodea de asesores como los Alsogaray -en las antípodas del peronismo- y, ante una inflación que no cedía nombra a Cavallo Ministro de Economía (Fundación Mediterránea) que establece la paridad dólar-peso, ajuste del estado y una apertura comercial indiscriminada.

Se planteó entonces un Gobierno peronista erigido por el voto popular y un programa económico planificado por la oligarquía diversificada que imponía un patrón de acumulación financiera. Esta contradicción “voto popular peronista- asesores ultra liberales y programa conservador”, impensable 15 años antes, para que fuera aceptada y racionalizada hubo que realizar jornadas de actualización doctrinaria.

Las condiciones internacionales: Caída de la URSS, globalización, avances tecnológicos y la valorización financiera favorecieron este proceso político y su justificación ideológica.

Los intereses de la oligarquía diversificada fundada en las finanzas o la exportación-importación de libre mercado, con Estado ausente y sin regulaciones, la inhiben de tener programas y fuerzas políticas que tengan en cuenta el desarrollo de la industria nacional y el mercado interno, por eso no puede acumular consensos populares, debe manejarse con el ejército o colonizar gobiernos con historia popular y surgidas del voto ciudadano. La pregunta que hoy nos surge es si es posible colonizar conciencias, subjetividades, a través de la cadena de medios privados de comunicación audiovisuales sustituyendo los “fierros de las fuerzas armadas” por los mediáticos.

Luego del derrumbe del 2001 ganó espacio un gobierno cuyas banderas son desarrollar el mercado interno y potenciar la alicaída industria, incrementando la inclusión social.

La oligarquía diversificada tiene hoy un gran poder sobre los medios de comunicación, además de negocios en común (Expoagro entre otros). El conflicto con las patronales en el 2008 lo pusieron en evidencia; pero no se visualiza quién es el hombre o partido que representa mejor sus intereses y que logre una próxima puja por el ejecutivo nacional. Sin embargo UNIÓN-PRO y Macri serían el partido y el hombre de perfil mas cercano a este sector social, aunque su desgaste a raíz de la mala administración de la Ciudad de Buenos Aires lo hace vulnerable. Reuteman o Cobos podrían ser también las apuestas de estos sectores, pese a que su fortaleza genera cada vez mas dudas.

En síntesis: es a partir de la disminución del peso relativo de los actores sociales que dieron vida a nuestra sociedad desde casi la mitad de siglo XX y hasta el golpe de 1976 (burguesía nacional, clase trabajadora



y sectores medios), que las contradicciones sociales dominantes que se fueron manifestando en las diferentes crisis económicas y en la superestructura política ya no tendrán como protagonista a ese bloque popular sino que van a ser producto de la lucha o alianzas entre los integrantes del nuevo bloque dominante: las empresas o conglomerados extranjeros y los grandes grupos económicos locales. Ellos no tienen nada que ver con la denominada burguesía nacional. Se consolidan como tal a partir de la política económica de la dictadura militar y el proceso de valorización financiera. Se organizan como conglomerados o grupos económicos que operan integrados verticalmente a partir del control del encadenamiento de un determinado tipo de producción o integrados horizontalmente en distintas ramas de la industria, producción agropecuaria, finanzas y comercio. Se incorporan al proceso de acumulación de capital a escala planetaria conocido como globalización, caracterizado por la transnacionalización y desnacionalización de las actividades productivas y financieras. Tienen un anclaje local donde necesitan obtener ganancias extraordinarias para financiar su expansión en cualquier parte del mundo, es decir la característica principal es su creciente grado de transnacionalización por lo que su ciclo de expansión excede las fronteras de nuestro país. Tanto por la propia naturaleza de este sector como por el grado de extranjerización de la economía, referirse a este actor social como burguesía nacional, como base social y motor del desarrollo económico y social, carece de sentido.

2.4.- Debilidad de los sectores sociales con contradicciones con el bloque dominante.

La industria nacional, entendida como aquélla que produce bienes materiales en el territorio y que está dirigida al mercado interno sin pertenecer a una organización empresaria internacional, ha sufrido una fuerte regresión en los últimos 27 años. Sólo a partir de 2003, luego de la devaluación del 2001, de superarse lo peor de la crisis laboral, la consecuente caída de la demanda y la falta de crédito, recién entonces pudo recuperar terreno.

Los 27 años mencionados, los podemos abarcar como el período que va desde 1975 - cuando en abril de ese año se produce el Rodrigazo, que fue una gran devaluación y anulación de la discusión de paritarias - , hasta el año 2003 con la asunción del gobierno de Néstor Kirchner.

Su política económica se basó en sostener un dólar alto que estimulaba las exportaciones y contenía las importaciones en la frontera, una renegociación de la deuda fiscal que ponía un horizonte fiscal previsible



y el rechazo al ALCA. En lo político, se expresó en la ruptura con Duhalde y el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner en las legislativas del 2006.

Estos elementos le daban un juego autónomo a las políticas del gobierno. La valorización internacional de las materias primas permitía fortalecer las reservas internacionales, disminuir deuda y sostener el tipo de cambio de dólar alto.

La sustitución de artículos que se importaban por producción nacional, la consecuente recuperación de puestos de trabajo, aumento del salario mínimo, libre discusión de paritarias con límites racionales en referencia al índice inflacionario, aumento de jubilaciones, fueron elementos fundamentales para la recuperación del mercado interno y de la producción nacional. Las empresas que realizaron esta producción se vieron beneficiadas económicamente y reconocidas por las políticas del gobierno.

La base política que pudo solventar esta recuperación está representada por Kirchner como hegemónizador del peronismo y de un conjunto de organizaciones de centro-izquierda que se dispersaron en el 2001.

En el campo social, las organizaciones de desocupados que se aglutinaron a través de planes sociales administrados con fondos del



estado a partir del 2001, también sostienen este modelo.

El sindicalismo que abarca al de los gremios del transporte que se enfrentaron a Menem y se separaron de la CGT en el '97 y la CTA con sus distintos matices.

El movimiento obrero organizado ha dejado de existir como se lo conocía hasta la década del setenta. Varios son los motivos, la mayoría por cambios producidos a partir de 1975 y fundamentalmente en la década menemista. Hoy el mundo del trabajo está fragmentado en trabajadores en relación de dependencia y otras flexibilidades (trabajadores por contrato, pasantes, etc.), otros directamente están en negro y no existen legalmente, trabajan sin aportar a obras sociales o a cajas jubilatatorias, trabajan temporariamente y sin cumplir las horas semanales estipuladas.

Estos sectores - los que no tienen contrato formal - dependen de políticas sociales que se instrumentan desde el estado y con sus recursos: Planes sociales con los que complementan sus ingresos y cubren sus necesidades básicas y bolsas de alimentos, de medicamentos y programas materno infantiles, etc.

Los vendedores ambulantes y feriantes son también sectores que tienen un pasado de empleo estable, que han desarrollado estrategias de sobrevivencia a través del intercambio minorista.

Otro tema a analizar es la no existencia entre los trabajadores de base, de cuerpos de delegados. Prevalecen en cambio los aparatos sindicales, sobre todo en gremios de la actividad privada, cuya existencia no ha impedido ni se han opuesto en su momento a los modelos antipopulares de la década del '90 y no han sido un obstáculo para que la clase obrera haya retrocedido en el reparto del PBI y haya llegado a tamaño fragmentación. Hay que resaltar que los trabajadores en relación de dependencia y registrados, han priorizado estrategias defensivas para no perder sus fuentes de trabajo durante años y se han visto reflejadas en los informales o desocupados, luchando desesperadamente para no caer en otra situación; muchas veces, concediendo conquistas logradas en el pasado, se incorporaban en la vida y el régimen laboral como un patrimonio natural, sobre todo cuando la desocupación llegaba al 22 %.

Esto los limitó durante años en sus luchas y negociaciones para mejorar su salario o sus condiciones laborales.

Durante la década del '90 y parte del 2000, descollaron las luchas de los estatales (empleados administrativos y trabajadores nacionales, provinciales, salud, docentes, etc.) y no la de los gremios privados, símbolo de que este sector tiene condiciones de estabilidad mucho más precarias.



Los trabajadores en relación de dependencia, a partir del 2003 mejoraron sus ingresos en base a la recomposición del salario mínimo y vital, así como los jubilados, sus ingresos mínimos y luego los de ingresos jubilatorios más altos, a través de la movilidad previsional.

Hasta aquí queda expuesta la debilidad y fragmentación de la clase obrera y la regresión y pérdida de posiciones de la burguesía nacional.

Ahora enumeremos y analicemos su debilidad en base a la dependencia de la política.

Burguesía nacional y trabajadores necesitan un Estado activo que promocióne la inversión y el trabajo genuino, es decir producción y demanda. Relación dialéctica que conforma la expansión del mercado interno, creando más ofertas y más empleo. El bloque de clases dominantes carece de interés en el mercado interno al cual considera secundario, pero sí tiene interés en la exportación e importación, inaugurando un patrón de acumulación en base a productos agropecuarios o agroindustriales con escaso valor agregado.

Para ello, tienen que hegemonizar y manejar el poder político, imponiendo su proyecto y generando condiciones afines a sus intereses: tipo de cambio, índice de precios, índice de salario, índice inflacionario, tasa de interés bancario, orientación del crédito, orientación de subsidios, etc.

Es archiconocida su postura en cuanto a que el estado debe cumplir una función decorativa en el desarrollo económico, brindando sólo algunos servicios es decir, un estado mínimo que no regule la economía poniendo equidad entre distintas clases sociales. De allí su histórica adscripción al libre mercado.

El sector agrario y la oligarquía diversificada entran en contradicción con el desarrollo de una burguesía nacional de vocación industrialista y un mundo de trabajo con calidad de vida que produzca demanda de bienes y servicios. Allí debe encontrarse la causa fundamental de su odio a los Kirchner y las clases sociales y fuerzas políticas que acompañaron su gestión.

Por su parte, los medios de comunicación monopolizados en 5 grupos, acompañaron la cruzada de la oligarquía en su lucha desatada a partir de abril del 2008, lo que debilita aún mas la posición de los sectores sociales beneficiados con el modelo que comenzó a configurarse entre el 2002 y el 2005.

3.- LAS MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN:



3.1.- La tarea de desgaste de la autoridad presidencial, del estado y la política.

Si hay algo que caracteriza a la etapa iniciada el 25 de mayo de 2003 es haber reconstituido – aunque tal vez sea transitoriamente – la canalización de ciertas demandas ciudadanas y populares a través de la representación política. Tanto la autoridad presidencial como el debate político alejado de las corporaciones y gurúes varios, recobraron ciertos bríos que creíamos haber perdido para siempre. En el mismo sentido, la recuperación del rol del estado como eje conductor de la política económica resultó una novedad que había sido abandonada desde la negra noche dictatorial.

Mientras todo ello sirvió para calmar aguas inestables y turbulentas, los factores de poder económico también se sintieron cobijados. Pero cuando sintieron que podía llegar el momento de ceder algunas posiciones, comenzaron a esmerilar nuevamente cualquier intento de autonomía del poder político. La estrategia, como siempre, es atacar las formas supuestamente agresivas para la toma de decisiones. Apelando al diálogo y al consenso, ocultan la necesidad de querer imponer todas sus condiciones. La única forma de lograrlo es procurarse un contendiente débil y sumiso, o deslegitimarlo. Desde el día de la asunción de Cristina Fernández, primero con la acusación de “la valija”, y al poco tiempo con el conflicto de las patronales agrarias, no se hizo más que apostar a aquella estrategia.

No es algo nuevo. La demonización de lo colectivo, de la organización política, social o sindical y la entronización de lo independiente o “sin banderías”, es una herencia cultural heredada de la dictadura y forjada a fuego lento durante el menemismo. La fuerte defensa de ideas políticas definidas, impulsada por Néstor Kirchner y profundizada por Cristina inaugura un nuevo tiempo de debate público y apropiación social de la política como hace mucho no sucedía. El mayor desafío para las minorías acostumbradas a monopolizar y acaparar los debates, es tratar de invisibilizarlos o desprestigiarlos contraponiéndolos al diálogo y al consenso. Quienes siempre fueron los beneficiados por el histórico decisionismo autoritario y dictatorial, ahora, cuando la autoridad presidencial busca transformaciones en sentido contrario, alegan falta de republicanismo. Con el mismo argumento se dieron todos los golpes de estado del siglo XX.

Si bien lo analizaremos más adelante, podemos decir que en un principio los resultados de las elecciones del 28 de junio de 2009 parecían haber avalado la estrategia del desgaste presidencial y del “llamado al consenso”. Sin embargo a casi un año de aquel evento, los análisis parecen ser distintos. La continuidad de la iniciativa y de la generación de agenda por parte del oficialismo irritó sobremanera a los poderes fácticos que operaron sobre la



oposición partidaria. El tiempo de supuesta mayor debilidad del kirchnerismo fue el de las medidas de profundización democrática más importantes de las últimas décadas: la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Asignación Universal por hijo. Fueron los meses de mayor violencia mediática y ataque a la figura presidencial por parte de quienes pregonan la conciliación, la paz y las buenas maneras.

3.2.- La crisis de los Partidos Políticos.

No se puede explicar la crisis de los Partidos Políticos si no es en el marco de la fase de desarrollo por la que atraviesa el capitalismo a escala mundial a partir de los años '70 en que comienzan a observarse signos de agotamiento del modelo instalado en la posguerra. Sin pretender realizar aquí un desarrollo pormenorizado del tema, baste mencionar algunos elementos que caracterizan la fase desde finales de los '70 hasta la presente crisis:

- Revolución Científico Tecnológica: La apropiación de su renta.
- Rearticulación de las relaciones económicas entre las grandes potencias capitalistas (G7: EU, Europa y Japón) y su relación con el mundo, caracterizada por una relación más subordinada de la periferia.
- La Deuda Externa: De la explotación a la exacción caracterizada por la creación artificial de deudas donde el que presta cambia permanentemente las reglas, generando la imposibilidad de pago para volver a prestar bajo condiciones que imposibilitarán el pago futuro y así controlar y expoliar países y regiones enteras del planeta.
- Privatizaciones: entrega de las principales industrias y recursos naturales para afrontar el pago de deudas inventadas y varias veces abonadas.
- Apertura indiscriminada unilateral de los mercados de bienes y servicios (sobre todo financieros). La financiarización de las economías genera potentes procesos de concentración económica y exclusión laboral primero y social en el mediano plazo.
- Ampliación del horizonte estratégico de las transnacionales, tanto en la faz comercial como productiva: la escala productiva y el horizonte de desarrollo exceden el mercado nacional.

En nuestro país estas políticas desarrolladas desde la última dictadura militar hasta la crisis de 2001, van a producir una serie de impactos estructurales sobre el estado, el mercado y la sociedad y dentro de ella por supuesto, en los partidos políticos. A título de ejemplo mencionamos:

I.- En el ESTADO :

- Cambios en los modelos económicos



- Desestatización de la economía: Privatización y desnacionalización.
- Desestatización de los Servicios Sociales (Privatización Sistema Jubilatorio).
- Desregulación de las relaciones sociales (empresarios y trabajadores, entre usuarios y consumidores).
- Aumento de la dependencia y subordinación a través de las imposiciones de los organismos financieros internacionales.
- Incremento injustificado de la Deuda externa.
- Decisionismo trasnacional: Degradación extrema del funcionamiento de las instituciones republicanas subordinadas a las imposiciones de los organismos multilaterales de crédito.

II.- En la SOCIEDAD:

- Cambio en la correlación de fuerzas entre los sectores dominantes. Hegemonía sin
contra pesos de los grandes grupos económicos.
- Desintegración de homogeneidad social: heterogeneidad y diversidad social creciente
- Crisis de las formas de representación mas abarcativas o extendidas
- Fuerte polarización con exclusión social creciente.
- Los procedimientos democráticos pierden influencias en la capacidad de determinar orientaciones (predeterminadas por el FMI).
- Influencia creciente de los medios de comunicación sobre la agenda y los candidatos, y las funciones de mediación de los partidos políticos entre el Estado, el Mercado y la Sociedad
- Crecimiento sin desarrollo.
- Alteración de los valores que daban fundamento a la sociedad, por ejemplo relaciones entre la ética, la política y la economía.

III.- En el MERCADO

- Hegemonía de los grandes grupos económicos
- Profundización del proceso de transformación de las empresas de «tomadoras» a «Formadoras de precios (oligopolización)
- Desnacionalización de las empresas y consecuente alteración en las cadenas de valor.
- Impacto de la apertura indiscriminada y unilateral de los mercados.
- Desindustrialización
- Destrucción creciente de puestos de trabajo.

IV.- En los PARTIDOS POLITICOS:

Los partidos políticos realizaban funciones de mediación entre la socie-



dad, el mercado y las instituciones estatales caracterizadas por:

- La búsqueda de los objetivos no particulares a través de ideologías y programas.

- La articulación y agregación de intereses sociales.

- La movilización y socialización de los ciudadanos, mas abarcativas en las coyunturas electorales.

- La convocatoria, integración y formación de cuadros de gobierno.

- La selección de los candidatos para los cargos electivos, etc.

El impacto de las transformaciones del sistema económico dominante se manifiesta en los partidos políticos generando las siguientes manifestaciones:

- Crisis que afecta su funcionamiento, credibilidad y capacidad de convocatoria.

- Crisis que los afecta a todos, independientemente de su identidad político-ideológica.

- La crisis se manifiesta en: proliferación de conflictos internos, pérdida de afiliados y militantes, rechazo social, pérdida de representatividad, aislamiento.

Sería un grave error pretender analizar las causas de las crisis de los Partidos Políticos aislados del conjunto de instituciones que componen la sociedad y de los cambios en la estructura económica que impactaron sobre



ellas. Por el contrario, las causas de las crisis que atraviesan a los partidos políticos tienen que ver con esas transformaciones: El debilitamiento del Estado –real y simbólico– como referente central de la organización social y nacional. La fragmentación de las sociedades, el debilitamiento de las relaciones salariales, la exclusión social creciente, la configuración de identidades sociales desagregadas representante de intereses diversos y contradictorios. La sustitución de parte de sus funciones de mediación por “los medios masivos de comunicación” en especial en la configuración de la agenda de temas prioritarios, la visualización de reclamos sociales, la concreción de respuestas, etc.

El modelo neoliberal en lo económico y social es desintegrador de las demandas, organizaciones y valores anteriores. Así, para el nuevo esquema de dominación el funcionamiento de la política y los partidos políticos conocidos hasta entonces, carece de funcionalidad con el nuevo modelo.

Su rol, que era realizar una acción armonizadora e integradora de las conflictividades generadas por las relaciones entre el Mercado y la Sociedad, teniendo al Estado como el instrumento esencial para el logro del progreso y desarrollo social, ya no se adecuaba al nuevo tipo societal impulsado por la globalización neoliberal.

Estas situaciones afectan con más intensidad a los partidos de masas, nacidos entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, fundados en identidades nacionales y de clase y con ideologías e intereses bien definidos. En este sentido, la deconstrucción del modelo de globalización neoliberal y la construcción de un nuevo modelo son condiciones imprescindibles para la reconstrucción de la representatividad de los partidos políticos. Como ya lo hemos expuesto en otros ítems, la construcción de un nuevo modelo societal excede la escala nacional por esa razón es que entre sus elementos necesarios consideramos la multipolaridad en la política internacional, la socialización de la renta tecnológica en el desarrollo productivo, políticas basadas en ese desarrollo productivo con justicia social y reconstrucción del rol del Estado, y las organizaciones de estados a nivel regional y mundial. Esta nueva estatalidad deberá estar en capacidad de regular los procesos descritos y constituirá la base para la reconstrucción de las funciones básicas de mediación y articulación de intereses que caracterizaron a los partidos políticos hasta la instauración del modelo neoliberal. Por supuesto que los partidos no podrán pensarse desarrollando sus actividades en la escala nacional sino expandiendo sus actividades a escalas regionales y globales.

3.3.- La subjetividad como campo de batalla principal de las luchas populares.



Nos ha parecido necesario introducirnos en una temática que, a todas luces, puede aportarnos elementos imprescindibles para el logro de una mayor profundización en el análisis de nuestra sociedad.

Para ello, creímos necesario utilizar algunas conceptualizaciones al respecto. En ese sentido es, quizás, Giovanni Sartori una de las voces más autorizadas en el tema. Ya en el año 1998 planteaba en su obra “Homo Videns”, que *“la palabra está destronada por la imagen”... “provocando un fenómeno muy particular, de modo que la relación de las personas con la realidad se configura a través de esas imágenes producidas por los medios de comunicación, que se van repitiendo de modo tan acelerado y múltiple que producen saturación”*. Esta saturación de imágenes que disminuye la capacidad de reflexión, contiene un determinado valor simbólico, un sentido que impacta sobre quienes reciben estos estímulos. De esta manera, los medios de comunicación audiovisual van tejiendo una trama de significados, que resulta ni más ni menos, la manera en que se va construyendo la subjetividad, es decir el modo de pensar, elaborar y aún de sentir de los seres humanos. Creemos que existen otros factores que inciden en esta construcción pero que no parece indispensable su incorporación a este análisis, ya que aquí se trata de penetrar en la comprensión de la subjetividad que es siempre social, es decir conciencia, valores, moral. Así, la subjetividad es cultura y, si nos planteamos la construcción de la subjetividad, de hecho nos estamos preguntando por los sentidos, significaciones y valores que produce determinada cultura.

Esto nos lleva a preguntarnos por el impacto que genera dicha construcción, permeada y direccionada por los medios masivos de comunicación en conceptos tales como el de clases sociales y, básicamente la conceptualización que las personas hacen referida a su pertenencia de clase. De igual modo, en la educación y en la formación en valores. Categorías todas profundamente atravesadas por la estructura de poder de los medios masivos de información.

Queremos, por último, sumar otro aporte que nos resultó esclarecedor al respecto, perteneciente al filósofo José Pablo Feinmann, aparecido en un diario nacional en el año 2004. Allí, manifestaba que... *“el hombre cree que expresa sus ideas, pero expresa las ideas de otros. Cree que habla un lenguaje pero es otro lenguaje el que habla por él. El triunfo del poder comunicacional ha consistido en hacernos creer que aquello que alguien dice es lo que él dice, que las ideas que expresa son sus ideas, que su subjetividad le pertenece y hasta se encuentra habitada por convicciones fuertes, las más fuertes que tuvo en su vida. No habla, es hablado. No tiene subjetividad, se la han colonizado, se la expropiaron y le pusieron otra que habla por él. Sin embargo el se cree más libre que nunca y hasta tiene convicciones que le permite pedir pena de muerte o la expulsión social de los “indeseables”, piqueteros,*



delincuentes, inmigrantes latinoamericanos. Es el nuevo proyecto de dominación mundial: colonizar las conciencias, someter la subjetividad.”

En síntesis podemos decir que, desde la irrupción del psicoanálisis, la subjetividad dejó de ser la capacidad individual de pensar y pensarse, de conciencia y autoconciencia individual, para pasar ser una construcción en la que interviene el inconsciente y, fundamentalmente, la relación del sujeto con los estímulos sociales que lo rodean.

Es así que la lucha por el control o desarrollo de esos estímulos es una batalla que estuvo presente desde el origen de la humanidad.

La globalización neoliberal y su pensamiento único trajo aparejado el triunfo del ideal capitalista como fin último invencible. El sujeto pasó a ser un consumidor conformista alejado de los intereses comunes, colectivos y públicos percibiendo una cierta inutilidad en su propia participación. En nuestro país esto fue apuntalado con el terror durante la dictadura y con el miedo a la miseria y la desocupación durante el menemismo.

Sin embargo diversas formas de resistencia indican que hay maneras de hacer frente al individualismo, que en definitiva es el triunfo de la subjetividad neoliberal. La creación y el fortalecimiento de vínculos grupales con mecanismos y formas democráticas de organización, debe ser una forma de crear nuevas subjetividades en donde poblaciones vulneradas puedan pensarse estableciendo relaciones con las que puedan enfrentar y alejarse del ideal consumista, como así también reconocerse como sujetos de derechos.

Como veremos en el punto siguiente, la batalla por la subjetividad es absolutamente desigual, pero las herramientas no son muy distintas que en otras épocas de la humanidad. Tampoco es nueva esa desigualdad en la batalla. Lo que ha cambiado es la expectativa, el anhelo, los sueños. A principios del siglo XX un periódico contrahegemónico podía tener una tirada y una distribución similar a un periódico comercial porque llevaba implícito una mirada y una estrategia colectiva. Se trata entonces de recrearla.

3.4.- Clase dominante y control hegemónico de los instrumentos de constitución de la subjetividad. La reforma a la Ley de la dictadura.

Los instrumentos tradicionales de constitución de la subjetividad y que cumplen un papel socializador del sujeto (la familia, la educación, las relaciones laborales, las religiones, etc.) han perdido su lugar principal con la irrupción omnipresente de los medios masivos de comunicación. No quiere decir que no sigan operando todos aquellos factores sobre la subjetividad de los seres humanos, lo que no se puede negar es que su incidencia ha disminuido considerablemente.

Tal vez una característica previa de la sociedad actual que explica esto,



sea la reconfiguración del tiempo libre y de ocio asignándole un valor de mayor disfrute cuanto mayor sea el aislamiento y el encierro.

Deberemos sumar también la deslegitimización del discurso político y la construcción paralela de legitimidad de los medios. La realidad es aquella que veo y escucho y no la que me cuenta algún “Otro” que no dejaría entrar en mi casa.

La concentración económica tuvo su correlato en la concentración mediática. Son muy pocos actores los que poseen la propiedad de la mayoría de los canales, diarios, cables y radios de nuestro país. Se trata de grupos que responden a intereses económicos concretos y que lo reflejan sin disimulo en sus líneas editoriales. Pero su objetivo principal es posicionarse como todopoderosos mediante los cuales se puede controlar la mente de las mayorías. Tienen para ello dos estrategias: abonar al desgaste de las representaciones políticas, sociales y del estado del que hablábamos en el punto 3.1 y erigirse en la palabra independiente, racional e incuestionable. Disputarle la hegemonía en la constitución de la subjetividad no debe pasar solamente por el legítimo reclamo de una democratización de los medios sino por contrarrestar desde la organización popular sus dos estrategias, recuperando el valor de la política y deslegitimando su palabra.

La decisión política del Gobierno Nacional al enviar el Proyecto que deroga la ley de radiodifusión de la dictadura creando un nuevo marco democrático y desconcentrador para los Servicios de Comunicación Audiovisual, no solamente será un legado histórico en cuanto a la mejora de la tan mentada mejora de la institucionalidad, sino que contribuye a los objetivos que exponemos al finalizar el párrafo anterior: su sólo debate pone en cuestión la supuesta veracidad de la “realidad comunicada”, exponiendo a los dueños de los medios como portadores de intereses concretos y alejados de una falsa independencia. Y una vez más – como viene sucediendo desde el 2003 – reafirma la capacidad de la política de imponerse a los poderes fácticos.

A más de medio año de aprobado por una importante mayoría parlamentaria y con un abrumador apoyo social, queda expuesto palmariamente que quienes se escudaban en la supuesta libertad de expresión solo pretenden la continuidad de la ley restrictiva de la dictadura. Sin embargo creemos que tendrán muchas dificultades en ese intento. Podrán retrasar con reclamos judiciales la aplicación de la nueva norma democrática pero es casi imposible que aglutinen fuerza social y parlamentaria en pos de beneficiar a algunos monopolios.

Por otra parte el avance tecnológico-digital colaborará en la generación de nuevos canales y nuevas voces, siempre y cuando pueda continuar la



tarea iniciada, en cuanto a que sea el Estado Nacional el que siga trazando la estrategia para el aprovechamiento mas democrático de dichas tecnologías.

Finalmente en este punto queremos señalar la irrupción o reincorporación tanto de sectores de clase media de las grandes ciudades como de franjas juveniles que, incitados por la recuperación del debate político y por la necesidad de visibilizar lo que los grandes medios ocultan, se han apropiado de las nuevas herramientas de comunicación (facebook, blogs, etc.) para eludir el cerco desinformativo y recrear una nueva militancia.

4.- PERSPECTIVAS HACIA EL 2011

4.1.- De la derrota electoral a la recuperación de la iniciativa política.

No hay dudas que el 28 de junio el campo nacional y popular sufrió un retroceso. Si bien en la suma nacional el voto al modelo fue mayoritaria con respecto a la fragmentación opositora, no podemos dejar de visualizar una preocupante disminución en la aceptación ciudadana.

Sin embargo el resultado no pareciera ser un mensaje privatista, desfinanciado del Estado, de regreso al FMI o contrario a la política de Derechos Humanos del gobierno. Seguramente habrá un componente de esas posiciones pero no las creemos mayoritarias. La mayor preocupación está dada por una especie de señal para no avanzar en desentrañar algunos intereses que es preciso tocar en pos de la distribución de la riqueza. El enfrentamiento con determinados sectores de poder no ha sido bien visto por un porcentaje del electorado. Otro sector seguramente votó en contra de las formas y los modos. Y finalmente hubo un sector al que los aumentos de precios y la crisis internacional lo venían golpeando desde hace un año y medio.

La dificultad política mayor será recomponer alguna credibilidad en estos sectores sin dañar la ilusión y las esperanzas de los millones de argentinos y argentinas que seguimos apostando a un modelo productivo con inclusión social.

En ese sentido la recuperación de la iniciativa con propuestas estructurales que hacen a la mejora de la calidad democrática como la Reforma Política y la nueva Ley de Servicios Audiovisuales marcan el camino a seguir para poder avanzar en la profundización del modelo.

Y en la misma línea merecen un párrafo aparte la implementación del Plan Argentina Trabaja, de la Asignación Universal para la niñez y del Programa Conectar-Igualdad. No solamente son medidas de indiscutida



justicia distributiva sino que elevan el piso de asignación de derechos, del cual será muy complicado retroceder.

4.2.- Las nuevas relaciones de poder institucional en el Congreso Nacional y las perspectivas hacia el 2011.

Los resultados de las últimas elecciones parlamentarias configuraron un escenario legislativo de virtual empate. El bloque oficialista cuenta con una indiscutible supremacía en cantidad de diputados y senadores, que lo convierte en la primera minoría. Sin embargo la suma nominal del resto de los bloques, sin coincidencias ideológicas entre sí, dificultaron que esa realidad se expresara en la conformación política-administrativa de las cámaras. A partir de esto, las ansias de los poderes fácticos de anticipar un cambio de rumbo en el país, crearon la sensación (con la ayuda mediática) de que ese conglomerado podía empezar a conducir el destino de Argentina desde el Parlamento.

En un sistema presidencialista como el nuestro, las herramientas para llevar adelante la gestión del Estado recaen sobre el Poder Ejecutivo. En el mismo sentido, la representación legislativa no es fruto de una sola elección sino que expresa la voluntad popular de un período de cuatro años. No tener en cuenta estas cuestiones puede confundir los roles institucionales y



sobreestimar el avance que realmente tuvo la oposición. Ese avance no fue un mandato a cogestionar, ya que estuvo dado en una elección legislativa donde el sentido del voto tiene más que ver con el control y la denuncia. Aventurarse a más, instigados, insistimos, por las corporaciones hegemónicas, le trae a la oposición, hasta el momento, solo desgaste. Si se atribuyeron la misión de conducir el Parlamento y aún no lo pueden concretar, solo están demostrando una huérfana capacidad de gestión y concreción de sus objetivos.

Por el contrario, el oficialismo puede exhibir que aún en las peores condiciones políticas y económicas conservó la iniciativa y la toma de decisiones, que siempre fueron en un sentido progresivo, profundizando cambios, reparando injusticias, priorizando la inversión social. A ello puede sumarle durante los próximos dos años una articulación parlamentaria que vuelva a ampliar su base de acuerdos, demostrando mayor capacidad de negociación que los sectores hoy conducidos por los más inflexibles opositores y por los grupos mediáticos.

Todo ello hace que las perspectivas para el 2011 que, hace unos meses, parecían favorables a la implantación de una restauración conservadora, hoy puedan relativizarse. El sostenimiento y el crecimiento del mercado interno, los efectos de la Asignación Universal por hijo, la vuelta al crecimiento económico y la persistencia en la iniciativa política, consolidan un fuerte núcleo de aceptación hacia el kirchnerismo que hasta la actualidad es difícil de alcanzar aisladamente por cualquier otro grupo.

Los intransigentes estamos convencidos que debemos contribuir a esa consolidación y, sobre todo, a la articulación de sectores progresistas, nacionales y populares, transversales o de centroizquierda, que le pueden aportar al Proyecto Nacional una sumatoria de visiones plurales y de diversidad cultural que pueden ser decisivos.

Como ya dijéramos en otras ocasiones, la Argentina y América Latina toda está pasando por una etapa histórica en la que no nos está permitido, a quienes siempre soñamos con estas transformaciones, permanecer indiferentes. El compromiso con la etapa implica un camino de riesgos, contradicciones, avances y retrocesos. No transitarlo o intentar atajos funcionales al pasado constituirían una contradicción con nuestros postulados fundantes.

El Proyecto iniciado hace siete años, como expresión contrapuesta al neoliberalismo instaurado hace tres décadas, necesita consolidarse y profundizarse. Y el Partido Intransigente debe aportar todo lo que esté a su alcance. A esa tarea nos comprometemos.